

VIENTO

POR UNA IZQUIERDA ALTERNATIVA

SUR

EsPPaña. Juan Trías, José Iriarte "Bikila", G. Buster, Albert Recio, Mikel de la Fuente, Iñaki Uribarri, Jaime Pastor

● **De la "gobernanza" o la constitución política del neoliberalismo.** J. D. Moreno

● **Italia. Nuevo marco político.** Livio Maitan

● **Anti-globalización. De Quebec a Gotemburgo.**

Christophe Aguiton, Naomi Klein ● **Argelia.**

Insurrección en la Kabilia. Baddredine Djahnine

● **Gran Bretaña. Más Blair-liberalismo.** Alain

Thornett ● **13-M 2001. El derecho vasco y la**

democracia en España. José Ramón Castaños



1
el
desorden

internacional

Italia. Nuevo marco político. *Livio Maitan* 7

Anti-globalización. De Quebec a Gotemburgo 17

Una impresión de conjunto. *Christophe Aguiton* 18

El gas que a todos unió. *Naomi Klein* 21

Viernes 15 de junio en Gotemburgo 23

Argelia. Insurrección en la Kabilia. *Rouge* 29

Gran Bretaña. Más Blair-liberalismo. *Alan Thornett* 33

Recortes. Israel/Palestina. Los palestinos contra la pared. *Michel
Warszawski.* Bush. Terrorismo ambiental. 37

2
miradas

voces

Fotos de *Alberto Hilario* 41

3
plural

plural

EsPPaña

Exacerbación y reformulación del nacionalismo español. *Juan Trías
Vejarano* 47

La fallida reconquista. *José Iriarte "Bikila"* 54

La política exterior del PP: querer y no poder. *G. Buster* 58

La política económica del PP: neoliberalismo a la española. *Albert Recio* 71

El Acuerdo sobre Seguridad Social del 2001. *Mikel de la Fuente* 79

Otra vuelta de tuerca de la flexibilidad y la precarización. *Iñaki Uribarri* 86

Entre la crisis de la derecha españolista y la lenta reconstrucción de una
"izquierda de izquierdas". *Jaime Pastor* 93

De la "gobernanza" o la constitución política de neoliberalismo. *J.D.
Moreno* 99

4
voces

miradas

María Ángeles Maeso 109

5
notas y

documentos

Elecciones Vascas del 2001. El derecho vasco y la democracia en España. *José
Ramón Castaños* 115

6
nuestra

gente

Recordando a Pau Pons. *Martí Caussa* 125

Propuesta gráfica de *Ricky Martir*

Consejo Editorial:

José Ramón Castaños
Montserrat Cervera
Petxo Idoyaga
José Iriarte "Bikila"
Miren Llona
Juana López
Gloria Marín
Cristina Monje
Justa Montero
Joaquín Nieto
Iñaki Olano
Alberte Pagán
Jaime Pastor
Oriol Quart
Daniel Raventós
Iñaki Urbarri
Enrique Venegas
Begoña Zabala
Francisco Javier Zulaika

Redacción:

G. Buster
Antonio Crespo
Mikel de la Fuente
Lourdes Larripa
Pepe Mejía
Alberto Nadal
Carmen Ochoa
Miguel Romero
Flora Sáez

Diseño original:

Jerôme Oudin &
Susanna Shannon

Dirección de arte:

Jaime Gil Sánchez

Maqueta:

Escala 7

**Redacción, administración
y suscripciones:**

c/ Limón, 20 - bajo ext. dcha.
28015 - Madrid
Tel.: 91 429 77 37
Fax: 91 559 94 65
Correo electrónico:
vientosur@nodo50.org
Página web:
http://nodo50.org/viento_sur

Imprime:

Perfil Gráfico, S.L.
C/ Medea, 4 - 1º C
Edificio Ecu, Madrid

DL: B-7852-92
ISSN: 1133-5637

Precio:

1.000 pesetas (IVA incluido)

Han colaborado en este número:

Christophe Aguiton

Es responsable de relaciones internacionales de ATTAC-Francia. Ha publicado recientemente "Le monde nous appartient", en la editorial Plon.

Baddredine Djahnine

Es militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) de Argelia.

Alberto Hilario

Es fotógrafo.

Naomi Klein

Editora de *Saturday Night*, colaboradora de *The Nation*. La editorial Paidós ha publicado la traducción al castellano de su libro "No logo. El poder de las marcas".

María Ángeles Maeso

Licenciada en Filología Hispánica y poetisa.

Livio Maitan

Dirigente de la IV Internacional y de Rifondazione Comunista.

J.D. Moreno

Es sociólogo.

Albert Recio

Es miembro del Consejo Editorial de *mientras tanto*

Juan Trías Vejarano

Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.

La derrota del PP en las elecciones vascas del pasado 13 de mayo ha significado el primer revés serio que recibe Aznar, desde que logró la mayoría absoluta, o incluso desde su llegada al poder hace ya más de cinco largos años. Hemos pensado que éste era un buen momento para analizar la política general del PP, un proyecto mucho más consistente de lo que pueda hacer aparecer la cutrez ideológica que lo envuelve y, sobre todo, un programa que sirve a los intereses sociales que lo sostienen con una claridad y una determinación que, en este aspecto, siempre está ausente cuando gobierna la “izquierda”.

La mayoría absoluta del PP está teniendo importantes consecuencias. La base de todas ellas es la idea de “poder estable” que se difunde en toda la sociedad (estable no solamente por esta legislatura, sino con muchas probabilidades de prolongarse, aunque quizás sin mayoría absoluta; la política de Rodríguez Zapatero –“mi estilo”, como gusta decir– está contribuyendo involuntariamente decididamente a difundir este mensaje subliminal). Ahí se apoya la reforzada capacidad de iniciativa del gobierno y el descenso de expectativas de las fuerzas sociales y políticas instaladas en la cultura de pacto: fundamentalmente, Convergencia i Unió y los sindicatos.

En cuanto a las organizaciones políticas que deberían presentarse como “alternativas”, sólo IU y el PNV han aceptado el envite, con las características, posibilidades y limitaciones propias de cada cual. Respecto al PSOE de Zapatero, lo que entiende por “alternativa” no necesita mayores comentarios si recordamos el Pacto Antiterrorista (otro de los perdedores de las elecciones vascas), el Plan Hidrológico Nacional (“se trata de desarrollar la misma política hidrológica del gobierno, con la única diferencia de que a medio plazo probablemente resulte más agresiva”, decía en nuestro número anterior José Galante) y, en fin, todo lo que ha ocurrido en torno a su propuesta de reforma del IRPF (empezando, claro, por el contenido de la propuesta, pero considerando también la falta de convicción con la que la han defendido y sin olvidar el rubor adolescente con que han recibido y exhibido los elogios de los Departamentos de Estudios de algunos grandes bancos).

En estas condiciones, Aznar ha considerado que, al menos, en el primer bienio de su nuevo mandato podía apretar el acelerador. Para ello ha elegido dos carriles de autopista: en primer lugar, una operación de marketing político-económico-ideológico para potenciar la marca “España”; en segundo lugar, la culminación de la política de privatización, entendida también como una operación compleja que injerta un nuevo grupo –constituido por un cruce de políticos y empresarios afines– en la cumbre del capitalismo español, reorienta la política exterior, va abriendo brechas en las casamatas más resistentes de la política social (fondos de pensiones, privatización de la sanidad...) y transmite a la ciudadanía la “moral neoliberal” que la privatización lleva consigo. Estos son los temas generales que se analizan en los artículos del *Plural*. **Juan Trías** estudia las raíces y la práctica del “nacional-monarquismo que, como señala, ha tenido versiones anteriores, pero ahora lleva adelante el PP con especial agresividad y sin detenerse ante cualquier manipulación histórica que se considere conveniente. **José Iriarte “Bikila”** analiza el mismo fenómeno pero desde la perspectiva de una nacionalidad oprimida y contando con

los datos de las elecciones del 13 de Mayo. **G. Buster** hace una evaluación global de la política exterior, prestando una atención especial a la política europea (la cual, conviene recordarlo desde ahora, estará en el centro del desafío político más importante que tenemos a medio plazo: la respuesta al semestre de presidencia española de la UE, enero-junio 2002) y comprendiendo la política exterior dentro del proyecto global de la derecha española. **Albert Recio** se ocupa de la política económica, especialmente de la estrategia de privatización; destacamos que en su conclusión nos recuerda muy oportunamente que, además de la imprescindible crítica, hay que dedicar esfuerzos a pensar sobre los problemas de una gestión social alternativa. **Mikel de la Fuente** analiza la reforma de la Seguridad Social, muy limitada en su contenido, pero no así en sus consecuencias políticas (ruptura del "frente único" CC OO-UGT por primera, y probablemente no última vez) y en las brechas peligrosas que abre de cara al futuro. **Iñaki Uribarri**, continúa la serie de análisis de las reformas del mercado de trabajo que lleva haciendo, con mucho acierto, desde hace años en nuestras páginas. Al final de su artículo, recuerda a CC OO y UGT que todo parece indicar el agotamiento del "ciclo pactista". Ni él creará, ni nosotros creemos que vayan a prestar mucha atención a una constatación tan obvia. En fin, **Jaime Pastor** pone en relación la política de la derecha con las tareas de la izquierda en general y de la izquierda alternativa, muy en particular, cuando existe mayor potencial de resistencia social, pero no de capacidad de acción política.

"Gobernanza" es un arcaísmo convertido en neologismo del pensamiento político neoliberal. **J.D. Moreno** parte de él para desarrollar un estimulante análisis de la reorganización de los espacios públicos y privados que se va extendiendo sin que se le preste la atención que merece por parte de la izquierda, o lo que es peor se caiga en el pantano enredados en fantasías sobre la "sociedad civil". *"Malos tiempos para la democracia"*, dice nuestro colaborador y cada día hay nuevas razones que lo confirman en todos los planos de la vida social. Buen signo de estos "malos tiempos" es cómo se desenfoca el propio problema hasta hacerlo inofensivo con fórmulas tipo "déficit democrático" que reducen la cuestión a una gama más o menos bienintencionada de reformas institucionales. Pero no un problema de déficit, sino de la propia "Constitución política" del neoliberalismo, no codificada, pero sin duda existente, de la cual nuestro colaborador encuentra un precedente muy inquietante en un texto de referencia de Mussolini.

Hablando de personajes italianos inquietantes, ahí tenemos al nuevo patrón Berlusconi. No hubo sorpresas en los resultados de las elecciones generales, ligeramente corregidos por las municipales. Los analiza para nuestra revista, como en otras ocasiones, **Livio Maitan**. Hay que decir que son los peores resultados para la izquierda en unas elecciones en la UE desde hace muchos años. El problema no está sólo en el ganador (que demuestra a su manera aquella gracia –"hay que enterrar a Montesquieu"– que tantos disgustos costó a Alfonso Guerra; Il Cavaliere reúne los poderes económico, político y mediático de forma visible; y tampoco se las maneja mal con el "poder judicial" considerando cómo va escapando de los procesos que parecía iban a acabar con él). Está también en la oposición, encabezada por un político como Rutelli, que parece hecho ex profeso para jugar al tenis. La única votación que puede considerarse de izquierdas con fundamento es el 5% de Rifondazione. Que esto ocurra en Italia da una idea de las catástrofes que los PC europeos han protagonizado en los últimos 30 años. Y todavía hay quien considera a Berlinguer "uno de los nuestros"...

Estamos viviendo una etapa muy intensa del “movimiento contra la globalización”, desde la Cumbre de las Américas de Quebec hasta Barcelona 2001 (que ha coincidido con nuestro cierre; nos ocuparemos de ella, junto con los acontecimientos que se esperan en Génova en el próximo número), pasando por Gotemburgo. Lamentablemente el efecto mediático ha enfocado a la violencia como debate principal. Y es sin duda un debate importante, pero corremos el riesgo de quedarnos atrapados en él. Le dedicamos, en todo caso, un espacio importante porque tras la difusión de una valoración de **Susan George**, en nuestra opinión, muy desorientada, sobre los sucesos de Gotemburgo, la revista de ATTAC *Francia Grain de Sable* ha publicado una serie de opiniones que es interesante conocer y, por razones que no entendemos, no han sido difundidos aquí por las mismas vías que distribuyeron muy ampliamente el texto de Susan George. Pero junto a este tema, analizamos otros aspectos de del movimiento con textos muy polémicos de **Christophe Aguiton** y **Naomi Klein**. Y anunciamos que estamos preparando un *Plural* sobre las complejas relaciones “violencia-izquierda alternativa” en el que esperamos poder tratar en profundidad los principales temas polémicos presentes con más o menos claridad en el debate, desde la “legitimidad” de las violencias, hasta la desobediencia civil y otras formas de resistencia no violenta, pero también criminalizadas en la ofensiva mediática en curso.

La movilización de la Kabilia argelina el pasado 14 de junio ha mostrado la impresionante extensión y arraigo popular del movimiento, una de las mayores esperanzas de movilización social que existe hoy en el Magreb. Merece una atención y solidaridad de la izquierda que ya va siendo hora que se quite de encima, quien lo necesite, la consideración del régimen argelino como “antiimperialista y progresista”. Decimos esto ante la noticia de que una delegación de las juventudes de IU se dispone a participar en un Festival de la Juventud, patrocinado por el gobierno Buteflika y continuador de aquellos fastos que en los tiempos del “campo socialista” dieron fama a la Rumania de Ceausescu, a la Bulgaria (pre-monárquica) y otros “anti-imperialismos”.

En Gran Bretaña, pese a la nueva victoria, menos rotunda de lo que parece, de Blair, están ocurriendo cosas muy interesantes en la izquierda alternativa. Damos cuenta de ellas y las seguiremos con mucha atención.

En fin, publicamos un amplio análisis de **José Ramón Castaños** sobre las Elecciones Vascas. Pero lamentablemente nos hemos quedado sin espacio para informar y manifestar nuestro apoyo a la Conferencia de Paz que está impulsando *Elkarri*. Y pedimos excusas porque por razones que sería prolijo explicar seguimos sin contar con un artículo como el que venimos buscando desde hace tiempo para dar cuenta de la formidable lucha de Sintel.

Aunque sea en un par de líneas recordamos también otra lucha que queremos apoyar: la del periódico “*La Realidad*” de Cantabria (www.larealidad.net) cuya calidad, coraje e imaginación ha conseguido salir adelante, cuando tantos proyectos de información bienintencionados fracasan, y ha provocado las iras del poderoso bunker derechista cántabro. Esto demuestra que lo están haciendo bien, pero también exige que se les eche una mano solidaria. Aquí está la nuestra para lo que la puedan necesitar.



RICKY MARTIN 2001

1 el desorden internacional

Italia

Nuevo marco político

Livio Maitan

La perspectiva de una victoria de Berlusconi en las elecciones legislativas del mes de mayo había provocado reacciones bastante vivas de los medios políticos e influyentes órganos de prensa de varios países europeos, que expresaban dos preocupaciones mayores: la utilización que un personaje de tal poder económico haría del poder político y la amenaza que una coalición compuesta, además de por la formación de Berlusconi, por un partido populista de derechas como la Liga de Umberto Bossi y por los herederos del partido neofascista, representaría para las instituciones democráticas de la península. Son sobre todo estos mismos temores los que se esfuerza en explotar a su favor la coalición de centro izquierda el Olivo para convencer a los electores de izquierda de darle su confianza, a pesar de decepcionantes resultados de los gobiernos Prodi, D'Alema y Amato que se han sucedido en el curso de cinco años. Los resultados del escrutinio del 13 de mayo, de los que Berlusconi ha salido indudablemente ganador a nivel de escaños tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, no podían si no acentuar estas preocupaciones y provocar en amplias capas de electores una oleada de desconcierto.

A quienes han hablado de un plebiscito para Berlusconi o de un maremoto, hay que recordarles en primer lugar las cifras. La coalición del centro derecha en su conjunto ha conseguido una amplia mayoría de escaños, pero no la mayoría de los votos. Además, en relación a 1996 ha perdido más de un millón de votos (el número de abstencionistas no ha cambiado mucho). Por su parte, el Olivo casi no ha perdido votos y si se suman sus votos a los del PRC y otras formaciones que no pertenecen a ninguna coalición, se obtiene un total superior a los del

centro-derecha. Por otra parte, el partido de Berlusconi, Forza Italia, ha progresado muy sensiblemente, pero no ha superado el 30%, porcentaje ya alcanzado en las europeas de 1994. En cualquier caso, su avance se hace esencialmente en detrimento de sus aliados, principalmente de la Liga del Norte que no ha alcanzado siquiera el *quorum* del 4% necesario para participar en la distribución proporcional de los escaños para la Cámara de Diputados.

Finalmente, si se quiere tener una idea de la situación de conjunto, hay que tener en cuenta también que, dos semanas después de las legislativas, el Olivo ha conseguido un innegable éxito en la segunda vuelta de las municipales parciales manteniendo la mayoría en ciudades como Roma, Turín y Nápoles (el centro derecha había ganado Milán en la primera vuelta) /1.

Estos resultados no harán olvidar, sin embargo, que el partido más fuerte del Olivo, los Demócratas de Izquierda, (DS), ha registrado el 13 de mayo un serio retroceso (16,6% frente al 21,1% en 1996) mientras que una formación centrista heterogénea, de la que forman parte antiguos demócrata cristianos y el líder de la coalición, Francesco Rutelli, ha alcanzado, ante la sorpresa general, el 14,5%.

Segunda edición

Dicho esto, hay que plantear o plantearse de nuevo tres cuestiones: ¿qué es lo que representa la coalición de Berlusconi social y políticamente? ¿Ha conocido transformaciones desde 1994? ¿Estará en condiciones de estabilizar la situación italiana tras casi diez años de crisis y conmociones políticas?

Tras la victoria de Berlusconi en 1994, escribíamos: "*Forza Italia ha nacido por iniciativa de un gran patrón que, para alcanzar sus fines, utiliza sin vergüenza las estructuras de su reino financiero y los poderosos medios de comunicación que posee. Su partido ha sido creado desde arriba y está totalmente identificado a su persona. No sería abusivo hablar de empresa bonapartista, tanto a causa del papel decisivo del jefe que se pretende carismático como del papel de mediador hegemónico que ese jefe ha jugado para unificar las diferentes componente de la derecha. Había un vacío que llenar y Berlusconi lo ha comprendido a tiempo: esa es la clave de su éxito*" /2. Ese vacío creado tras el hundimiento de la coalición de larga duración, basada en la alianza entre la democracia cristiana y el Partido Socialista de Craxi, que había reinado a lo largo de un cuarto de siglo. El nuevo centro izquierda, donde el papel de primera línea correspondía a la formación salida del viejo partido comunista (Partido de la Izquierda Democrática, PDS, y luego Demócratas de Izquierda, DS), se pretendía candidato a la sucesión. Pero todos los que sin aceptar, por diferentes razones, tal sucesión, intentaban otra solución, apostaron por Berlusconi.

1/ En Roma y Nápoles, la coalición ganadora incluía al PRC.

2/ *Inprecor* n° 381, junio 1994, edición francesa.

Su rápido fracaso, como consecuencia de las contradicciones que estallaron en su heterogénea coalición y bajo la presión de poderosos movimientos de masas en defensa de las jubilaciones en el otoño de 1994, abrió el camino a la llegada al poder del centro izquierda tras las elecciones de 1996.

Es, sobre todo, la deriva del centro izquierda, tanto en el terreno socio-económico (aceptación, incluso idealización de la política neoliberal) como en materia de política internacional (apoyo incondicional de la guerra contra Serbia y del nuevo pacto de la OTAN) lo que ha ayudado al centro derecha y finalmente le ha permitido volver al poder. Pero hay que añadir que Berlusconi había aprendido la lección tanto de 1994 como de 1996 (cuando había caído tras la ruptura de la Liga Norte). Ha intentado estructurar mucho más su partido intentando, con resultados importantes, enraizarlo en la llamada "sociedad civil", y no hacerle aparecer como una réplica de su empresa. Ha apoyado con éxito, como candidatos a alcaldes del centro derecha en las elecciones municipales, a personajes independientes como el alcalde de Milán, reelegido el 13 de mayo, y el de Bolonia. Se ha dado una imagen de hombre de Estado responsable apoyando las iniciativas del gobierno de centro izquierda en la Unión Europea y alineándose con él en la guerra de los Balcanes. Como ya hemos subrayado **13**, ha obtenido un estatuto internacional por su integración en el Partido Popular Europeo en el parlamento de Estrasburgo. Nueve meses antes de las elecciones ha fortalecido su coalición encuadrando más de cerca a la Alianza Nacional, que había renunciado ya a disputarle la dirección de la coalición, y ha restablecido los lazos con la Liga Norte mediante un matrimonio de interés que ha alcanzado el doble resultado de hacer posible el éxito electoral y reducir al mínimo a su reencontrado aliado.

"Il cavaliere"

Se ha hablado y se habla de un pretendido populismo de Berlusconi. No hay que decir que cualquier comparación con el populismo ruso del siglo XIX y los populismos de América Latina de los años 40 y 50 estaría desprovista de fundamento. En cambio, tal caracterización tiene, al menos parcialmente, un sentido si se llama populista un planteamiento político-ideológico con los siguientes rasgos: la pretensión de representar al pueblo en oposición a los políticos, de colocarse al lado y en proximidad de los ciudadanos; una descripción de la realidad bajo forma de denigración sistemática y sin matices de los defectos de sus adversarios o concurrentes; la definición de remedios simples y no políticos; el acento en la urgencia de reformar el marco socio-institucional existente **14**. Por otra parte, Berlusconi se ha esforzado en varias

3/ id. n.º. 457, abril 2001.

4/ Un interesante artículo sobre las diferentes formas de populismo ha sido escrito recientemente por Guido Caldiron, joven militante del PRC, de formación marxista (*Il Manifesto*, 12 mayo).

ocasiones en aparecer como un partidario del neoliberalismo menos ortodoxo que los del Olivo, predicando no una economía de mercado sin más, sino una economía social de mercado...

Es cierto que Berlusconi debe su victoria sobre todo a su capacidad de expresar sensibilidades, sentimientos, reflejos regresivos, incluso claramente reaccionarios, que existen en el momento actual en capas bastante amplias de la sociedad. Por ello goza efectivamente de un apoyo popular que no se limita en absoluto a ciertas regiones del país, incluso si es aún relativamente más débil en regiones de la Italia central. Es más alarmante, por otra parte, que el centro-derecha haya conseguido un éxito extraordinario en Sicilia, lo que indica sin duda alguna que la mafia estima que bajo Berlusconi podrá continuar gestionando más tranquilamente sus asuntos y su propia sociedad. En cuanto a la Iglesia Católica, sabe que no puede influir las elecciones como lo hacía en los mejores años de la Democracia Cristiana y se inspira en una cierta prudencia, pero considera con razón que algunas de sus reivindicaciones en materia de defensa de la familia, de escuelas privadas, incluso de aborto podrían tener ahora una mayor audiencia a nivel parlamentario y electoral **5**.

Finalmente, Berlusconi goza ahora, mucho más que en 1994 y en 1996, del apoyo y del prejuicio favorable de muy amplias capas patronales, que, ciertamente, no tenían mucho de qué quejarse con los gobiernos del centro izquierda, pero que nunca han dejado de exigir medidas neoliberales aún más radicales y una mayor estabilidad gubernamental. El mensaje más simbólico es el recibido de Gianni Agnelli, el decano reconocido de la patronal italiana, criticando a fondo a la prensa extranjera que había criticado a Berlusconi y colocándose a su lado. Es cierto que en 1994 también Agnelli había votado en el Senado por el gobierno de centro derecha, pero no había apoyado que Berlusconi se convirtiera en primer ministro. Además, la organización patronal de la industria, la poderosa Confindustria, está dirigida ahora por un "joven lobo", Antonio D'Amato, que no oculta su voluntad de explotar el nuevo marco político para empujar más lejos la ofensiva antiobrera.

¿Está en peligro el marco democrático?

Militantes y ciudadanos, en Italia y fuera de Italia, se interrogan sobre el peligro que la llegada de Berlusconi podría representar para las instituciones democráticas que existen desde la adopción de la Constitución de 1948.

La cuestión debe ser abordada desde diferentes ángulos. El centro derecha se ha pronunciado desde hace tiempo por una reforma constitucional que, según sus propias palabras, debería tener lugar según los procedimientos previstos por la

5/ No hay que olvidar sin embargo que el centro izquierda ha hecho ya, por ejemplo en lo que concierne a la escuela, concesiones muy importantes al sector privado y por tanto a la Iglesia católica.

propia Constitución. En general, apunta a dar un sello más presidencialista al sistema político italiano y al mismo tiempo a aumentar las autonomías regionales. Querría, parece, poner en cuestión incluso la primera parte de la Carta, principalmente los artículos de inspiración social y el papel del Estado. Pero nada preciso ha sido planteado hasta ahora por la coalición como tal. Hay, por otra parte, que suponer que al menos por el momento, Berlusconi no tiene la intención de poner en cuestión bajo ninguna forma el marco europeo. Dicho esto, son completamente legítimos los temores que inspira el hecho de que el control del poder ejecutivo va a pertenecer al hombre más rico del país que está presente con fuerza en varios sectores económicos y, además, posee casi todas las redes nacionales privadas de televisión. La última campaña electoral nos ha dado una primera muestra de este peligro. Berlusconi ha utilizado recursos gigantescos sin comparación posible con los recursos de los que disponían todos los demás candidatos, por no hablar de los recursos espartanos de Refundación Comunista.

Por otra parte, el centro izquierda en el gobierno no ha dado pruebas de sobriedad. Ha utilizado sin vergüenza las redes de la televisión pública despreciando las reglas democráticas más elementales. Si teníamos necesidad de convencernos de que, en un marco institucional burgués, los derechos democráticos son a menudo una cáscara vacía para el común de los mortales, es decir para todos los que no disponen de riquezas ni de poder político, la última campaña electoral italiana nos ha proporcionado una prueba sin discusión posible.

Más generalmente, se habrá constatado y se constata una tendencia profunda que opera tanto en los países pretendidamente más democráticos. Los ciudadanos son cada vez más expoliados de poder de decisión real. Las opciones macroeconómicas que determinan, en último análisis, su suerte, las opciones estratégicas políticas y con más razón las militares, no dependen en la menor medida de los ciudadanos. La crítica más grave que se puede dirigir fundamentadamente a los gobiernos de centro izquierda es no haber contrarrestado esta tendencia, sino al contrario, el haberla propulsado aún más. La decisión tomada por el gobierno Amato tras el 13 de mayo, en el momento en que habría debido limitarse a gestionar los asuntos corrientes, de preparar una militarización con bloqueo terrestre, marítimo y aéreo de la ciudad de Génova con vistas a la reunión de los G8 es un ejemplo último sobre esto. Así, la tarea del futuro gobierno será sensiblemente facilitada.

Si elige la represión podrá cubrirse con las últimas decisiones ya adoptadas, si elige permitir las manifestaciones aparecerá como más democrático que sus predecesores. Más allá de las derivas del centro izquierda y de lo que podría ocurrir en el mes de julio en Génova, no hay la menor duda de que esta tendencia estructural a una erosión del marco democrático se acentuará bajo el reinado berlusconiano. En qué medida y con qué conclusiones dependerá fundamentalmente de la dinámica socioeconómica en Italia, en la Unión Europea y, en último análisis, a escala mundial.

Es cierto que Berlusconi tendrá dificultades con sus aliados, que salen bastante frustrados de la prueba electoral y deberá al mismo tiempo hacer frente en el terreno institucional, a tendencias centrifugas regionales que habrá contribuido a alimentar por su oposición a los gobiernos de centro izquierda y para lograr el objetivo de asegurarse el apoyo de la Liga Norte. Pero, puesto que su partido dispone por él mismo de una mayoría de escaños en las dos cámaras, no se podría contemplar una repetición de lo ocurrido a fines de 1994 cuando el conflicto con Bossi. Por ello, repitámoslo, el futuro del nuevo gobierno estará condicionado, en primer lugar, por su capacidad de mantener las promesas electorales, principalmente en materia de recortes fiscales importantes y de aumento de las jubilaciones, lo que no será fácil en el marco actual de ralentización económica y en el respeto del Pacto de Estabilidad de la Unión Europea.

Por supuesto que, si Italia conociera un crecimiento importante y, en tal contexto, Berlusconi podría restablecer una concertación con las centrales sindicales, la hipótesis de una consolidación del nuevo marco político y de una estabilidad de una cierta duración no estaría descartada. Pero, al menos por el momento, tal dinámica no es previsible.

Además, en el curso de estos últimos meses, ha habido un relanzamiento indudable de las luchas, aunque aún no generalizado. El sector que sigue siendo el más importante de la clase obrera, el de los trabajadores de la metalurgia, se ha implicado en una batalla prolongada por la renovación de la negociación colectiva y con ocasión de una reciente huelga nacional centenares de miles de trabajadores han desfilado por las calles de toda una serie de ciudades y sobre todo en Turín y Milán.

En segundo lugar, una ola de luchas estudiantiles se ha producido en los meses de marzo y abril en varios centros universitarios, principalmente en Roma. Por otra parte, el movimiento contra la mundialización se está ampliando, lo que podría tener efectos positivos a nivel tanto político como cultural. En este sentido, la de julio en Génova es más que nunca una cita importante.

Refundación salva los muebles

El Partido de la Refundación Comunista (PRC) ha sido sometido a una dura prueba a lo largo de la campaña electoral y en los días que siguieron al anuncio de los resultados. Los portavoces del Olivo, periodistas que se proclaman democráticos y/o de izquierda, intelectuales "maestros en pensar", han rivalizado en una especie de caza de brujas contra el PRC y, en particular, contra su secretario Fausto Bertinotti, denunciados como culpables de haber ayudado a Berlusconi a convertirse en primer ministro. De hecho, conscientemente o no, toda esta "buena gente" ha revelado o confirmado una concepción de la política que no tiene nada en absoluto de principista. ¿Las ideas, los programas, los proyectos? ¡Todo eso a la basura! Lo esencial es ganar votos, escaños, puestos ministeriales.

Aunque el propio candidato del Olivo, Francesco Rutelli, tuvo que admitir que un acuerdo político con el PRC era absolutamente imposible, y aún más imposible habría sido gobernar juntos...

Más aún, no sólo el Olivo preparó su derrota durante cinco años con su política neoliberal y pro-imperialista, sino que olvidando su fracaso del pasado año en el referéndum en materia electoral, se ha obstinado en mantener un sistema fundamentalmente antidemocrático, hasta lo demencial. Ni siquiera ha querido corregir el sistema en vigor para el Senado, y en cuanto a la Cámara de Diputados ha debido recurrir, de acuerdo con el partido de Berlusconi, a un verdadero timo, ignorando los avisos del presidente de la República. En definitiva, todos los acusadores de Refundación se cuidan mucho de tomar nota de un dato elemental: si se hubiese introducido un sistema proporcional, como lo pedía el PRC, Berlusconi no habría obtenido la mayoría. Por último, no hay ninguna prueba de que con un pacto electoral se habrían sumado los votos del Olivo y del PRC; muy probablemente, una parte de los electores del PRC se habría abstenido y una parte de los electores del Olivo se habría desplazado hacia el centro-derecha.

Hay que subrayar, por lo demás, que el PRC ha sufrido los ataques no sólo de sectores de una izquierda DS, que políticamente es bastante fantasmal, sino también de una parte de la izquierda llamada "radical" que había criticado constantemente a los gobiernos de centro-izquierda. Estas gentes han sido bastante magnánimas al invitar a votar PRC para la cuota proporcional (25% de los escaños) en la Cámara de Diputados pero, olvidando que nuestra decisión de no presentarnos a la elección al escrutinio uninominal en la primera Cámara (75%) permitiría al Olivo conseguir una treintena de escaños más, han llamado a no votarnos para el Senado. El autor de este artículo ha sido objeto de uno de los ataques del diario *Il Manifesto*. Este periódico, después de haber rechazado la publicación de un corto llamamiento de los candidatos a senadores del PRC en Roma, en vísperas de la votación, esto es, cuando ya era imposible responder de ninguna forma, publicó toda una página sobre el voto en Roma explicando especialmente que no había que votar a Livio Maitan ni a ningún otro candidato de Refundación, sino a los candidatos del Olivo. En este caso, mi competidor era un ministro del gobierno Amato, perteneciente a DS, que había aprobado todas las decisiones adoptadas por la coalición, tanto socio-económicas como políticas (incluyendo la guerra en Kosovo).

A pesar de estas campañas, el PRC ha aguantado el golpe: 5% de votos, tanto en la Cámara (11 electos) como en el Senado (4 electos), el único partido fuera de cualquier coalición que ha alcanzado el *quorum* del 4% necesario para participar en la distribución de escaños. Hay que añadir que partidos miembros de las dos coaliciones tampoco han alcanzado el *quorum* y sólo estarán representados por electos de las coaliciones en el escrutinio uninominal. En particular, los Verdes han tenido una suerte lamentable: la lista común (bautizada

girasol) que habían presentado junto a una pequeña formación socialista, afiliada a la Internacional Socialista, no ha conseguido más que un 2,9%. El partido de Cossutta, procedente de la escisión del PRC de octubre de 1998, quedó barrido (1,7%) y sólo sobrevive como quinta rueda de los DS que le han concedido algunos diputados (en el escrutinio uninominal) y algunos senadores, unos y otros elegidos en las filas de la coalición...

Sólo relativamente “satisfactorio” ...

Dicho esto, hay que admitir que el resultado del PRC sólo es satisfactorio en el contexto dado. No se puede olvidar que en 1996 Refundación había obtenido el 8,6% (por el contrario, sólo el 4,3% en las europeas de 1999). La conclusión compartida unánimemente es que el PRC es sobre todo un partido de opinión, que obtiene votos gracias a su imagen de oposición radical, que tiene una influencia de masas, pero desprovista de un verdadero enraizamiento social, con algunas excepciones. La campaña electoral, llevada a cabo en la más completa autonomía, se ha caracterizado sobre todo por las intervenciones radicales de Fausto Bertinotti, cuyos mítines han atraído a numerosos jóvenes. La iniciativa que ha contado sin duda con mayor éxito se ha desarrollado en Roma, con la participación de muchos intelectuales y con un ambiente muy entusiasta. Los pasajes más aplaudidos del discurso fueron los más combativos, como éste: *“La novedad es que el capitalismo y la innovación están separados ya del progreso social y se revelan contradicciones radicales: la política sólo tiene sentido a condición de mostrarse capaz de criticar la lógica del mercado y de la empresa, comenzando por su punto más alto, la revolución”*.

La instancia más amplia del partido, el Comité Político Nacional, reunido el 26 y 27 de mayo, hizo el balance de las elecciones. De hecho, abrió al mismo tiempo el debate para el próximo Congreso, que tendrá lugar en la primavera del próximo año. Las diferentes sensibilidades que existen, incluso en el secretariado, se han manifestado esta vez también bajo formas camufladas o muy matizadas, en particular sobre la actitud a tener hacia los DS o la izquierda llamada liberal y sobre cuestiones organizativas. Está claro para todo el mundo que hay que continuar una construcción autónoma del partido. Pero existen ambigüedades, o incluso diferencias, sobre la orientación en la actual fase. Una corriente, que se podría denominar “continuista”, para quien el PCI sigue siendo un punto de referencia, parece apostar, si no a una regeneración (aunque la palabra ha sido utilizada en un debate en la dirección), al menos a una reorientación de los DS, que preparan en breve plazo un congreso que se anuncia muy caliente. Más allá de todos los matices, el dilema de los DS es el siguiente: construir una especie de partido demócrata, incluyendo al Olivo en su conjunto (Veltroni), o mantener el Olivo como una coalición, en la cual los DS jugarían el papel de un partido socialdemócrata, ligado al “socialismo europeo”.

Es evidente que el PRC tiene todo el interés en evitar cualquier reflejo o repliegue sectario y en mantener un diálogo con lo que se llama la izquierda moderada o liberal. Bertinotti había anunciado desde hace algún tiempo la perspectiva de una "izquierda plural". Pero antes hacía referencia explícita a la experiencia francesa, mientras que ahora lo propone más bien como una hipótesis de trabajo. En sus conclusiones ha mencionado, de paso, las dificultades del PCF y al mismo tiempo el papel jugado por la LCR y Lutte Ouvrière. Ha improvisado incluso una reflexión que no deja de tener fundamento: movimientos y sensibilidades que en Francia existen bajo formas específicas, en Italia se encontrarían grosso modo en el interior del PRC ⁶. En conclusión, ha esbozado los temas a debatir a la vista del congreso: un análisis sistemático de la fase actual tanto a nivel nacional como internacional; la definición de objetivos susceptibles de propulsar una dinámica que rompa la lógica de la globalización neoliberal; la construcción del movimiento Seattle-Porto Alegre dentro de esta óptica.

Enfoques y realidad

Por nuestra parte, hemos compartido este punto de vista que lleva a abordar en lo fundamental los mismos problemas que estamos discutiendo en nuestro movimiento internacional. En todo caso, hemos subrayado más de una vez el corte enorme que existe entre estos enfoques políticos y la realidad del partido. La última campaña ha revelado una vez más prácticas lamentables, concepciones electoralistas y oportunistas a corto plazo y comportamientos, incluso por parte de algunos dirigentes, en contradicción no sólo con los estatutos sino también con las normas de conducta fijadas para la campaña electoral. Es bastante desconcertante que cuando se plantean estas críticas en las instancias de dirección, nadie las conteste, se da prudentemente la impresión de estar de acuerdo y el problema continúa siendo esquivado. Pero el congreso tendrá que acabar por debatirlas, bajo pena de avalar desviaciones peligrosas.

La dirección del partido ha cumplido su tarea estatutaria de elegir a los presidentes de los dos grupos parlamentarios. Por una amplia mayoría, ha confirmado para la Cámara de Diputados a Franco Giordano. Pero la novedad ha sido la elección por unanimidad para el Senado del electo milanés Gigi Malabarba, militante revolucionario y obrero de Alfa Romeo, despedido ilegalmente por Fiat y uno de los principales dirigentes de la Confederación Unitario de los Cobas, que fue fundada el pasado Primero de Mayo. En los pasillos del Senado, nuestro camarada tendrá la ocasión de encontrarse con Gianni Agnelli, el patrono de Fiat. Ha ganado dos veces una denuncia contra Fiat por su despido abusivo. Se espera todavía el veredicto de la Corte de Casación. ¿Confirmará este ilustre areópago los dos veredictos favorables a Gigi o avalará el despido de un obrero-senador?

⁶ Como ocurre a menudo, estas citas significativas fueron omitidas en la versión publicada por el diario del partido.



RICKY MARTIN 2001

De Quebec a Gotemburgo

En la circunstancialmente amurallada ciudad de Quebec, Canadá, se dieron cita unas 3.000 personas para participar en la II Cumbre de los Pueblos que se realizó del 16 al 20 de abril, en paralelo a la Cumbre de las Américas que reunió a los mandatarios de 34 naciones del continente, salvo Cuba, para discutir la creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Durante los primeros cuatro días, en la Cumbre de los Pueblos se organizaron nueve foros sobre sendas temáticas relacionadas con el acuerdo comercial: foro de parlamentarios, mujeres y mundialización, campesino, educación, rol de los Estados en la redistribución de la riqueza, comunicación, derechos humanos, medio ambiente y sindical. Las diversas ponencias presentadas a la plenaria, coincidieron en expresar el rechazo de los participantes a los intentos de comercializar todos los aspectos de la vida humana: salud, educación, conocimiento, cultura, recursos biológicos, etc.

Existe la conciencia de que la Cumbre oficial tiene poca voluntad de escuchar las propuestas de la sociedad civil, hecho evidenciado por el secretismo con que se han manejado las negociaciones a lo largo del proceso. Las extremas medidas de seguridad, que han convertido el centro histórico de Quebec en un fortín, más allá de los justificativos que se refieren a prevención de actos de violencia, expresan y grafican simbólicamente la distancia que han interpuesto las esferas oficiales respecto a sus conciudadanos.

Es así que los organizadores de la Cumbre presidencial únicamente han accedido a la posibilidad de recibir el documento de la Cumbre Alternativa y de realizar una mesa redonda en el marco del evento oficial. Esta propuesta, fue rechazada por la Alianza Social Continental, por considerar que era sólo un ardid para contribuir a la simulación de consulta con la que está queriendo enfrentar a las movilizaciones populares.

Represión en Gotemburgo. Por otra parte, tres personas resultaron heridas de bala cuando la policía atacó con fuego real a los manifestantes en la noche del viernes durante las movilizaciones convocadas en ocasión del Consejo Europeo de Gotemburgo, que pone fin a la presidencia europea. Fuentes policiales trataron de difundir la versión de que los agentes pretendían disuadir a un grupo de jóvenes que estaban dando una paliza a un antidisturbios, pero basta ver las imágenes ofrecidas por la televisión para observar que la policía empleo indiscriminadamente sus armas como método de intimidación al verse desbordada por las acciones de los miles de manifestantes antiglobalización. Los enfrentamientos comenzaron cerca de las 9 de la noche al tiempo que concluía una acción del movimiento *Reclaim the City* junto a la Universidad. Miles de manifestantes

antiglobalización se reunieron junto a la Universidad y junto al parque de Vasa. La policía cargó violentamente con sus caballos contra ellos para disolverlos. Los manifestantes respondieron a las provocaciones de la policía arrojando adoquines contra los agentes a caballo que pretendían cercar la zona y llevar a cabo detenciones masivas. Fue entonces cuando la policía perdió el control de la situación y empleó fuego real para disolver a los manifestantes. Pasada la una de la madrugada el hospital Sahlgrenska atendía a tres personas heridas de bala; una de ellas estaba en peligro de muerte por lo que fue operada durante la noche. Todos los hospitales de la ciudad se vieron invadidas por decenas de heridos por lo que necesitaron aumentar el personal de manera urgente. Durante los dos días de enfrentamientos 42 personas han resultado heridas, y según fuentes oficiales, al menos una decenas de ellas son policías. Hasta ahora más de 600 personas han sido detenidas, de las cuales 83 ya han sido puestas en libertad. El presidente Aznar ha amenazado con impedir *la libre circulación de personas* durante la presidencia española del segundo semestre del 2002 para obstaculizar las acciones del movimiento contra la globalización. Berlusconi estaría planteándose medidas similares respecto a la Cumbre del G8 en Génova (*Información elaborada a partir de artículos de Rebellion www.rebellion.org*).



Quebec: una impresión de conjunto

Christophe Aguiton

“*Quebec supone un verdadero paso adelante en comparación con Seattle, por el número total de manifestantes, pero también por una participación mucho más masiva en las acciones directas*”, estimaba Russ Daviss, presidente de *Jobs with Justice* de Massachusset, justo después de las manifestaciones. La manifestación fue políticamente más homogénea que en Seattle; aunque los participantes eran también diversos, sus puntos de vista eran menos dispersos, más directos. Los militantes del Sierra Club, la principal organización ecologista americana, por ejemplo, no se disfrazaron de tortugas.

Comparando a Quebec con las otras dos fechas que marcaron el año 2000, Washington D.C. en abril y Praga en setiembre, se llega a la misma conclusión. Antes de entrar en el detalle, una primera impresión de conjunto: aunque parezca increíble, las manifestaciones hacían pensar en las jornadas de mayo de 1968 en París, al menos con la idea que nos podemos hacer de ellas. Durante dos días, miles de personas –probablemente más de diez mil– rodearon el muro que

protegía a los jefes de Estado y participaron más o menos en la “batalla de Quebec”. La ciudad apenas cuenta con 300.000 habitantes y aunque muchos manifestantes procedían de los Estados Unidos y del resto de Canadá, el francés fue con mucho la lengua más hablada en las concentraciones que rodearon el muro. Una verdadera solidaridad unió a los habitantes de la vieja ciudad, a los estudiantes –cerca de 15 universidades estaban en huelga–, y a los participantes –sindicalistas en su mayor parte–, en la gran manifestación autorizada que se desarrolló en otra parte de la ciudad. Se podía ver a trozos de cortejos sindicales o a pequeños grupos de participantes en la cumbre paralela “oficial”, subir al muro y volver a descender muy orgullosos de haber sido, ellos también, víctimas de los tiros de gas lacrimógeno. Los reportajes de la radio tuvieron también su parte en este clima: extremadamente hostiles a los manifestantes antes del día D (los “alborotadores” procedían supuestamente de los Estados Unidos), los periodistas, tal vez embriagados por la presencia masiva de jóvenes llegados de la “Bella Provincia”, aumentaron el suspense en directo durante la caída del muro y los largos enfrentamientos que le siguieron.

Desde este punto de vista, se puede decir, como lo hizo el *Financial Times* del 24 de abril, que los manifestantes de Quebec ganaron la guerra de la opinión, aunque no pudieron oponerse al desarrollo de la cumbre que apenas se retrasó una hora. El simbólico “muro de la vergüenza”, tras el cual se vieron obligados a refugiarse los jefes de Estado, jugó un papel importante a la hora de conquistar a la opinión pública. Los mismos resultados de la cumbre refuerzan esta lógica. Nada nuevo (se confirma la fecha de 2005 para la entrada en vigor de la Zona de Libre Cambio de las Américas), a no ser una proclamación formal a favor de la democracia: un Estado que derogase sus principios se vería excluido de la zona de libre cambio, aunque no se ha previsto ningún mecanismo ni norma.

Debates y discrepancias. Dos líneas de separación fueron claramente identificables: a los debates tradicionales entre radicales y moderados, había que añadir las diferencias de sensibilidad entre francófonos y anglófonos.

La cuestión “Quebec” se manifiesta ante todo por un desconocimiento recíproco. Las redes militantes son diferentes (no existe ninguna organización que sea realmente “canadiense”), se frecuentan poco y muchos ni siquiera se conocen.

En Quebec formaron tres coaliciones que jugaron un papel activo en las movilizaciones.

- En primer lugar, los organizadores de la Cumbre de los Pueblos de las Américas, la contracumbre “oficial” (que fue inaugurada por el primer ministro), en la cual los sindicatos estuvieron muy presentes. Esta Cumbre de los pueblos está ligada a la Alianza Social Continental –o hemisférica–, donde se encuentran todas las fuerzas opuestas a la mundialización liberal en las Américas, desde la ORIT (que agrupa a los principales sindicatos) al CLOC, la coordinación de las

organizaciones rurales en la que se encuentra Vía Campesina o la CONAIE de Ecuador. En la Cumbre de los Pueblos, que organizó la gran manifestación pacífica del sábado día 21, se encontró un poco casi todo el mundo, desde la Marcha Mundial de las Mujeres a fuerzas que estaban organizando en paralelo otras actividades. Pero esta Cumbre estaba dominada por los sindicatos del Quebec, muy numerosos en la calle el 21 de abril, pero, a diferencia de los sindicatos anglófonos, con mucho cuidado en alejar a los manifestantes lo más posible del muro y rechazando la consigna "No al ALCA".

- La segunda coalición estaba formada bajo el doble nombre de OQP 2001, "Operación Quebec Primavera 2001", o de GOMM, "Grupo Opuesto a la Mundialización de los Mercados". OQP 2001 organizó una serie de talleres y conferencias al tiempo que el GOMM preparaba desde el viernes 20 una manifestación en dirección al muro. Se encontraban en estas coaliciones redes de jóvenes, y numerosas asociaciones como ATTAC Quebec que, como otras asociaciones opuestas a la mundialización liberal, está en fase de crecimiento rápido. En el plano político, esta coalición afirmaba claramente la consigna: "No al ALCA".

La tercera coalición agrupaba a dos asociaciones de sensibilidad anarquista: el CLAC, "Convergencia de Luchas Anticapitalistas", presente en Montreal, y el CASA, "Comité de Acogida de la Cumbre de las Américas", de Quebec. Fueron éstas quienes organizaron las manifestaciones más decididas, que hicieron caer el muro el 20 y el 21.

La cuestión de la violencia. Merece la pena detenerse en el problema, porque tiene todas las posibilidades de plantearse de nuevo en próximas iniciativas.

La primera cuestión es la libertad de elección de los manifestantes. En Quebec, como el pasado setiembre en Praga, se identificaron los distintos trayectos con colores que indicaban el grado de riesgo y de compromiso. El grupo verde era el más pacífico, tanto por el trayecto escogido como por las formas de acción (rollos de papel higiénico arrojados al otro lado del muro). El grupo amarillo, organizado por el GOMM, se dirigía, también con métodos pacíficos, hacia la parte del muro más próxima al centro de conferencias. De ahí el temor a una intervención policial: el GOMM había colocado en cabeza del cortejo a portadores de globos hinchados con helio para soltarlos si había que dispersarse. El grupo rojo, por último, formado por el CLAC y el CASA, era el más determinado: pero las cosas estaban claras y la megafonía recordaba regularmente a los manifestantes presentes en este cortejo que corrían riesgos y que podían elegir otras posibilidades.

El segundo aspecto es el grado de violencia en Quebec. En una aplastante mayoría, los manifestantes eran no-violentos, utilizando a lo más medios simbólicos (llamaba la atención una catapulta que lanzaba osos de peluche a los policías), o devolviendo las municiones empleadas por la policía (la foto de un

manifestante que utilizaba su bastón de hockey sobre hielo para devolver las granadas lacrimógenas fue publicada en muchos periódicos canadienses). E incluso los que fueron más lejos, participando en el derrumbamiento del muro, parecían haberse marcado unos límites muy precisos: los manifestantes sólo penetraban en el recinto prohibido algunos metros y retrocedían en cuanto avanzaban los policías.

Esta combinación entre la claridad de las opciones dejadas a cada cual y el carácter simbólico –o en todo caso, una violencia limitada– de las acciones llevadas a cabo, facilitó la simbiosis entre los diferentes grupos de manifestantes y el carácter popular de las iniciativas, incluso de las que se desarrollaban en torno al muro.

Se podrían decir otras muchas cosas a propósito de las movilizaciones de Quebec: sobre la importancia de las alianzas y las coaliciones, a escala nacional e internacional, sobre la amplitud del movimiento de juventud o sobre la organización por grupos de afinidad, un tipo de organización que, en Quebec, fue puesto en pie eficazmente por los americanos y la gente de Quebec. Pero todo esto ya ha sido descrito a cuenta de Seattle o de Praga. Quebec, en este sentido, se sitúa en continuidad con las movilizaciones precedentes.



El gas que a todos unió

Naomi Klein

En las calles de la ciudad de Quebec, durante la Cumbre de las Américas, no hubo sólo “dos protestas”, una marcha laboral “pacífica” y un motín anarquista “violento”. Hubo miles: una fue organizada por una madre y su hija; otra, por un puñado de estudiantes; otra, por tres amigos de Toronto que no son miembros de nada, excepto su club deportivo; y otra más, por un par de camareros de una cafetería durante su hora de almuerzo. Los muy diversos manifestantes y residentes fueron unidos por la blanca cortina de gas lacrimógeno que cubrió a todos por igual: a una señora que salió a comprar un sandwich, a los feroces anarquistas de negro, a los bien organizados sindicalistas. El gas logró un efecto no buscado por la policía: unificó a los manifestantes. Maude Barlow, presidenta del Consejo de los Canadienses, fue sentenciada por no haber llamado a que se retirara la “banda de Maude”. El activista Jaggi Singh está en la cárcel por presunta posesión de una arma que nunca poseyó o usó: una catapulta de teatro que lanzaba animales

de peluche sobre el famoso muro en la ciudad de Quebec durante la Cumbre de las Américas, la semana pasada. No es simplemente que la policía no haya entendido el chiste, sino que no captan que estamos en una nueva era de protesta política, adaptada a los tiempos posmodernos. No había una sola persona o grupo que pudiera llamar a "su gente" de regreso, porque las decenas de miles de personas que vinieron a protestar contra el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) son parte de un movimiento que no tiene un líder, un centro, ni siquiera tiene un nombre acordado. Sin embargo, existe, eso no se puede negar.

Por supuesto que había grupos bien organizados en la ciudad de Quebec: los sindicatos tenían camiones, un juego de pancartas y una ruta para marchar; el "bloqueo negro" de anarquistas tenía máscaras contra gas y radiotransmisores. Pero, durante días, las calles estuvieron llenas de gente que simplemente le había dicho a un amigo: "Vayamos a Quebec", y de residentes de la ciudad de Quebec que dijeron: "Vayamos allá afuera". No se unieron a una gran protesta, participaron en un momento.

¿Cómo podía ser de otra manera? Todas las instituciones tradicionales que antes organizaban a los ciudadanos en ordenados y estructurados grupos van de bajada: los sindicatos, las religiones, los partidos políticos. Sin embargo, algo lanzó a decenas de miles de individuos a las calles, una intuición, un instinto gutural; quizá sólo el profundo deseo humano de ser parte de algo más grande que ellos mismos.

¿Seguían la misma línea partidista, tenían una detallada disección de los pormenores del ALCA? No siempre. Pero no por eso pueden ser desestimadas las protestas en Quebec como un vacío turismo político. El mensaje de George W. Bush en el Encuentro fue que la simple acción de comprar y vender gobernará por nosotros. "*El comercio ayuda a difundir la libertad*", dijo Bush. Y fue precisamente esta visión pobre y pasiva de la democracia la que fue rechazada afuera, en las calles. Además de cualquier otra cosa que estuvieran buscando, lo que es un hecho es que todos estaban tras un chupito de participación política directa. El resultado de los cientos de protestas miniatura que se juntaron fue caótico, algunas veces terrible, pero muchas veces inspirador. Una cosa es segura: después de que la gente al fin se sacudió de encima la manta del espectador político, la última cosa que va a hacer ahora es entregarle las riendas a una camarilla de posibles líderes. Sin embargo, en el futuro, los manifestantes se organizarán más; pero este hecho tiene que ver más con las acciones de la policía que con las directivas de Maude Barlow o Jaggi Singh.

Puede ser que las personas errabundas se hayan topado con la ciudad de Quebec, profundamente inseguras de lo que significaba ser parte de un movimiento político, pero algo nos unificó a todos desde que llegamos: los arrestos masivos, las balas de goma, pero, sobre todo, la gruesa cortina blanca de gas. A pesar de que la línea del Partido Liberal consistió en felicitar a los "buenos" manifestantes y condenar a los "malos", el trato que todos recibieron en las calles de la ciudad de Quebec fue crudo, cobarde e indiscriminado. Las fuerzas de seguridad utilizaron las acciones de unos cuantos lanzadores de piedras como

una justificación, que podía ser mostrada en imágenes, para hacer lo que trataron de hacer desde el principio: despejar a la ciudad de miles de manifestantes legales, porque así era más conveniente.

Una vez que obtuvieron su provocación, las fuerzas de seguridad llenaron barrios enteros con humos tóxicos, y forzaron a las familias a respirar a través de máscaras en sus propias salas. Se frustraron porque el viento iba en su contra, así que rociaron más. Personas que hacían el signo de la paz a la policía fueron gaseadas. Personas que hacían nuestra comida fueron gaseadas. Conocí a una señora de Ottawa, de unos 50 años, que me dijo alegremente: "*Salí a comprar un sandwich y me gasearon dos veces*". Personas que celebraban una fiesta bajo un puente fueron gaseadas. Las personas que protestaban por el arresto de sus amigos fueron gaseadas. La clínica de primeros auxilios que curaba a las personas que habían sido gaseadas, fue gaseada.

Se suponía que el gas lacrimógeno iba a derrotar a los manifestantes, pero tuvo el efecto contrario: los enfureció y los radicalizó lo suficiente como para echar porras a los del "bloque de negro" que se atrevían a devolver los botes de regreso. Puede que sea ligero y que se atomice lo suficiente como para cabalgar en el aire, pero sospecho que los meses siguientes mostrarán que el gas también tiene poderosas propiedades unificadoras.

Traducción: Tania Molina Ramírez

Reproducido de Rebelión www.rebellion.org

Viernes 15 de junio en Gotemburgo

[Los conflictos del viernes 15 de junio en Gotemburgo han supuesto un paso más en la escalada de criminalización del "movimiento anti-globalización" y han abierto un importante debate dentro de él sobre el empleo de la violencia, que afecta a otros temas importantes para la orientación futura del movimiento.

Puede hablarse de "escalada" porque la represión no ha empezado en Gotemburgo; la hubo ya en Seattle, en Praga, en Zurich, en Quebec y cuando escribimos estas líneas la ha habido en Barcelona y con provocación policial incluida. La "aportación" de Gotemburgo ha sido los disparos con armas de fuego que han estado a punto de asesinar a un manifestante.

Por eso es especialmente indignante la manipulación política y mediática que ha construido la "noticia" de los conflictos, no sobre estos actos criminales afortunadamente no consumados, sino en la llamada "violencia anti-globalización", acciones de destrucción de mobiliario urbano y vitrinas de comercios con piedras y palos por obra

de grupos que no comparten la orientación “no violenta” de la mayoría del movimiento. Por eso, es muy importante tener presente que bajo la cobertura de la lucha “contra la violencia”, lo que se persigue y se reprime es todas las manifestaciones de desobediencia civil y resistencia, incluyendo las de carácter “no violento”, que son características fundamentales del movimiento, sin las que no puede entenderse su capacidad de intimidación hacia las instituciones dirigentes de la globalización y su capacidad de movilización social, especialmente en la juventud.

Pero sin duda, es necesario desarrollar un debate sobre los métodos de acción del movimiento contra la globalización, un debate que sea democrático y unitario, es decir en el que puedan expresarse libremente y escucharse mutuamente todas las posiciones existentes. Las fórmulas de “convivencia en la acción” entre distintas “sensibilidades”, por medio de un reparto de roles y territorios, pueden ser útiles, pero son insuficientes, porque las consecuencias de las acciones de todos los grupos, y de su manipulación político-mediática, afectan al conjunto del movimiento.

Desde hace tiempo estamos preparando un Plural sobre las complejas relaciones entre izquierda alternativa y violencia. Puede servir de introducción la selección de textos que hemos realizado sobre los muy interesantes documentos publicados Grain de sable, el periódico electrónico de ATTAC Francia, a partir de los hechos de Gotemburgo. El debate lo inició un texto de Susan George junto con las opiniones muy diferentes de Christophe Aguiton, uno de los portavoces internacionales de ATTAC; posteriormente se han continuado publicando opiniones plurales, contribuyendo así al debate que necesitamos. Lamentablemente, aquí sólo se ha difundido, hasta el momento, el texto de Susan George.

Por nuestra parte, hemos decidido reproducir ese texto, pese a que ya es ampliamente conocido y pese a que no compartimos gran parte de lo que en él se dice, junto con otras de las opiniones publicadas en Grain de Sable.]

- Susan George. ATTAC-Suecia tiene actualmente entre 4.000 y 5.000 miembros, que en relación con la población de Suecia, significa tanto o más que en Francia después de menos de un año de existencia, lo que ha sido reconocido como un fenómeno político significativo. ATTAC-Suecia ha estado trabajando desde hace meses en la preparación de la Cumbre de Goteborg, negociando con el Gobierno y la policía para que las manifestaciones se desarrollen pacíficamente. El presidente del Consejo de ATTAC, Hans Abramsson que ocupa una cátedra universitaria de estudios para la paz, y América Vera-Zavala se han reunido con el primer ministro Goran Persson (la foto de América con la camisa blanca adornada con la insignia roja de ATTAC al lado de Persson, salía en un número de “Metro”, la publicación de la Cumbre). Todo esto está dentro de la tradición sueca de la concertación y el consenso y, según los miembros de ATTAC, se estableció una confianza mutua.

Desgraciadamente, todos estos esfuerzos han sido inútiles. Los problemas empezaron el jueves por la tarde. El Gobierno había cedido diversas escuelas para que los militantes pudieran dormir. Corría el rumor de que había armas escondidas en una escuela, los ocupantes se negaron a salir, y la policía hizo instalar inmensos contenedores para bloquear todos los accesos a la escuela. Empezaron algunas

escaramuzas entre policías y contestatarios dentro de un parque próximo donde la policía iba a caballo, contrariamente a una de las promesas hechas durante las negociaciones. A pesar de todo, nada grave sucedió el jueves, aunque la tensión comenzaba a subir. El viernes, los ocupantes del movimiento *Globalisation from Below*, *Ya Basta* y *Tutti Bianchi* fueron evacuados. Ese mismo día, personalmente yo estaba en la zona alternativa donde estaban las tiendas acogiendo a múltiples organizaciones y a todos los forums. Pero a menos de 500 metros del lugar, los enfrentamientos y los destrozos empezaron. En la Gran Avenida, que los ciudadanos de Goteborg comparan con los Campos Elíseos de París, al final de la tarde no había ninguna vitrina intacta. Aproximadamente unas doscientas personas habían conseguido implicar en la batalla a un millar o algunos más. La policía, completamente desbordada, con los vehículos destruidos, dispararon fuego real y una persona como mínimo fue gravemente herida de bala en el abdomen, otras con heridas leves. Los suecos no se habían encontrado nunca con este tipo de violencia en su territorio, y quedaron profundamente afectados.

Condeno de manera clara y precisa esta violencia, y esto por diversas razones:

- Independientemente de las posiciones filosóficas sobre la cuestión y aparte del hecho de que nuestros colegas suecos se han quedado bastante traumatizados, la violencia hace inevitablemente el juego al adversario. Incluso en el caso de provocaciones y cuando la policía es la responsable del inicio de las hostilidades y, como pasa a menudo, se nos coloca a todos en el mismo saco. Los medios de comunicación, evidentemente no hablan más que de esto. Las ideas, las razones de nuestra oposición, las propuestas están completamente escondidas.

- El Estado se define por su "monopolio de la violencia legítima". Cualquiera que piense poder afrontar y ganar en este terreno, no ha ido muy lejos en el análisis político. Cualquiera que piense que rompiendo escaparates y atacando a la policía "amenaza al capitalismo", no tiene pensamiento político de ninguna clase.

- No podemos construir un movimiento amplio y popular sobre la base de una cultura de unos jóvenes y de una gente que están dispuestos a que les rompan la cara. Todas las personas que tienen miedo de los gases, de la violencia, la gente de mi edad, las familias con hijos, la gente menos en forma físicamente, se abstendrán y no vendrán a ninguna de nuestras manifestaciones.

- No es nada democrático. Estoy harta de estos grupos que nunca están a la hora del trabajo preparatorio, que no hacen nunca nada en la política de cada día, pero que aparecen en las manifestaciones como unas flores "venenosas" para romper cualquier acuerdo que haya estado negociado por los demás. Además, todo esto romperá las alianzas entre los que condenan la violencia y aquellos que la toleran y rechazan hacerlo.

- Se insulta a los que rechazan y condenan la violencia tratándolos de "reformistas". Pero la contraposición "reforma-revolución" no tiene ningún sentido en el contexto actual y no es, a mi entender, donde se sitúa el problema. No es nada "revolucionario" dividir el movimiento social y rechazar aliados

potenciales, no es nada revolucionario generar la simpatía por nuestros adversarios por parte de la mayoría de la población, no es nada revolucionario oponerse a todas las medidas parciales (como la Tasa Tobin) esperando el "Gran Día", es idiota y es contraproducente. Bien, estoy harta de esta tiranía y tengo miedo de que si se continúa dejándolos hacer, acabarán por destruir el movimiento, la mejor esperanza política desde hace treinta años. (*Traducción: ATTAC Cataluña*)

• *Christophe Aguiton*. Nada justifica el uso de armas de fuego, que han sido utilizadas en Suecia, por primera vez en una manifestación en un país de la Unión Europea, desde su creación.

Hay que estar a favor de las manifestaciones no violentas. Por otra parte, una organización como ATTAC nunca ha participado y no participará en ningún caso en actos de naturaleza violenta.

Nos encontramos frente a un doble movimiento. Por un lado hay una extensión y una masificación de la lucha contra la "mundialización liberal", las encuestas de opinión muestran una inquietud creciente de la mayoría de la población. Al mismo tiempo, asistimos a la exasperación de ciertos medios militantes y de capas sociales que son las primeras víctimas de la reestructuración del capitalismo.

Desde Seattle, no hay una sola Cumbre que no esté acompañada de una contra-Cumbre y de manifestaciones cada vez más importantes. Las exigencias que se expresan en ellas son siempre las mismas: responder a las aspiraciones sociales (lucha contra las desigualdades, precariedad o inseguridad social creciente), ecologistas (rechazo del dominio de las multinacionales sobre los bienes comunes del planeta) o democráticas (voluntad de influir sobre las decisiones que determinan el porvenir del planeta).

Debemos comprender la impaciencia y las frustraciones de centenas de miles de militantes que no ven cambios en las políticas. La primera pregunta que deberían plantearse nuestros gobernantes es por qué crece la indignación y cómo dotarse de los medios para cambiar de política.

Hay una transformación profunda del capitalismo, de su funcionamiento y de sus reglas. Frente a esta mutación global, las reacciones son múltiples: desde las manifestaciones frente a las Cumbres hasta las reacciones a los planes de reconversión al dictado de la Bolsa, como los de Danone o Marks & Spencer...

Hay que considerar también el voto en Irlanda contra el Tratado de Niza, signo de un real malestar social y democrático o el ascenso considerable de la abstención en Francia, en los EE UU o en Italia. En fin, están las campañas anti deuda o por la instauración de la Tasa Tobin o Encuentros como el del Porto Alegre, que han sentado las bases para la elaboración de alternativas.

Gracias a todo esto, no se trata ya como en los años 70, en la gran mayoría de los casos, de conquistar el Estado por medio de organizaciones revolucionarias, sino de encontrar otras vías de lucha radical. Sobre todo, estamos asistiendo a la emergencia

de alianzas mucho más amplias, con los movimientos campesinos, numerosas ONG, sindicatos de masas (como la AFL-CIO americana) y las organizaciones sociales”.
(*Texto basado en una entrevista publicada en Liberation, del 18 de junio del 2001*)

- *Pierre Khalfa*. El comportamiento de los grupos minoritarios que utilizan la violencia sistemática perjudica a la causa que ellos mismos buscan defender. El tratamiento mediático que le sigue se utiliza para desacreditar al conjunto del movimiento. Sin embargo, no podemos quedarnos en esta simple constatación. La causa principal de la violencia es el comportamiento de los gobiernos e instituciones internacionales que, por una parte, afirman que quieren tener en cuenta a la “sociedad civil” y por otra parte continúan aplicando las mismas orientaciones. Este autismo es la fuente de la creciente radicalización de una parte del movimiento y permite que la violencia aparezca como la única solución para hacerse oír. El espectáculo de las cumbres *bunkerizadas*, insensibles a las presiones populares y que continúan desreglamentando y liberalizando a toda marcha sólo puede reforzar esta apreciación.

- *Elie C*. La posición de Susan George es excelente y dice toda la verdad. Los ‘violentos’ no hacen política y vuelven a la opinión pública contra el movimiento de conciencia política. Hay que ponerles a distancia e impedirles parasitar el movimiento. Toda complacencia en este sentido, toda duda, refleja una orientación incorrecta que se mantiene en la psicología infantil y contraproducente de la espera del ‘gran día’. En este sentido, la posición de Christophe Aguiton no es muy clara porque quiere evitar la caracterización política de la violencia de los grupos marginales, encontrándoles excusas. Se ve regresar a las viejas tendencias de la LCR de los años 70 que imaginaban que la guerrilla urbana formaba la conciencia de los trabajadores. Es el punto débil izquierdista tradicional.

- *Catherine Samary*. Ninguno de nuestros comunicados contra los actos violentos debería omitir criticar en primer lugar la desproporción de los despliegues de la policía y su violencia; dicho de otra manera no debemos tomar retraso en las críticas caso por caso de la ‘legitimidad de la violencia del Estado’. Debemos intentar reducir los riesgos de violencia, pero sabiendo que la hostilidad radical de los organizadores de las cumbres hacia nuestro movimiento les lleva necesariamente a una doble estrategia de recuperación/provocación represiva. (Debemos estar) atentos a los puntos de vista de los “anarcos” intentando el diálogo con ellos. Ya sé que para dialogar hacen falta dos...Pero los puentes hacia la juventud radical son decisivos para el porvenir de nuestro movimiento.

- *Cyril C*. El azar ha querido que cuando me llegó el texto de Susan George estuviera leyendo justamente el capítulo dedicado a *Reclaim the Streets*, del apasionante libro de Naomi Klein “*No Logo*” (nota: recientemente editado en

castellano por Paidos). Entonces he podido medir hasta qué punto esa dimensión profundamente subversiva y provocadora falta en ATTAC. Y no estoy pensando en el carácter espectacular y potencialmente mediático de las acciones de RTS: yo no espero nada de los grandes medios, nunca nos ayudarán a difundir nuestras ideas, que son exactamente contrarias a sus intereses. Pienso más bien en ese sentimiento de peligro más o menos difuso que impregna sus manifestaciones, peligro para el otro bando, evidentemente. El movimiento obrero nunca fue tan fuerte y tan capaz de alcanzar sus objetivos (en términos de los resultados concretos obtenidos: derecho de huelga, derechos sindicales, reducción del tiempo de trabajo, vacaciones pagadas, aumentos salariales...) que cuando no era "correcto" y era considerado "peligroso" por la patronal, en cuanto atentatorio contra sus intereses. ¿Quién puede decir que inspiramos, hoy sentimientos como éstos a alguien?.

- *ATTAC Francia*. Nos desolidarizamos totalmente de los grupos de provocadores que han saqueado el centro de la ciudad de Gotemburgo durante la contracumbre. Este comportamiento debe rechazarse por tres razones. En primer lugar, constituye una violación de las prácticas de concertación democrática de las coordinaciones que se establecen cuando los grandes Encuentros contra las políticas neoliberales de las instituciones internacionales y europeas. Además, debido a la atención prioritaria que le dedican los medios, dejan en silencio los objetivos y la amplitud de las movilizaciones. En fin, y más grave aún, dan argumentos a todos aquellos, especialmente los gobiernos y organizaciones patronales, que inquietos con razón por el rechazo popular que suscitan sus políticas, creen encontrar en estas acciones una referencia para intentar criminalizar el rechazo de un orden social profundamente injusto.

Los dirigentes europeos y de otros países (del G-7) no ignoran la impopularidad de sus políticas. Prosiguiéndolas como si nada ocurriera, sin tener en cuenta en absoluto a las opiniones públicas, contribuyen activamente a exacerbar las tensiones y a degradar a la democracia, y crean así las condiciones de una criminalización de la protesta ciudadana. Esta ceguera irresponsable debe cesar y ser sustituida por la escucha atenta de las demandas de las sociedades.

(Textos resumidos de Grain de Sable n° 242 y 248)

Insurrección en la Kabilia

Rouge (10/5/2001)

[De nuevo ha estallado una gravísima crisis en Argelia y nuevamente a partir de la rebelión del pueblo bereber contra el gobierno. Más de un centenar de muertos y de tres mil heridos dan idea de la magnitud de los acontecimientos, a los que no han prestado la atención debida los grandes medios de comunicación. Hay que recordar también que el gobierno Buteflika es considerado aún “progresista” por algunos sectores de la izquierda. El semanario de la LCR Rouge ha dedicado una serie de artículos al desarrollo de los acontecimientos que publicamos a continuación en orden cronológico.]

El discurso de Buteflika, el 30 de abril, no ha calmado los espíritus en Kabilia, donde el movimiento popular se organiza. Hemos entrevistado a Baddredine Djahnine, militante del Partido Socialista de los Trabajadores en Bejaia.

Pregunta: ¿Cuál es la situación en Kabilia?

Baddredine Djahnine: El levantamiento popular proviene de una doble frustración, cultural y social. Hay un paro de más del 40% en la región, muchas fábricas han cerrado, hay un grave problema de vivienda... En relación con eso, el discurso de Buteflika no ha traído nada de particular, es la eterna palabrería de siempre. Ha habido más de 40 muertos reconocidos por el Ministerio del Interior, lo que es muy importante: ¡son las cifras de una guerra! Y la represión es terrible, la policía ha tirado con fuego real. Frente a esto, los jóvenes, que reaccionan un poco como el “brazo armado” de la revuelta popular, tienen ansias de revancha. Son verdaderos kamikazes...

Nunca habíamos visto esto antes. Pero son parte del comienzo de estructuración del movimiento.

P.: ¿Cómo se organiza la protesta?

B.D.: Los comités de estudiantes, los sindicatos de enseñantes, los sindicatos de los trabajadores de la educación y algunos comités de pueblos y de barrios han comenzado a producir un embrión de organización en la base, en los pueblos y de las ciudades. Han puesto en pie una plataforma reivindicativa: piden la dimisión del gobierno, la dimisión del primer ministro, del ministro del Interior, de los gobernadores de las ciudades en las que se ha asesinado a jóvenes; reivindican también un plan económico particular, una especie de “Plan Marshall” para la vivienda y el trabajo.

Los sindicatos de trabajadores de la educación tiene un papel muy importante, de organizadores de este comienzo de movimiento. Y le dan un contenido más

social. Es la primera vez desde hace muchos años que en el movimiento bereber se desencadena una dinámica, social y cultural, en la que lo social se liga claramente con la reivindicación cultural. Los llamamientos a la huelga son seguidos por los demás sectores de la economía.

P.: Bejaia aparece como la ciudad en la que la protesta está más estructurada.

B.D.: Hay un itinerario particular de la Kabilia, y en particular de la región de Bejaia en la que, a partir de finales de los años 80, trabajan militantes de extrema izquierda en la organización de los barrios, pueblos, de los sindicatos.

En estos últimos acontecimientos, la ciudad de Bejaia aparece como la más organizada. La unión entre las dimensiones social y cultural no se ha realizado nunca tan claramente. Es un fenómeno nuevo.

Si el movimiento continúa, esta estructuración puede progresar. Es la primera vez que el movimiento de masas se da un comienzo de estructuración seria democrática. Vamos a ver si conseguimos resistir mucho tiempo... Es la gran apuesta que tenemos por delante.

P.: ¿Qué ocurre en el resto de Argelia?

B.D.: En Bordj Bouararidj, al lado de Setif, ha habido una marcha de 10.000 personas. Es la única manifestación de solidaridad masiva en una región arabófona. Pero en las grandes universidades, en Argel, Oran y Constantine, los estudiantes han creado comités de solidaridad, ha habido incluso una manifestación ante el Palacio del Gobierno el jueves 3 de mayo. No han sido reprimidos, porque el poder tiene miedo de provocar revueltas sociales en Argel.

Hay que señalar también que en Argel, el poder ha dejado al Frente de Fuerzas Socialistas (FFS) manifestarse. El Reagrupamiento por la Cultura y la Democracia (RCD), que acaba de abandonar el gobierno, no representa ya nada. El poder busca un nuevo interlocutor. Prefiere tener ante sí a un canalizador como el FFS que a los comités de barrios y pueblos autoorganizados. Felizmente, el FFS está totalmente desacreditado en Kabilia.

P.: En tu opinión, ¿qué va a hacer Buteflika?

B.D.: Por el momento, intenta canalizar el movimiento y ganar tiempo. Propone una "comisión de investigación" fantoche, cuando los responsables, está claro, son los dirigentes del Ejército y de la Policía, que han dado la orden de disparar. Creo que va a continuar la represión.

El poder hace todo lo posible para limitar el problema a la cuestión cultural, en particular estos últimos días, lo que es fundamentalmente falso. Pero es un medio de ocultar el aspecto social. Hay una simpatía increíble por el movimiento en las regiones arabófonas. Por ello si el movimiento persiste, es posible que se extienda. *(Declaraciones recogidas por Marine Gerard y Sami Zakaria.)*

La protesta se enraíza

Rouge (6/6/2001)

Estos últimos días, las manifestaciones masivas se han sucedido en Kabilia. Pero el poder opta por responder con el desprecio y la represión. El pasado 21 de mayo, centenares de miles de personas invadieron las calles de Tizi Ouzou (la ciudad más grande de Kabilia) y dos días más tarde, se repetía la experiencia en Bejaia (segunda ciudad de Kabilia). Los manifestantes encolerizados gritaban consignas que son adoptadas unánimemente por la población: "Poder asesino", "Ulach smah" ("no hay perdón"), "Policías terroristas"... y llevaban pancartas en las que se podía leer: "Liberad a la libertad", "Mártires de la democracia" (las víctimas de los disturbios). Hombres y mujeres de todas las edades, decididos a acabar con el clima de terror, de corrupción y de miseria impuesto por el poder militar argelino durante todos estos años. Todo ello culminó con la gran manifestación que reagrupó a decenas de miles de mujeres, durante siete u ocho horas. Organizadas tras un recrudecimiento violento de los disturbios e incidentes en varias ciudades y pueblos de las wilayas de Tizi Ouzou y de Bejaia, estas "marchas negras" han permitido romper el silencio impuesto por el poder sobre los acontecimientos, y hacer comprender al resto de Argelia lo que realmente ocurre en Kabilia. Han mostrado también una Kabilia solidaria con la juventud insurrecta, y determinada a canalizar este movimiento de forma pacífica y organizada para impedir que haya otras víctimas, pero también para evitar el agotamiento.

Una movilización organizada. Desde los primeros días de los enfrentamientos, se han puesto en pie una organización y una estructuración democráticas. En Bejaia, una gran asamblea, la Coordinadora Ciudadana y Universitaria, reagrupa a los representantes de los comités populares, de los comités de pueblo, de los comités estudiantiles, de los sindicatos de trabajadores (principalmente el de la educación nacional, muy combativo), de las asociaciones culturales y sociales. Esta coordinadora, que funciona en asamblea general decisoria, no ha dejado de organizar huelgas generales en todos los sectores de actividad, sentadas regulares, velas encendidas todas las noches y en todas las ciudades, etc. El movimiento no cede, y cuenta ir más allá de las reivindicaciones democráticas inmediatas –retirada de la policía de todas las ciudades de Kabilia, juicio de todos los asesinos y torturadores comenzando por quienes les dirigen, puesta en marcha de una segunda sesión para todos los exámenes, estatuto de "mártires de la democracia" para todas las víctimas e indemnización de las familias, reconocimiento del tamazight (lengua bereber)...– incluyendo reivindicaciones sociales en el centro del movimiento insurreccional.

Mostrando su hostilidad al poder argelino, la Kabilia se instala duraderamente en la contestación a un régimen siempre silencioso y despreciativo, que apuesta por el agotamiento del movimiento. Los motines, que no cesan, han revelado en efecto la radicalización de toda la población, principalmente de la juventud popular que usa la violencia contra todos los símbolos de un Estado asociado a la "hogra" (expresión

argelina que significa injusticia y desprecio). Ni una administración, ni una institución estatal ha escapado al saqueo o al incendio. Los miembros de la comisión de investigación puesta en pie por el presidente Buteflika tienen prohibida su estancia en todos los pueblos y ciudades de Kabilia, y son los comités de pueblo y comités populares los que lo han decidido. Se ven rodeados, incluso cuando van con la escolta de las fuerzas antidisturbios, por la multitud que grita: “¡Engaño!” “¡Traición!”.

Violencia. El último discurso de Buteflika, el domingo 27 de mayo, no ha traído nada nuevo. La decisión de retirar 600 policías de la *wilaya* de Bejaia no es más que un nuevo engaño. En realidad, han sido sencillamente reemplazados por otros, más frescos, que han comenzado a actuar. Estos últimos días, la provocación se ha duplicado en ferocidad. Los policías bombardean las casas y pisos con gases lacrimógenos (una pareja de ancianos ha sido encontrada muerta asfixiada en Bejaia), asaltan los domicilios a altas horas de la noche propinando sistemáticamente palizas a los jóvenes, profieren obscenidades hacia las mujeres mostrándoles sus genitales, roban y saquean los almacenes de los pequeños comerciantes, violan las libertades universitarias: es la violencia diaria en Kabilia.

Buteflika ha prometido sancionar a todos los autores de violencias. Pero ¿de qué habla? Lo que ocurre en Kabilia es el fruto de una decisión estatal y gubernamental de reprimir sangrientamente el movimiento insurreccional, disparar con balas reales para matar, poner a sangre y fuego a toda la región. El resultado hoy es de un centenar de muertos y cerca de 3.000 heridos. Es la hora de actuar.

8 de junio. Argelia en ebullición. Tras 45 días, la movilización no decae en Argelia. Menos de una semana después de que 200.000 personas se manifestaran en Argel, marchas y “reuniones de medianoche” (desfiles nocturnos con antorchas), suceden diariamente en Kabilia, y al mismo ritmo se producen también las provocaciones policiales: violaciones de domicilio, robos o disparos gratuitos que provocan, en un ritual ya experimentado, la respuesta legítima de la población. Violentos enfrentamientos han opuesto a manifestantes y fuerzas del orden en Azzegza, así como en Staoueli a las puertas de Argel.

Relegadas (mediáticamente) por un tiempo a un segundo plano por la marcha del FFS, las coordinadoras territoriales y estudiantiles retoman la ofensiva y confirman que su capacidad de movilización permanece intacta: 40.000 mujeres se han manifestado el lunes en Bejaia, lo que constituye la mayor movilización de mujeres en Argelia desde 1989. Como prolongación a estas movilizaciones, está prevista una manifestación nacional en Argel el 14 de junio, convocada por la coordinadora inter-*wilayas* (interdepartamental). Dado que la última gran marcha de los comités de pueblo había reunido medio millón de personas en Tizi Ouzou, el poder puede empezar a preocuparse. Y el mando de la policía no parece querer apaciguar los espíritus, negándose a toda retirada de sus tropas de Kabilia. Cada hora que pasa ve entrar en movimiento nuevos sectores de la sociedad que protestan contra la camarilla en el poder, cuya política de desprecio y represión puede tener el efecto de un *boomerang*: el despertar, ya en germen, del resto de Argelia.

Más Blair-liberalismo

Alan Thornett

El New Labour ha conseguido triunfar en las elecciones generales del 7 de junio pasado. El Partido Conservador ha sufrido de nuevo una dura derrota.

La Alianza Socialista, en la que se encuentran el Socialist Group (ISG, IV Internacional) y el Socialist Workers Party, y sobre todo el Scottish Socialist Party en Escocia, consiguen resultados esperanzadores.

¿Qué significa verdaderamente la marejada electoral del New Labour? Si se mide la aplastante mayoría laborista en el Parlamento –167 escaños, un poco menos que en el Parlamento precedente–, es efectivamente una marejada. Pero es una verdadera deformación de la realidad. Pues esta mayoría resulta de un sistema electoral en absoluto democrático –el escrutinio mayoritario a una vuelta–, y no de los votos emitidos por los electores. El voto útil es muy fuerte, los electores votan por el partido (laborista o liberal-demócrata) que tiene más posibilidades de derrotar al candidato conservador. En realidad, Blair ha ganado su mayoría en el Parlamento con solo el 42% de los votos, sabiendo que no ha habido más que el 59% de participación, la tasa más baja desde 1918. Esto significa que tres electores de cada cuatro no han votado por el nuevo gobierno de Blair. Con el 42% de los votos, el New Labour obtiene el 64% de los escaños; los conservadores tienen el 33% de los votos y el 26% de los escaños, los liberal-demócratas obtienen el 19% de los votos y el 8% de los escaños. Los demás partidos totalizan el 6% de los votos y el 2% de los escaños. El Partido Laborista ha perdido 2,5 millones de votos en relación a las elecciones de 1997.

Los medios han presentado la tasa récord de abstenciones como apatía, pero ese no es el problema. Dos importantes factores están en el origen de esta abstención: la ausencia de alternativas (los tres principales partidos representan el orden neoliberal, incluso si los liberal-demócratas se han posicionado a la izquierda del New Labour en estas elecciones) y la hostilidad al New Labour en los bastiones obreros. Este último ha ganado las elecciones esencialmente progresando en las capas medias.

Esto no impide a Blair hacer saber que la política neoliberal será seguida con aún más vigor en su segundo mandato laborista, que promete ser peor que el primero. La administración de los hospitales será abierta al sector privado; la salud, la educación y los transportes serán reestructurados, como dice Blair, “sin presiones ideológicas”. Es decir con la presión ideológica del mercado...

La victoria de Blair plantea igualmente el problema de la entrada en la moneda única europea, lo que va a necesitar un referéndum. No se sabe aún si Blair va a optar o no por sacar ventaja de los resultados electorales lanzando inmediata-

mente un referéndum, pero es lo que espera una buena parte de la patronal británica. Frente a todo esto, el voto de protesta contra la política de derechas del New Labour se ha expresado de varias formas. Los liberal-demócratas, que se han presentado durante la campaña "a la izquierda" de los laboristas, están mejor representados en el Parlamento. También los Verdes han llevado a cabo una campaña de "izquierdas" y han obtenido su mejor resultado en unas elecciones generales, con una media del 2,25% en los 145 circunscripciones en las que se presentaba; su mejor resultado ha sido el 9,3%.

La izquierda anticapitalista

El Partido Socialista Escocés (SSP) ha progresado considerablemente, con una media del 3,1% en las 72 circunscripciones escocesas, más del 5% en 10 circunscripciones y hasta el 7,8% en una circunscripción de Glasgow. Ha obtenido un total de 72.500 votos. Este resultado pone al SSP en buena posición para ganar más escaños en las próximas elecciones al Parlamento escocés, que es elegido por sistema proporcional.

El voto de izquierdas, en Inglaterra y en el País de Gales, se ha dividido entre la Alianza Socialista (SA), que se presentaba por vez primera, y el Partido Laborista Socialista (SLP) de Arthur Scargill (el presidente del sindicato de mineros), que se había presentado en las últimas elecciones en 1997.

La Alianza Socialista ha conseguido mejores resultados que el SLP, pero sin establecer una gran diferencia. Totaliza 55.000 votos en 93 circunscripciones, con una media de 1,75% y obtiene más del 5% en 3 circunscripciones. El SLP ha obtenido 53.000 votos en 105 circunscripciones, en una de las cuales ha superado el 5%. En total 180.000 votos (SSP incluido) para candidatos de la izquierda socialista, lo que es excepcional en una elección inglesa desde la guerra. Multiplica por tres el resultado obtenido en 1997. Pero no hay duda alguna de que la división en Inglaterra y el País de Gales sigue siendo un problema, a pesar del notable grado de unidad alcanzado por la Alianza Socialista.

El SLP, que se ha descompuesto estos últimos años a la vez que reforzaba su carácter estalinista, continúa rechazando toda propuesta de unidad bajo cualquier forma. Se ha apoyado en el reconocimiento de su nombre obtenido en las elecciones precedentes, en los recursos y la reputación de Scargill. En la mayor parte de las circunscripciones, no hacía campaña sino que sólo constituía un factor de división.

Para la Alianza Socialista, que ha llevado a cabo una campaña dinámica, el resultado ha sido inferior a lo que muchos militantes esperaban. Pero es la primera vez que se presentaba fuera de Londres y sus resultados, equivalentes a los del SSP la primera vez que se presentó, son una buena base para su construcción. Su gran éxito ha sido la estructura organizativa puesta en pie durante la campaña, un factor decisivo a largo plazo. Se han creado comités

activos en todas las circunscripciones en donde se presentaba, que han decidido a continuar como colectivos militantes. La Alianza Socialista ha comenzado ya una campaña contra el segundo mandato del New Labour. Ha abierto ya el debate sobre la forma en que puede reforzar su estructura, lanzarse a actividades militantes, consolidar sus conquistas y prepararse para las próximas elecciones.

Escocia. El SSP sigue progresando

Murray Smith

La campaña de las legislativas en Escocia ha confirmado el dominio electoral del Partido Laborista, que ha obtenido el 44,3% de los sufragios. Sin embargo, no se trata de una gloriosa victoria para el partido de Blair, y no más en Escocia que en Inglaterra. Pues estas elecciones han conocido la tasa de abstención más elevada desde 1918, el 42% en Escocia. Esto se ha producido sobre todo en los bastiones laboristas. Así, en la ciudad de Glasgow en la que este partido se mantiene en todas las circunscripciones, el 53% de los electores han dado la espalda a las urnas. Los laboristas han bajado dos puntos desde las elecciones de 1997. Pero la principal fuerza de oposición, el SNP independentista, también ha perdido terreno, pasando del 22 al 20%. El Partido Conservador prosigue su largo descenso a los infiernos, cayendo del 17,5 al 15,5%. De los cuatro grandes partidos, solo los liberal-demócratas (centristas), socios en coalición con el Labour en el Parlamento escocés, han salido favorecidos, pasando del 12% al 16%. Este partido gusta presentarse como el "ala radical" de la coalición, lo que no deja de tener fundamento.

El SSP había hecho la apuesta de presentarse en todo el país, a pesar de un modo de escrutinio que no nos daba ninguna posibilidad de conseguir electos.

Nos habíamos fijado el objetivo de 100.000 votos. Hemos obtenido 72.000 (3,1% de los sufragios), un aumento de más del 50% en relación a las elecciones (sistema proporcional) al Parlamento escocés en 1999. En Glasgow, obtenemos casi el 7% (entre el 4,5 y el 10% según las circunscripciones), con más votos que en 1999. Pero, hecho significativo, si seguimos teniendo los mejores resultados en Glasgow, la diferencia con el resto del país se reduce. El partido obtiene resultados superiores al 4% en las circunscripciones obreras de Edimburgo y del centro de Escocia. En otras partes, los resultados son en general más modestos, sin ser ridículos, y son a veces sorprendentes. Así, el SSP obtiene 4,64% de los votos en la circunscripción de las islas Orcadas y Shetlands...

La campaña ha sido también una ocasión para reforzar la construcción del SSP. En la semana que ha seguido al envío de nuestro manifiesto, más de 1.000 personas han telefoneado para pedir nuestro manifiesto, de las que un buen número se ha adherido. El flujo de tomas de contacto y de adhesiones continúa a un ritmo más lento desde el 7 de junio, y al menos 4 nuevas secciones han sido ya creadas.

Pasadas las elecciones, el SSP va a reforzar su actividad extraparlamentaria, en particular la campaña de defensa de los demandantes de asilo y la que exige el cierre de las centrales nucleares. Asistimos también a un ascenso lento pero seguro de las

luchas sociales. Por otra parte, en el movimiento sindical, se ha abierto una brecha mediante el voto del Congreso del Sindicato de Bomberos que autoriza a sus secciones locales a apoyar y financiar partidos diferentes del laborista. Otros sindicatos pueden seguir sus pasos. Esto será un formidable apoyo para el desarrollo del SSP, así como de la Alianza Socialista en Inglaterra y el País de Gales.

El análisis del SWP

Chris Bambery, secretario nacional del SWP

“(…) Los resultados de la extrema izquierda muestran que el Partido Laborista ha alcanzado sin duda el límite más allá del cual su deslizamiento a la derecha puede conllevar la emergencia de una alternativa por su izquierda (…). Los laboristas han obtenido 2,5 millones de votos menos que en las elecciones generales de 1997. La abstención ha alcanzado su tasa máxima en los barrios obreros. Era una forma de expresar un voto contra el New Labour, y muchos de los que se han abstenido, así como muchos de los que, a fin de cuentas, no han querido romper con el Partido Laborista votando socialista, aprobaban ampliamente lo que defendía la Alianza Socialista y el SSP.

(…)Asistimos al comienzo de la descomposición de la base tradicional del Partido Laborista en la clase obrera. Eso no se hará en un día, ni por supuesto en las pocas semanas de campaña en las que se ha forjado la Alianza Socialista, dadas las profundas raíces del laborismo en la clase obrera, pero el proceso está en marcha (…). Los socialistas en Gran Bretaña tienen hoy la mejor oportunidad desde hace más de cien años de construir un partido socialista con un poderoso apoyo en la clase obrera. Los socialistas, por primera vez desde la creación del partido laborista, se proyectados al corazón mismo de la política de la clase obrera.

(…) Hoy, la izquierda revolucionaria tiene la ocasión de convencer de que la lealtad hacia la clase obrera debe estar por encima a la lealtad hacia el Partido Laborista. Podemos romper con el esquema de gobiernos laboristas cuya elección la única perspectiva que abre es la traición de las esperanzas y la apertura a la derecha. Muchos de quienes han roto con el New Labour o que se han negado a apoyar a Tony Blair siguen aferrados a lo que se podía llamar las ideas del “antiguo laborismo”. Es la contrapartida de la adhesión mesiánica de Blair a los objetivos neoliberales: capas enteras de electores laboristas que no se habían identificado nunca con la izquierda se encuentran hoy no solo en oposición de izquierdas a Blair, sino que se ven empujados a romper con el Partido Laborista y a trabajar con los socialistas fuera de él.

Es significativo que estos antiguos apoyos del Partido Laborista rompan con él en un momento en que la tendencia general permite a los socialistas de izquierda ganarles a las ideas revolucionarias. Esto no se solucionará en un día. Tenemos que superar toda la vieja tradición laborista en el seno de la clase obrera. La cuestión supera un simple voto por el programa revolucionario de la Alianza Socialista. Debemos sobre todo desarrollar la Alianza como un frente único prolongado en el

que los revolucionarios y quienes piensan que el sistema puede ser reformado puedan trabajar juntos, no sólo en el terreno electoral, sino también sobre las bases de un programa de acción que corresponda a las necesidades inmediatas de la clase obrera.

(...) Para el Socialist Workers Party, las semanas y los meses que vienen exigen la construcción de la Alianza Socialista como una fuerza más poderosa tanto a nivel local como nacional”.

Rouge/ 14 de junio del 2001/ París

Traducción: Alberto Nadal

Recortes

Israel/Palestina. Los palestinos contra la pared

Tras el último atentado de Tel Aviv, Yaser Arafat ha ordenado el alto el fuego. Pero la intransigencia de los dirigentes israelíes amenaza en cada momento hacer recaer a la región en una violencia incontrolable.

Los más de 800 manifestantes, hombres y mujeres, que el viernes 8 de junio habían respondido al llamamiento de la Coalición de las Mujeres por una Paz Justa, expresaban un mensaje político sin ambigüedad: es la ocupación la fuente de la violencia, y sólo poniendo fin a ella, completamente, la paz podrá estar de nuevo en el orden del día.

Sin embargo, la determinación de este núcleo de resistentes fue mínima si se la compara con la histeria belicista que atraviesa hoy Israel. “¡Guerra!” “¡Guerra!” “¡Guerra!”, gritaban una parte importante de los cerca de 10.000 participantes en la manifestación de la derecha en Jerusalén, dos días antes. El llamamiento a la guerra se ha convertido hoy en el eslogan que más se oye en Israel, junto a los, más moderados, que llaman a la liquidación inmediata de Yaser Arafat, a la expulsión de la Autoridad Palestina a Túnez o a “dejar al Ejército que haga su trabajo”. Pero la población israelí no hace sino repetir lo que dicen la mayoría de los ministros y muy numerosos diputados que, sin rumbo por la implosión del proceso de Oslo o, al contrario, felices por su fracaso, no ven otra vía que la escalada de violencia.

Impotencia. Todo parece indicar que el atentado de Tel Aviv, que ha hecho 20 muertos, ha logrado hacer que se les “fundieran los plomos” a los israelíes y sus dirigentes. Pues estos llamamientos a la guerra no tienen ningún objetivo particular, ni en términos estratégicos, ni siquiera en términos de enemigos

específicos. Es la venganza en estado puro, y sobre todo un signo de impotencia total y de incapacidad de resolver una crisis que provoca un número creciente de víctimas israelíes, en represalia a la violencia asesina del Ejército y los colonos. Liquidar a la Autoridad Palestina como exige, entre otros, el ministro (Likud) de Seguridad, ¿y después qué? Poner a Arafat y su equipo de rodillas, como quieren los dirigentes laboristas, pero ¿para negociar qué?, puesto que Sharon repite que volver a los parámetros de Oslo es algo que ni se puede plantear. Provocar una guerra con Siria, o quizá Irán o Irak, como quieren el Ejército y el ministro laborista de Defensa, Fuad Ben Eliezer, ¿y después qué? ¿Volver a la situación de conflicto generalizado contra todos los países árabes, incluidos Egipto y Jordania? Incluso la Administración americana comienza a comprender que Israel está arriesgándose a poner a sangre y fuego al Medio Oriente, y consiguiendo a desestabilizar el resultado de 15 años de esfuerzos de para imponer por Washington, sus bombardeos y su embargo, el nuevo orden americano. Es la razón de la llegada del jefe de la CIA, para intentar imponer un alto el fuego, y poner en marcha las conclusiones de la Comisión Mitchell. La presión de la comunidad internacional parece haber tenido un primer éxito: Ariel Sharon no ha respondido (aún) al atentado de Tel Aviv, y Yaser Arafat ha dado la orden de alto el fuego. De ahí a hablar de vuelta a la calma, hay un trecho: el Ejército israelí, por su parte, no ha dejado de disparar, haciendo este fin de semana al menos seis víctimas entre la población civil palestina. De hecho, todo parece indicar que Israel prepara una gran provocación para justificar un ataque de envergadura contra los palestinos.

Sin embargo, si la Autoridad Palestina consiguiera impedir tal provocación y mantener el alto el fuego, Sharon y Peres han preparado ya los argumentos que justificarían tal ofensiva por parte del Ejército israelí: hablan de un alto el fuego total y completo, incluso "*todo lanzamiento de piedras*" (sic), "*toda forma de incitación contra Israel*" (sic), así como del arresto de varios centenares de supuestos dirigentes de Hamas y de la Jihad islámica. Tras un período de prueba no determinado pero largo, Israel contemplaría entonces cumplir su parte en las conclusiones de la Comisión Mitchell... salvo la congelación de las colonias, que es su columna vertebral.

Presiones internacionales. Tales condiciones harían reír si, en su conjunto no fueran aceptadas por los americanos, y apoyadas por Europa, Egipto y Jordania, incluso si esos Estados saben pertinentemente que tal fórmula no tiene ninguna oportunidad de lograr nada serio; pero al menos, creen que permite ganar tiempo.

Una vez más, aceptando el juego diplomático, Yaser Arafat se ve sometido a inmensas presiones por parte de la comunidad internacional: él, y sólo él, tiene que dar pruebas de sus buenas intenciones, dividir a su pueblo y desarmar a la Intifada, él tiene que correr todos los riesgos, y quizá, si aprueba el examen, tendrá derecho a una congelación parcial de las colonias.

¿Para eso ha sacrificado el pueblo palestino más de 600 de sus hijos e hijas durante los últimos nueve meses? ¿Para eso ha estado dispuesto a vivir en un estado de sitio permanente que ha destruido su sociedad y su economía?

No hay ninguna posibilidad de que, por parte palestina, el alto el fuego se sostenga si no hay cambios tangibles y rápidos en la actitud israelí, incluso en el marco de una reanudación de las negociaciones, esta vez sobre la base de las resoluciones de la ONU, y con su presencia activa. No hay ninguna posibilidad tampoco de que el presidente palestino acepte los diktats israelo-americanos, y corra el riesgo de dividir la unidad palestina construida a tan alto precio, sin que Israel de pruebas de una voluntad clara de poner fin a su agresión y sin pruebas concretas de una reducción de la violencia. Sólo una intervención activa de la comunidad internacional, comenzando por una fuerza internacional de interposición que pudiera proteger a la población palestina de los ataques israelíes, es capaz de imponer un verdadero alto el fuego, y permitir una reanudación de las negociaciones para poner fin a una ocupación que dura ya más de 35 años. [*Michel Warshawski. Rouge, 14 de junio de 2001. Traducción: Alberto Nadal*]



Bush. Terrorismo ambiental

Ecologistas en Acción ha pedido una respuesta contundente de la comunidad internacional ante el plan energético presentado por el presidente de los EE UU, George G. Bush.

Para Ecologistas en Acción es un verdadero atentado contra el medio ambiente mundial y un sinsentido el lanzarse a la construcción de nuevas centrales, tanto térmicas como nucleares. No es verdad en absoluto que el país más consumidor de energía por habitante del mundo vaya a enfrentarse a una nueva crisis de energía. Los apagones de California no son sino una excusa para satisfacer las demandas de las compañías petroleras y de la industria nuclear.

El consumo energético de un habitante de Estados Unidos es casi 5 veces el de la media mundial, casi 4 veces el de un español y 25 veces el de un habitante de la India. En estas circunstancias resulta cínico argumentar que EE UU se va a enfrentar en los próximos años a una nueva crisis energética. Más bien habría que pedir al país más consumidor de energía del mundo que adoptara medidas para reducir su consumo de energía.

Las repercusiones ambientales globales de las medidas propuestas por Bush pueden ser terribles desde el punto de vista de generación de residuos radiactivos y de emisiones de gases invernadero. El desarrollo nuclear preconizado es suicida en un país donde se había procedido al abandono gradual de la energía nuclear. El volumen de residuos radiactivos a gestionar será inmenso y aumentará el riesgo de accidente. Por otra parte, la contribución al cambio climático, que ya es inadmisibile, se verá aumentada enormemente.

Los recientes apagones de California no se han debido a la escasez de fuentes energéticas, sino al modelo de gestión energética liberalizada que abandona la idea de planificación en base a la oferta de que se dispone y a la demanda que cabe esperar. Asimismo se abandona totalmente toda pretensión de incidir sobre la demanda para reducirla y moderar así el desbocado consumo energético. La solución a los apagones similares a los de California no pasa, por tanto, por aumentar sin medida las fuentes de energía, sino más bien por una planificación energética consecuente y, sobre todo, por una moderación del consumo que lo coloquen a niveles razonables.

Por tanto, dichos apagones no son sino una excusa que le sirve a Bush para plegarse a los intereses de las poderosas petroleras y de la industria nuclear y del carbón. El abandono del Protocolo de Kioto no fue sino el prelude de una actuación que se puede calificar de terrorismo ambiental y que no puede quedar sin una respuesta de la comunidad internacional.

2 miradas voces

Galerians



Alberto Hilario Silva



Alberto Hilario Silva

Alberto Hilario Silva es un fotógrafo nacido en Zamora. Comenzó su dedicación a la fotografía especializándose en temas de naturaleza y colaborando en numerosas revistas.

Tras cursar estudios de Filosofía en la Universidad de Valencia cambia radicalmente el motivo de su inspiración y es el ser humano el centro de su interés. El rostro y la relación de la persona con su medio son los dos ejes que articulan sus últimos trabajos.

Galerians analiza el pulso del tiempo, medido con suavidad, a través de una feria rural alternativa en Aiello de Malferit: La cadencia relajada en el ir y venir, comprar y vender, mirar y oler, pasear por el mercado, encontrar a los amigos...









1 **EsPPaña**

Exacerbación y reformulación del nacionalismo español

Juan Trías Vejarano

La tesis que pretendemos desarrollar en este trabajo es la que viene enunciada en el título, esto es, que no sólo el nacionalismo español se ha exacerbado en los últimos años, sino que ha adoptado formas, que si no constituyen una absoluta novedad, sí suponen ciertos desplazamientos respecto a la fórmula que adoptó el nacionalismo de la derecha española en el siglo XX, hasta culminar en el franquismo; es obvio que nos referimos al nacionalcatolicismo.

Antes de adentrarnos en el argumento, querríamos hacer algunas consideraciones. Hoy existe una tendencia con amplio eco, especialmente en medios intelectuales, a la descalificación no sólo de los nacionalismos, sino del nacionalismo en general. Evidentemente en ello juega la contemplación de lo acontecido y de lo que está sucediendo, sobre todo en las antiguas URSS y Yugoslavia. Contrasta con las apreciaciones vigentes en las décadas de los cuarenta, cincuenta, sesenta y setenta, donde el protagonismo en el llamado Tercer Mundo de los movimientos de liberación nacional de carácter anticolonialista y antiimperialista, hacía que, desde los medios de izquierda, se juzgase positivamente, si no a todos, por lo menos a ciertos nacionalismos, subrayando su carácter emancipador. Estos juicios favorables

no se reducían a ese ámbito, sino que se extendían, por ceñirnos a los más próximos, a los movimientos presentes en el marco del Estado español, considerándolos, no sólo un factor capital en la lucha antifranquista, sino señalando, también, su signo liberador, lo que ciertamente tenía que ver con el protagonismo en ellos de fuerzas de izquierda y con el carácter que se daba a la lucha, no estrictamente nacionalista, sino ligada a un proyecto de transformación sociopolítico; estas apreciaciones, no se extendían a todos los movimientos, pero, repetimos, el papel que jugaban en ellos los grupos de izquierda, conllevaba una visión, por lo general, en positivo.

¿Nacionalismo de izquierdas?

Hoy las cosas han cambiado y nos desviaría de nuestro objetivo entrar en una consideración general del significado de los nacionalismos en el presente. Sin embargo, al respecto, querríamos llamar la atención sobre algo. Se olvida a menudo que el Estado-nación, o los Estados-nación, constituyen el marco político del mundo contemporáneo, y que pese a la erosión de la soberanía, la disposición del poder político de carácter estatal continúa constituyendo una importante reserva de poder, de control de recursos de distinto signo. Pero, además, está el problema de las identidades étnico-territoriales, a las que el marxismo (con alguna notable excepción) infravaloró en su entidad o contempló desde una perspectiva subordinada a los intereses estratégicos del movimiento obrero; por supuesto, la infravaloración no ha sido exclusiva de esa corriente. Sin forzar las cosas, se puede afirmar que todos somos nacionales de alguna nación; la afirmación de muchos de no ser nacionalistas, debe ser tomada con muchas reservas, sobre todo cuando proviene de los pertenecientes a una realidad estatal-nacional consolidada.

Por lo mismo, no se acaba de comprender las resistencias de los sectores mayoritarios de las izquierdas españolas frente a los nacionalismos llamados periféricos, no admitiendo que pueda haber en ellos un nacionalismo de izquierdas. Habida cuenta de la persistencia de los marcos estatal-nacionales, no se entiende que un marco estatal-nacional vasco sea un obstáculo mayor a la lucha de clases que uno español. Puestos a ser internacionalistas, por qué detenerse en los actuales Estados-naciones. Cosa distinta es la necesidad, habida cuenta de los procesos de transnacionalización del capital, de articular formas transnacionales de lucha. Si se invoca el marxismo, no debe olvidarse que en muchos de los que se reclamaban de esa teoría, se reconocía que la irresolución de problemas nacionales constituía un obstáculo a la lucha de clases.

Aparte su significado sobre lo que tanto se ha discutido y continúa discutiéndose, es evidente que en el seno de cualquier nacionalismo, existen diferentes versiones del mismo, que tienen que ver, entre otros elementos, a cómo se configura la nación de la cual se reclaman, lo cual nos sitúa en el terreno del presente trabajo. Sería injusto, a la par que inexacto, equiparar el naciona-

lismo español al nacionalcatolicismo, como lo es asimilar el nacionalismo vasco a las formulaciones sabinianas, que, por otro lado, no deben aislarse del marco doctrinal prevaleciente en la época en que fueron formuladas.

Existe un nacionalismo español de cuño liberal, con su consecuente idea de nación española, cuya ocultación bajo el franquismo y la identificación de éste con el nacionalcatolicismo ha motivado su olvido, sobre todo por parte de sectores adscritos a los llamados nacionalismo periféricos, que tienden a asimilar al nacionalismo español con su versión franquista. Además, en algunas de sus versiones, sin dejar de predicar la idea de nación española como comprensiva de todo el territorio bajo la actual soberanía del Estado español, no han dejado de sostener una visión de España más abierta a la pluralidad, lo que en ocasiones se ha expresado bajo las discutibles fórmulas de nación de naciones o las Españas. Pero, evidentemente, el nacionalismo español, por liberal que haya sido y sea en su concepción de la nación española, no ha dejado de rechazar, implícita o explícitamente, la idea del carácter plurinacional del Estado español, por lo menos con todas las consecuencias que se derivan de la plurinacionalidad de un Estado. En esta materia sectores de la izquierda española se manifiestan notablemente ambiguos, como lo revela la lectura de documentos de diferente carácter del PSOE, PCE e IU.

El nacionalmonarquismo

Después de este largo preámbulo, que no estimamos ocioso, centrémonos en nuestro tema. Como dijimos al principio, el nacionalismo de la derecha española, nos parece que está adoptando formas que vienen a desplazar a la vieja fórmula, tanto tiempo vigente, del nacionalcatolicismo, que, como es de sobras conocido, es muy anterior al franquismo, aunque alcanzase bajo éste su expresión culminante. Una de esas sería lo que nos atreveríamos a denominar como nacionalmonarquismo. De todos modos, conviene adelantar que el nacionalmonarquismo no parece una exclusiva de la derecha española, por más que sea ésta la que lo haya desarrollado al máximo.

Tal vez sería atrevido afirmar la desaparición total del nacionalcatolicismo; núcleos eclesiásticos, nativos y foráneos, y sectores del laicado, continúan presentando la catolicidad como elemento cosustancial a la nación española, y tal vez esta idea no deja de informar el pensamiento actual de buena parte de la derecha española. Lo proclamado en el artículo 16.3 de la actual constitución de que “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”, es olvidado, si atendemos a la asistencia de autoridades del Estado a ceremonias religiosas y la presencia de ritos católicos en actos públicos, no ausente bajo el gobierno del PSOE, pero reforzado bajo el PP. Pero, si nos situamos en el terreno de las manifestaciones explícitas, dicha tesis no aparece en el primer plano. La sociedad española ha experimentado un indudable proceso de secularización y, además, la asociación del nacionalcatolicismo con el franquismo, ha conllevado que una derecha, que ha buscado presentar una cara más moderna y liberal, lo haya, si no abandonado, sí desplazado a un segundo plano.

Para un conciencia mínimamente crítica y democrática, resulta llamativa la exaltación monárquica a la que se ha llegado, y no sólo en los medios oficiales, aunque en éstos alcance el paroxismo. La cosa viene de más lejos que del acceso del PP a las responsabilidades gubernamentales, aunque bajo él se ha exacerbado. Y no se ha limitado a resaltar sin límite el papel del actual monarca en la restauración y defensa de la democracia, sino que se ha extendido al pasado, como lo acreditan las celebraciones, sobre todo de los centenarios de Felipe II y Carlos V; ignoramos cuál ha sido el coste financiero de las conmemoraciones carolina y filipina, pero ha debido ser enorme, si atendemos al número de exposiciones, coloquios, conferencias, emisiones televisivas, ediciones de libros y catálogos, etc. Se ha ofrecido al público una imagen dulce de ambos monarcas, de la que desaparecían cualquier elemento negativo o conflictivo.

El arquetipo

Lo que interesa resaltar es que bajo todo esos fastos se revela una identificación de España con la monarquía, que si no es nueva, ha adquirido un inusitado vigor en estos años. Parece como si, ante los aspectos problemáticos de otras identidades –la católica o la popular, por ejemplo, y por razones opuestas– la monárquica cumpla un renovado papel como signo identitario, para el conservadurismo español. Esa *“indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”* del artículo 2 de la actual Constitución, encuentra su expresión en el Rey, cuyos dos cuerpos, por emplear la metáfora medieval, simbolizan, de una parte, la unidad institucional, y de otra, el vínculo afectivo entre todos sus súbditos, que tienen en él un padre común y, por naturaleza, indivisible. Según la ocasión, se juega con una u otra figura. En su cuerpo institucional, el de las grandes solemnidades oficiales, el rey afirma la unidad de España. En su cuerpo físico, en su figura humana, la que se exterioriza en visitas, condolencias, etc, su amor solícito por todos los españoles. A ello habría que añadir el papel jugado por las imágenes, profusamente difundidas, de la familia real, imagen y espejo de la gran familia española, una en su diversidad. El inefable Camilo José Cela, marqués de Iria Flavia por designación del actual Rey, en la conferencia de clausura del ciclo *“Veinticinco años de reinado de S.M Don Juan Carlos I”*, celebrado en la Real Academia de la Historia, terminaba su intervención diciendo: *“El Rey, antes lo dije, es el arquetipo de español”*. (El País, 26-4-2001)

Además, la identificación con la monarquía, sirve para reforzar las ideas de antigüedad, permanencia y continuidad de la nación española. El tópico, machaconamente reiterado, de que España alcanza –o, mejor, recobra– su unidad nacional y estatal bajo los Reyes Católicos, funde las tres realidades bajo la monarquía: un rey, luego un Estado y una nación, que se presentan desde entonces indisolublemente unidos. Los conservadores españoles –¿sólo ellos?– a pesar de su invocación de la democracia, reiteran la paradoja del liberalismo

decimonónico, que pese a reclamarse del principio de la soberanía nacional, hacían de la monarquía el artífice de la unidad nacional, como ha recordado Pérez Garzón. En la misma dirección se movía el ciclo de conferencias “La Corona en la historia de España”, celebrado en abril y mayo del 2000. Pero, incluso entre muchos de aquellos que reconocen lo problemático que es hablar de nación española en el siglo XV, hay una inclinación a ver en la unión de las coronas de Castilla y Aragón una prefiguración de la nación española, que se revela en la frase, tantas veces utilizada, frente a los nacionalismos periféricos, de que no se pueden romper tantos siglos de vida en común.

En todo caso, la exacerbación del nacionalismo español en los últimos años es un hecho de fácil constatación... Ciertamente, el papel del PP es capital, pues éste ha convertido la afirmación española en una de sus principales banderas, con múltiples proyecciones, desde las propuestas para modificar los contenidos de la enseñanza de la historia, hasta las declaraciones de sus líderes, entre los que ha destacado el presidente del gobierno. Pero, la que sin exageración cabe calificar de ofensiva españolista no se limita a las esferas gubernamentales en sentido estricto, sino que se da en todos los ámbitos, desde las magistraturas del Estado, empezando por las más altas, hasta los diferentes componentes de la llamada sociedad civil. Perseguir sus diferentes manifestaciones, requeriría un tiempo y un espacio de que no disponemos, en la que han jugado y juegan un papel relevante los medios de comunicación públicos y privados, con el protagonismo de los órganos más cercanos al Partido Popular, pero sin que se limite a éstos, pues se podría hablar de una impregnación general de la que escapan pocos de los más difundidos.

La llama españolista

Como muestra significativa, tenemos el caso de la Real Academia de la Historia con su libro colectivo “Reflexiones sobre el ser de España”, que en 1998, al año, ya iba por su tercera edición, fruto, según figura en una contraportada, de la colaboración de la docta institución con las fundaciones “Banco Bilbao-Vizcaya”, “Ramón Areces” y “Caja Madrid”, que, de esta forma contribuían a tan patriótica tarea, y que mereció el premio nacional de historia del año 98: los sinsabores del centenario del Desastre se compensaban con el pensamiento reconfortante de la sustancialidad de España a lo largo de la historia. La obra, de la que la corporación “*se siente solidariamente responsable*”, invoca los valores de científicidad y serenidad, pero su orientación se pone de manifiesto en el último capítulo subtítulo “Síntesis y conclusiones?”, en el que el coordinador del ciclo escribe: “*En definitiva, se ha tratado de mostrar la existencia y permanencia efectivas de un sujeto histórico –España– siguiendo sus diversas manifestaciones desde sus primeras percepciones hasta nuestros días*”, para terminar con las siguientes palabras: “*¿Negación actual de España?: Síntoma*

de incultura histórica. Por el contrario, constancia de un sujeto histórico, como todo ser vivo, con sucesivas fisonomías; 'cum multis angulis', que diría una Crónica asturiana del siglo IX". Del informe de la misma institución sobre la enseñanza de la historia del verano del 2000, lo menos que se puede decir es que, por su unilateralismo, ha alimentado la llama españolista.

Una manifestación del fenómeno, que últimamente ha ocupado el primer plano de la actualidad por la relevancia del personaje, es la de la exaltación del castellano. Si ya es vieja su asimilación a lo español, de tal modo que cultura y lengua española son por antonomasia las castellanas, representa una relativa novedad la afirmación del castellano como lengua de encuentro, nunca de imposición. La tesis expuesta por lingüistas, como es sabido, la recogió el rey en el discurso pronunciado con ocasión de la entrega del premio Cervantes, cuando sostuvo que: *"Nunca fue la nuestra lengua de imposición, sino de encuentro; a nadie se obligó nunca a hablar en castellano: fueron los pueblos más diversos quienes hicieron suyos, por voluntad libérrima, el idioma de Cervantes"*. Una de las claves del discurso la proporcionó el subdirector de la RAE, que es uno de los sostenedores de esas tesis, cuando atacando a los que denunciaron las palabras del rey, dijo: *"no pueden decir calumnias históricas quienes hacen bueno a Franco, porque ellos coinciden con él en no dejar a los padres elegir la lengua que quieren que sus hijos utilicen en la escuela"*. O sea, las lenguas minoritarias se imponen, son exclusivistas, mientras el castellano es la lengua de encuentro, cimiento de la unidad española por ello mismo.

Tanto como las palabras del Jefe del Estado son significativas las reacciones. Por una parte, las de los que lamentándolas, no dejaron de exculparlas, haciendo recaer la responsabilidad en el gobierno, lo que muestra el grado de papanatismo y servilismo monárquico a que se ha llegado. Por otra parte, la del gobierno y sus aledaños, defendiéndolas; destacando, una vez más, el presidente Aznar, a quien se podría denominar el gran cruzado del españolismo, tachando la sensibilidad nacionalista por las palabras del rey como denotadoras de una "flojera bastante clara".

No nos parece, en cambio, que el llamado patriotismo constitucional forme parte del nuevo nacionalismo español, pues, de una parte, esa idea está en contradicción con el esencialismo que lo preside; y de otra, parece que su reivindicación de la Constitución tiene más que ver con la defensa del *statu quo* institucional y con los contenidos españolistas del texto constitucional.

Un fenómeno de impregnación

Para terminar habría que preguntarse por las razones de este españolismo renovado, del que el Partido Popular ha hecho una de sus banderas, pero cuyo ámbito de irradiación trasciende claramente las fronteras de esa fuerza y sus círculos de influencia. A primera vista, se podría sostener que la derecha española no hace más que retomar, aunque con ciertos cambios a los que nos

hemos referido, un elemento que ha formado parte de sus señas de identidad clásicas, en una coyuntura favorable, que no sólo es electoral; que contrasta con la de los primeros años de la democracia, en que dicha bandera fue levantada sobre todo por las Fuerzas Armadas, mientras que la derecha civil, por lo menos en el terreno cultural, sufría una cierta crisis de legitimidad, que obligaba a dejar en un segundo plano uno de los elementos identificadores del franquismo

Otro elemento a tener en cuenta es, por supuesto, el conflicto con los nacionalismos llamados periféricos, en un momento de reforzamiento de las tesis identitarias y soberanistas por parte de ellos (Declaración de Barcelona, etc.). En relación con esto, la campaña españolista, sobre todo por parte del PP, tiene una doble proyección. De una parte, y quizás primordialmente, se dirige a la población del territorio que no forma parte de las Comunidades Autónomas con presencia nacionalista, para reforzar su hegemonía cultivando el sentimiento españolista de agravio y afirmación. De otra, pretende en Cataluña, Euskadi y Galicia, movilizar a los sectores de identidad española, para debilitar a los nacionalismos.

En un plano más general y teniendo en cuenta experiencias vecinas, cabe contemplar esa apelación a valores patrióticos (la vocación universal de España, manifestada en su lengua, hablada en todo un continente y que se nos recuerda es la segunda en EEUU), identitarios y comunitarios, como elemento compensatorio, en el plano simbólico, de los fenómenos de fractura social, marginación y precarización, de una parte; y de otra, de globalización; algo que en el nivel cotidiano realizan el fútbol y en general las competiciones deportivas, a cuyas celebraciones, cuando asumen un significado nacional, son asiduos los miembros de la casa real, que con su presencia, contacto con los jugadores y gestos ostensivos de alegría manifiestan su identificación con el pueblo español, su valor de símbolo de la nación.

Antes de concluir querríamos llamar la atención sobre un hecho que merecería una consideración más detallada y al que ya hemos hecho alusión. Nos parece que sería engañoso reducir el españolismo a un fenómeno de la derecha y de su principal expresión política el Partido Popular. Nos parece que se ha producido un fenómeno de impregnación, que ha alcanzado a organizaciones políticas y sociales, intelectuales y medios de comunicación adscritos a la izquierda, aunque con diferente intensidad y excepciones. Ello explicaría el amplio eco encontrado en considerables fragmentos de la población.



2 EsPPaña

La fallida reconquista

Joxe Iriarte "Bikila"

Es una tarea pendiente analizar con profundidad y precisión cual es la "idea de España" que guía la política del PP; incluso preguntarse si en realidad existe tal "idea", expresada de forma que vaya mas allá, del uso y abuso, de los tradicionales tópicos a los que se agarra la derecha española para justificar su política nacional y de Estado (los esfuerzos de Herrero de Miñon por ilustrar a sus colegas con una visión de "España" algo diferente, no gozan de mucho predicamento).

De todas formas, sí quisiera constatar, que a diferencia del PSOE de la primera legislatura, que intentó "regenerar" la idea de España, asociándola al impulso modernizador y europeísta; un patriotismo de corte más constitucional que nacional, y una visión mas pluralista de la "nación española", (intento, que ciertamente terminó rápidamente tapado por los excrementos de la guerra sucia y la "defensa de la patria", la cual "al igual que a la madre, se la defiende, con razón o sin ella"); el PP desde el mismo día que conquistó el gobierno central, abordó el tema desde otro punto de vista: el de la pronta recuperación de las esencias patrias, "incorrectamente identificadas" con la dictadura franquista (el anterior régimen "autoritario conservador", según su particular lenguaje).

Desde el principio han planteado sin complejos que el diseño de España, y sobre todo, su configuración institucional, está totalmente finiquitada. Y caso de necesitarse un reajuste, éste se dará en un sentido más centralista, en una dirección bastante parecida a lo que fue la LOAPA (en clara alusión a vascos y catalanes, los cuales en una situación anómala como fue la transición, consiguieron cotas de autonomía que, si por ellos fuera, hoy no las tendrían).

En lo relativo al País Vasco, desde que llegó al gobierno central, el PP ha tenido claro su objetivo: acabar con ETA y por extensión con el nacionalismo radical mediante solución policial, pero también, acabar con la hegemonía del nacionalismo en tanto que aspiración política, e identidad nacional. Todo ello,

fue claramente expuesto de forma muy temprana, en un documento elaborado conjuntamente entre las direcciones de Catalunya y el País Vasco, que fue conocido gracias a una filtración. En dicho documento, se abogaba por disputar al nacionalismo vasco, además del poder institucional, su hegemonía en el terreno ideológico y cultural, necesitándose para ello una estrategia que integrase todos los aspectos relativos a la política, la cultura, la identidad (por ejemplo, detalles como la construcción de la plaza de toros de Donostia, porque ello reforzaría la españolidad de la ciudad). Este enfoque nos da luz sobre, por poner un ejemplo, las actitudes respecto al euskara que están teniendo en Alava y Navarra respectivamente; o sea en las instituciones que dominan.

El paso de la aspiración a la plasmación, evidentemente, ha requerido su tiempo. Han sido necesarios cambios políticos y psicológicos en la población vasca, y sobre todo, el asentamiento y fortalecimiento político y organizativo del PP en todo el País Vasco, y notablemente en Alava y Navarra. El salto cualitativo lo dieron a raíz del asesinato de su concejal de Ermua, y la gran convulsión política y social que ello produjo en Euskal Herria y el resto del Estado Español.

A efectos del mismo, llegaron al convencimiento de que podían marcar las pautas, hasta el extremo de no necesitar la Mesa de Ajuria-Enea, el instrumento más eficaz de que gozó el “frente institucional” para disputar al MLNV la calle, y deslegitimar a ETA, pero que en su punto número 10 abogaba por una salida dialogada. Aspecto este último, totalmente rechazable para quienes aspiran, vía victoria policial, la derrota total del adversario. Y desde entonces no han cesado en el empeño.

Romper el bloqueo

De la misma forma respondieron a la constitución del Foro de Lizarra-Garazi (asunto éste que ya hemos tratado en *VIENTO SUR*). O sea, a la posibilidad de romper el bloqueo existente en torno a la violencia y, a la vez, posibilitar un modelo de trabajo para abordar globalmente el contencioso Euskadi-Estado Español.

La actitud del PP fue denunciar tal empeño como una “tregua trampa”, mediante la cual el frente nacionalista proyectaba, ni más ni menos, que excluir a los no nacionalistas social y políticamente. La metáfora de las maletas (que según ellos tendrían que hacer los no nacionalistas) empleada en la campaña electoral de 1998, mostró lo burdo, pero a la vez, lo contundente de la respuesta de un partido aposentado en el Gobierno Central, y que apostaba por la beligerancia abierta, antes de buscar una salida vía diálogo y negociación (tal como por ejemplo, aconseja Aznar cuando se refiera al caso txetxeno, palestino, irlandés, colombiano, etc.)

En el último período, y afectos de la ruptura de la tregua por parte de ETA, que motivó la ruptura del pacto de legislatura entre EH, PNV y EA, el PP (siempre con la ayuda del PSOE que ha jugado el papel de comparsa sin apenas matices diferenciadores) consideró que había llegado la hora de la ofensiva final, y prácticamente en todos los frentes.

En primer lugar, retomando el hilo de las medidas policiales y judiciales que condujeron, en la fase anterior a Lizarra-Garazi, al cierre de Egin y el encarcelamiento de la Mesa Nacional de HB, vuelve a la política de detenciones masivas, e ilegalizaciones de organizaciones políticas del entorno del MLNV (Ekin, Haika), pero también, de personas y organizaciones sociales que impulsan vías pacíficas de desobediencia e insumisión civil (Fundación Zumalabe, militantes de Auto-determinazioaren Biltzarra). La visión policiaca represiva de que todo el que comulga con ideas nacionalistas radicales es parte de entorno de ETA, sirve para arremeter contra todo lo que molesta, aún a costa de reducir libertades. Sus intelectuales orgánicos como Juaristi y Savater afirmaron en plena campaña *“que no sólo son los métodos violentos los rechazables, sino las ideas”*. Savater llegó a decir que *“no es verdad que todo proyecto político puede defenderse por vías pacíficas”*. Algo así se dijo en su tiempo sobre el comunismo, un proyecto intrínsecamente malo, antidemocrático, aunque se defendiese pacíficamente.

Y con la represión policial y judicial, el frente reculturizador y la ofensiva contra el euskara. El debate en torno al decreto sobre Humanidades muestra que solo cabe un enfoque de la historia: aquella que se refiere a España, explicada además, desde una visión apologética de la construcción del Estado español, incluido las “glorias imperiales”, y las gestas como los de “los últimos de Filipinas”. Una intromisión en las competencias ya asignadas a las Comunidades Autónomas, y sobre todo, en territorio considerado “irredento”, como el de la enseñanza vasca, pública y la de las ikastolas.

“Colegio inglés”

Según la Constitución, sólo hay una lengua oficial para todo el territorio español, y también para Navarra, el español. La antidemocrática ley del euskara - mediante la cual el euskara adquiriría rango de cooficial en el territorio considerado como euskaldún, se le convertía en lengua subalterna en la llamada “zona mixta”, y se le excluía totalmente del ámbito oficial en el considerado territorio exclusivo del castellano, ya que las ikastolas son “entidades privadas”, como las de un “colegio inglés” por poner un ejemplo- suponía por lo que se ve, para el tandem PP-UPN un enfoque artificial y excesivo (a pesar del aumento de la demanda de aprendizaje en todos los niveles y territorios, o quizás, precisamente alarmados por ese hecho). Por ello decidieron cortar por lo sano, limitando su expresión al ámbito de la zona exclusivamente euskaldún, emprendiendo la retirada de todos los signos externos en las demás zonas, restringiendo presupuestos, equiparando su valor en puntuaciones, como si se tratase del alemán, el francés, etc. Organizaciones de defensa de la lengua vasca han recurrido al Tribunal de las lenguas minoritarias de Estrasburgo por considerar que el Gobierno de Navarra conculca derechos explicitados en convenios y declaraciones firmadas hasta por el propio Estado español. En

Álava, aunque de forma más limitada, también afloran aviesas intenciones, y el Ayuntamiento en manos del PP, ha restringido ayudas al euskara, aduciendo que no las necesita, y matizando, que, de haberlas, tienen que plantearse al igual que si se tratase de subvenciones para el aprendizaje del inglés.

Contra Ibarretxe

El colofón, ha sido la campaña de acoso y derribo del presidente Ibarretxe. Desde el momento en que deshizo el pacto de legislatura entre EH-PNV y EA, la convocatoria de elecciones ha sido la matraca permanente que ha presidido toda actuación del PP, junto con la acusación de que terrorismo y nacionalismo son dos caras de la misma moneda, y que no hay posible solución la tema de la violencia sin descabalar al nacionalismo de las instituciones de autogobierno. Lo absurdo de dicha posición, como demuestra el hecho de que ellos mandan en Navarra, disponen de la mayoría absoluta en el Gobierno e instituciones centrales, incluso un amplio consenso en torno al Pacto Antiterrorista, y no han conseguido que ETA deje de actuar en el Estado español, incluido su capital, no ha sido obstáculo para que esa haya sido una de las tesis centrales de su campaña electoral, acompañado de la acusación de que los no nacionalistas carecen de libertad, y casi de derechos.

Y ese ha sido su gran error, pues si bien, es incontestable que el PP, en buena medida a costa del PSOE, se ha fortalecido hasta un extremo impensable hace tan solo 12 años, el error de cálculo sobre sus posibilidades, y sobre todo, de que podría alcanzar la victoria en términos de conquista y exclusión del nacionalismo, le ha supuesto su más estrepitosa derrota (que posiblemente, marque unos límites que difícilmente pueda superar en años venideros, por lo menos en lo que a la CAV se refiere).

La sociedad vasca, si bien ha demostrado mediante el voto su rechazo a la ruptura de la tregua por parte de ETA, (infringiendo un fuerte varapalo a quien fue el máximo beneficiario de la misma, EH) no por ello, se ha mostrado proclive a las tesis del PP. Muy por el contrario, ha reaccionado alarmada ante lo que han visto como una auténtico peligro de involución neo-franquista y nacionalista española; también, ante un discurso revanchista que cierra puertas a toda posibilidad de diálogo y negociación para solventar el problema de la violencia; que utiliza el dolor de las víctimas a su favor, como si sólo existiera un tipo de dolor y sufrimiento. De hecho, el apoyo que tuvieron en el ámbito social (aunque ello no se reflejase electoralmente) las tesis de Lizarra-Garazi frente a la primera ofensiva del PP, han tenido una segunda versión, esta vez, también electoral, agrupándose en torno al PNV y EA, que ha aparecido como los mejores defensores del espíritu de Lizarra (aspecto este más virtual que real, a mi modesto entender, pero que así ha sido visto por la gente).

Resumiendo: la política del PP y del PSOE es profundamente errática. El pueblo vasco, quiere paz, y tiene muy claro que ésta se logra mediante una solución dialogada; quiere autogobierno pleno (las amenazas respecto a la

negociación del Concierto Económico, y la congelación *sine die* de las transferencias que faltan, han añadido grados a dicha aspiración) y quiere que se reconozca su mayoría de edad, el espacio vasco de decisión: que sean sus ciudadanos/as, quienes decidan su futuro, sea en la dirección que sea.

Mayor Oreja ha sido visto como un cruzado de la españolidad que, banderas al viento, venía a reconquistar viejos laureles (incluidos los de la laureada de San Fernando) y así se le ha respondido.



3 EsPPaña

La política exterior del PP: querer y no poder

G. Buster

Los seis años de política exterior del PP parecen estar dominados por una maldición gitana de Felipe González a José María Aznar, cuando le pronosticó que nunca estaría “entre los grandes” de la UE y que su inexperiencia le llevaría a “actitudes miopes, nacionalismos replegados o rivalidades destructoras” (*El País*, 17.1.96 y 4.2.96). El último ministro de Asuntos Exteriores del PSOE, Carlos Westendorp, tras reivindicar que “España ha conseguido, desde un punto de vista diplomático, colocarse en primera división”, advertía que “podemos perder en muy poco tiempo los importantes avances de la última década” (*El País* 21.12.95). Tales eran los miedos que despertaba Aznar en el imaginario del *felipismo* como nuevo gestor de un patrimonio de política exterior –única “política de Estado” posible para el PSOE– que situaba a Felipe González entre los padres fundadores de la Unión Europea de Maastricht, al lado de Mitterrand y Kohl.

Estas aprensiones se fundamentaban en la escasa relevancia de Aznar a nivel europeo como líder de la oposición conservadora, incluso entre sus propios correligionarios de allende los Pirineos, sus livianas intervenciones en el Congreso frente a un Felipe González que había hecho de la política exterior la principal preocupación de su tercer mandato y el programa electoral del PP, que recogía sin un ápice de originalidad, las líneas generales de la “política de Estado” del PSOE.

Pero la maldición se convirtió en una visión que ha dominado toda la política exterior del PP: España tiene que estar entre los grandes de la UE. Aznar tenía que aparecer en la foto de familia de los Consejos Europeos en un lugar tan destacado, si no más, que Felipe González. El imaginario del PP exigía en política exterior la misma “normalización” que en política interior, porque el PP se ve como el auténtico defensor de los intereses de la burguesía española frente a un PSOE siempre limitado por los residuos de su herencia ideológica o su base social. Así, la línea de crítica del PP en la oposición a la política exterior del PSOE, al mismo tiempo que reconocía y hacía propios los éxitos como resultado de un “consenso de Estado”, atribuía los fracasos o carencias a la “escasa defensa de los intereses nacionales” por una búsqueda personal de protagonismo europeo de González —que “había sido un buen presidente para Europa, pero malo para España”—, cuando no a su supuesto anti-americanismo. La llegada del PP al gobierno eliminaría estas incoherencias y permitiría desarrollar plenamente la “política de Estado”.

¿Qué es “estar entre los grandes” para Aznar? Incapaz de contribuir o estar en el círculo decisorio de los debates sobre el futuro de la Unión Europea, la respuesta ha consistido en obtener una cuota de poder lo más parecida posible a la de Francia, Alemania, Reino Unido o Italia, capaz de bloquear las decisiones “contrarias a los intereses de España”. Esta “renacionalización” de la política comunitaria del PP ha determinado todos los otros aspectos de su política exterior, incluidas las relaciones con EE UU.

Una “renacionalización” que ha venido en parte forzada por una intensificación de la competencia de los grandes de la UE por imponer sus propios intereses tras el período dominado por la Comisión Delors y que ha hecho de los Consejos Europeos el motor intergubernamental de la UE frente a una Comisión en crisis permanente o un Parlamento Europeo con muy escasa legitimidad y poder. Pero que es también consecuencia de factores estructurales. La visión de España que proyecta el PP en el debate europeo es la de un Estado centralista en la más rancia tradición españolista porque su principal argumento para defender su status de “grande” es el tamaño de su población frente a otros Estados miembros.

La dinámica de transferencias tanto a la Comisión como a las Autonomías y los municipios mina constantemente el “control” del Estado central sobre esa población y le lleva a adoptar una opción cada vez más intergubernamental y confederal de la construcción europea, así como centralista de su modelo de España. Estas opciones se refuerzan mutuamente y hace que el PP conciba el papel del Gobierno central frente a Bruselas en los mismos términos clientelistas

que achaca a la Generalitat de CiU o al Gobierno Vasco del PNV. Es decir, como distribuidor de unos fondos de ayuda estructurales “arrancados” a la UE y destinados a las autonomías más pobres.

Esta política exterior y esta visión hacen agua por todos lados después de seis años de gestión del PP. Su fracaso se ha podido constatar en la batalla desencadenada antes del Consejo Europeo de Gotemburgo para mantener una parte de los fondos estructurales tras la ampliación de la UE. De la misma manera que Guinea Ecuatorial, Gibraltar, el submarino *Tireless* o el conflicto laboral de los trabajadores de la base naval de “uso conjunto” de Rota han mostrado su incapacidad en la gestión de las relaciones diplomáticas bilaterales.

Pero la segunda conclusión que quiere defender este artículo es que una vuelta a la interpretación *felipista* de la “política de Estado” tampoco permitiría una política exterior que evite que “España pierda peso”. Sin otro modelo o concepción del Estado español no será posible ni definir sus intereses estratégicos en términos “realistas”, “modernizadores” o simplemente “europeos” –por utilizar los conceptos ideológicos en los que se mueven tanto el PP como el PSOE–, ni contribuir como ciudadanos europeos a la construcción de una Europa democrática y socialmente progresista.

Aznar en la UE

La UE es la primera prioridad de la política exterior del PP. Si el referéndum sobre la OTAN de 1986 fue la base fundacional de la política exterior y de seguridad del PSOE, la participación desde el primer momento en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria –y en el euro–, se convirtió en el origen y razón de toda la visión exterior de Aznar.

Aznar ha repetido en diversas ocasiones que cuando el PP llegó al Gobierno, España no cumplía ninguna de las condiciones del Plan de Convergencia. Como Clinton, adoptó la consigna: “*¡Es la economía, estúpidos!*”, aplicó en los presupuestos de 1997 un plan de ajuste durísimo y llegó a un acuerdo general con los sindicatos para la reforma del mercado laboral que le otorgó un margen de maniobra social sin precedentes. En la Cumbre Europea de Bruselas de mayo de 1998, consiguió situarse entre los 11 Estados miembros que constituyeron *Eurolandia*.

La decisión final sobre el cumplimiento de los criterios de convergencia fue política, entre otras razones porque ni Alemania ni Francia los cumplían estrictamente. Pero Aznar había planteado la aplicación del Plan de Convergencia como una batalla no sólo económica y política sino también personal, para situarse entre los grandes, con Kohl y Chirac. Cuando Prodi, entonces primer ministro del Olivo italiano, le sugirió en Valencia en septiembre de 1996 una alianza mediterránea para “flexibilizar” los criterios de convergencia, Aznar lo filtró a la prensa, en un guiño hacia Kohl y Chirac que quemó cualquier entendimiento bilateral con Italia.

Aznar intentó sustentar en su aplicación personal del Plan de Convergencia un modelo ideológico conservador que le convirtiera en un líder de la derecha europea a la altura de Kohl y Chirac. Pero las antipatías personales, acrecentadas en los debates del Consejo Europeo de Amsterdam de 1997 sobre el futuro reparto de votos en el Consejo y la composición de la Comisión, lo aislaron de sus socios naturales y, un año más tarde, la mayoría de los Gobiernos de los Estados miembros estaban compuestos por socialdemócratas o por socialdemócratas y verdes. El modelo conservador del PP no era asimilable en la correlación de fuerzas interna de la mayoría de los Estados miembros.

O casi en la mayoría. Porque a pesar de los choques, primero con Kohl y después con Schroeder, con Prodi y D'Alema, Aznar encontró un aliado de ocasión en el nuevo laborismo de Blair para hacer frente a Jospin. Tras su victoria en Francia en mayo de 1997, el Gobierno de la "izquierda plural" intentó reabrir el debate sobre las consecuencias sociales del Plan de Convergencia en el Consejo Europeo de Amsterdam y después en el Consejo Europeo extraordinario de Luxemburgo sobre el Empleo. Las tímidas propuestas de un plan europeo contra el paro se estrellaron contra la reforma neoliberal del mercado de trabajo de Aznar y Blair, que se volvería a plasmar en una declaración conjunta en abril de 1999.

La segunda contribución del PP al debate sobre la construcción europea tiene su origen en la negativa de Bélgica a extraditar en 1993 a dos supuestos miembros de ETA que habían pedido asilo político. En el Consejo Europeo de Dublín de diciembre de 1996, Aznar introdujo en sus conclusiones el principio de que el asilo político a ciudadanos de la UE era una contradicción con la misma pertenencia a la UE. Bélgica y otros Estados miembros se opusieron a trasladar este acuerdo al Tratado de la Unión. Finalmente quedó reducido a un Protocolo, que limita la posible concesión de asilo político a los ciudadanos de la UE a aquellos casos en los que el Estado miembro de origen haya cometido violaciones concretas de las libertades y los derechos democráticos. Pero el Protocolo permite el estudio de cada una de las solicitudes, tras comunicación al Consejo, paralizando de hecho las extradiciones. A pesar de la ofensiva diplomática previa al Consejo Europeo de Tampere de octubre de 1999, los intentos de llegar a acuerdos bilaterales para conseguir un bloque de apoyo a un "espacio judicial europeo" han fracasado hasta la fecha.

La Agenda 2000

Los debates sobre la Agenda 2000, presentada por la Comisión en julio de 1997 y adoptada finalmente en el Consejo Europeo de Berlín de marzo de 1999, han centrado la política comunitaria del PP. Las reticencias a la ampliación de la UE nacían del miedo a perder el status de "grande" de la UE y a que España quedase excluida de los núcleos duros de la cooperación reforzada en una Europa de geometría variable. La incorporación de nuevos Estados miembros no sólo

desplazará el centro de gravedad de la UE hacia el Este, sino que implica una reforma del reparto de las cuotas de poder que situarán a España claramente en el nivel intermedio, junto a Polonia, y amenazan, por el llamado “efecto estadístico”, con poner fin a las ayudas de los Fondos europeos. Fondos que han supuesto, junto a las subvenciones de la Política Agraria Común (PAC), un flujo neto a favor de España de 8.000 millones de euros en el presupuesto del 2001.

La estrategia de Aznar ha sido la de condicionar los avances en el consenso comunitario sobre la ampliación a la obtención de garantías sobre la cuota de poder de España en las instituciones comunitarias y el mantenimiento del mayor volumen posible de los Fondos Estructurales después del 2006. Pero es difícil exigir el status de grande cuando al mismo tiempo se pide dinero y la imagen del “hidalgo pedigrüeño”, del querer y no poder de la picaresca del Siglo de Oro, acaba dominando el imaginario de cómo perciben al Gobierno del PP el resto de los socios comunitarios.

Mientras públicamente se apoyaba la ampliación, el Gobierno del PP comenzó a levantar en las negociaciones una cadena de obstáculos y condiciones que pudiera intercambiar posteriormente por sus propias reivindicaciones. De entrada, se opuso a la propuesta de la Comisión de una primera ampliación enfocada a Polonia, Hungría, República Checa, Eslovenia y Estonia, por una perspectiva global que no rechazase de antemano a ningún estado candidato. En el Consejo Europeo de Luxemburgo de 1997 apoyó un marco general de negociación de la adhesión para los once candidatos, sin fijar fechas y evaluando país a país.

El debate sobre los fondos de cohesión

El pulso clave se libró en el Consejo Europeo de Berlín de 1999. Aunque los Fondos de Cohesión se redujeron a 18.000 millones de euros y los Fondos Estructurales a 213.000 millones euros para el período 2000-2006, España aumentó su cuota del 55% al 62% en perjuicio de los otros estados miembros receptores, rompiendo un frente que ya no se reconstituiría. Pero el peso de estas ayudas para la propia legitimidad del Gobierno central en Madrid es decisiva: según la Comisión, el efecto acumulado en la última década ha sido un 4% del PIB. En 1999, el flujo neto supuso el 1,2% del PIB. A pesar de las críticas del PSOE por el coste político de la postura negociadora de Aznar y la reducción de un 10% en relación con lo obtenido por Felipe Gonzalez en 1992, Aznar se atribuyó personalmente un éxito sin paliativos.

El éxito se volvió a repetir en el Consejo Europeo de Niza, cuando impuso la adopción por unanimidad de los nuevos presupuestos antes de la ampliación en el 2006, incluido el reparto de los Fondos Estructurales y de Cohesión. El “efecto estadístico” de la ampliación supondrá que la renta per capita de España se situará por encima del 80% de la media comunitaria. A las actuales tasas de crecimiento, solo cinco autonomías (Galicia, Asturias, Murcia, Extremadura y Andalucía) estarán en el 2006 por debajo del umbral del 75% de la nueva media comunitaria

que da derecho a esas ayudas, creando una presión política y social que obligaría a una renegociación de las contribuciones fiscales con las autonomías ricas que hasta ahora ha sido aplazada gracias a los Fondos comunitarios.

Caben varias interpretaciones de por qué Aznar ha decidido situar sobre la mesa ahora la reivindicación de las ayudas comunitarias a estas autonomías después del 2006. Y ello a coste de un enfrentamiento con Francia y, sobre todo Alemania, que ha visto bloqueada su petición de un período transitorio de siete años tras la ampliación para hacer efectiva la libre circulación de trabajadores a cambio de una declaración política de los quince afirmando que se estudiará la exigencia española. Tal vez la razón de no esperar a usar el veto en el 2006 –enfrentarse al resto de los Estados miembros (con el solo apoyo de un Berlusconi que debe a Aznar el no haber sido procesado antes de las elecciones italianas) y provocar que la visita real a Polonia fuese acogida con dedos acusadores de los futuros socios del Este–, tenga que ver sobre todo con la situación interna de España y la propia visión de sí mismo de Aznar. La crisis del proyecto del PP a un año de ganar Aznar las segundas elecciones –la perspectiva de recesión, la ruptura del diálogo social, el fracaso en las elecciones vascas– se combina con la necesidad dotarse de un margen de maniobra para las negociaciones comunitarias sobre el nuevo reparto de competencias a las regiones en el 2004 (que no tuvo más remedio que aceptar en Niza, de acuerdo con el principio de subsidiaridad) y ser él, personalmente, quien se atribuyera el triunfo antes de las próximas elecciones generales. Pero el coste político fue tan alto, que pocas semanas después España se vio obligada a levantar el bloqueo, bajo un torrente de acusaciones y totalmente aislada.

Se trata de una lógica política y negociadora ultimativista que ya demostró sus limitaciones en relación con la reforma de la PAC y las ayudas al aceite de oliva en 1998. Después de un año de bloqueo y de haber quemado todas las alianzas con el resto de los socios mediterráneos, el Gobierno del PP presentó de nuevo como un triunfo la reducción de la producción subvencionada de aceite del 52% al 48% (cuando la Comisión proponía el 40%), a 150 pts kilo (mientras Italia recibía 258 y Grecia 218) y se rechazaban todas las demás reivindicaciones sobre el resto de los productos mediterráneos. Loyola de Palacios, responsable última de la negociación fue premiada con su denominación para la Comisión por el PP, a pesar del incipiente escándalo del fraude del lino.

La batalla final por la “grandeza” del Estado español se libró en el Consejo Europeo de Niza. El resultado final es conocido: España obtuvo el mismo número de votos en el Consejo que la ausente Polonia (27 frente a 29 de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia) pero a cambio de necesitar contar con dos Estados miembros grandes y uno pequeño adicional para constituir una mayoría de bloqueo, perder el segundo representante –como los cuatro grandes– en la Comisión, y 14 escaños en el Parlamento Europeo (50 frente a los 72 de Francia, Italia o Reino Unido). En un marco de crisis abierta del método de toma de decisiones comunita-

rio, con una Comisión Prodi marginada del debate y en una abierta confrontación intergubernamental en defensa de los intereses nacionales por encima de los colectivos de la UE, el *Financial Times* (14.12.2000) reconoció que Aznar había brillado con luz propia, a pesar de no haber conseguido ninguno de sus objetivos declarados y haber quemado para mucho tiempo la posibilidad de alianzas con el resto de los Estados miembros, a un año de la presidencia española de la UE.

Defendiendo el nuevo orden mundial

Aunque el programa electoral de 1996 del PP decía textualmente que “por obligado respeto a la voluntad expresada del pueblo español, no se planteará la revisión de las modalidades de nuestra integración en la Alianza Atlántica”, en noviembre de ese año el nuevo Gobierno del PP presentó al Pleno del Congreso una propuesta consensuada con el PSOE para la integración plena de España en la nueva estructura de mandos de la OTAN. La única condición era que se atribuyeran a “*España responsabilidades de mando y operativos acordes con nuestra contribución militar y peso político, especialmente en las zonas de nuestro interés estratégico en el Atlántico y el Mediterráneo*”.

Madrid fue elegida como escenario de la primera Cumbre de la “nueva” OTAN, el 8 y 9 de julio de 1997. Una OTAN post-guerra fría, cuyo objetivo no era ya la defensa nuclear y territorial estática de Europa Occidental, sino el mantenimiento del nuevo orden mundial, hegemonzado por EE UU tras los Acuerdos de Dayton sobre Bosnia, capaz de intervenir en cualquier lugar de la periferia del sistema, integrar a los antiguos enemigos del Pacto de Varsovia y contener a Rusia. Su nuevo secretario general se llamaba Javier Solana.

A pesar de la evidente buena voluntad del PP –y del PSOE– la integración plena de España en la estructura militar chocó con dos inconvenientes. El primero, que la estructura de mandos de la OTAN ignoraba la prioridad tradicional de la estrategia militar española, el control del eje Baleares-Gibraltar-Canarias. Mientras que la Península quedaba bajo el mando OTAN de Nápoles, Canarias pertenecía al de Lisboa. El segundo problema, era la amenaza de Gran Bretaña de bloquear la nueva estructura sino se levantaban las restricciones navales y aéreas españolas sobre Gibraltar, mientras España exigía la desaparición del mando OTAN del Peñón.

El problema español se resolvió con mano izquierda: todo el territorio español pasó a depender de un mando subregional de tercer nivel en Retamares (Madrid), subordinado al Cuartel Europeo de la OTAN en Nápoles, mientras que sus aguas atlánticas siguieron bajo el de Lisboa. El mando OTAN de cuarto nivel de Gibraltar fue, como todos los de su tipo, disuelto, volviendo a depender directamente del Reino Unido. Y las restricciones se levantaron.

Aunque la solución final no se negoció hasta diciembre de 1997, el fracaso –o la falta de resultados– de la Cumbre Atlántica de Madrid se debió sobre todo al enfrentamiento entre EE UU y Francia por el reparto de cuotas de poder en la OTAN.

Paris vió rechazadas tajantemente sus aspiraciones a estar al frente del Cuartel Europeo de Nápoles y de no limitar el proceso de ampliación solo a Polonia, República Checa y Hungría, como impuso el senado de EE UU. Y, como consecuencia, no se integró en la nueva estructura de mandos, defendiendo la necesidad de una perspectiva autónoma de defensa europea. Pero Aznar pudo ser el anfitrión no sólo de sus socios de la OTAN, sino también del Consejo de Asociación Euro-Atlántica, que acogía a los antiguos enemigos del Pacto de Varsovia. El pecado original del referéndum de 1986 había sido lavado con la participación en el primer plano, al menos protocolario, del nacimiento de la “nueva” OTAN.

A la guerra del Kosovo

Con la “nueva” OTAN, el Gobierno del PP fue a la guerra en Kosovo, sin declararla el Parlamento español ni contar con una resolución del Consejo de Seguridad de NN UU. En octubre de 1998 aprobó la eventual participación de cazabombardeos F-18 en un eventual ataque contra Yugoslavia, que se concretó el 24 de marzo de 1999, con la participación de seis F-18 y un avión cisterna desde la base de Aviano (Italia) y la de tres fragatas y dos buques de aprovisionamiento en el bloqueo naval de la Federación Yugoslava. Las bases españolas de “utilización conjunta” fueron la retaguardia logística europea de la operación de la OTAN en Kosovo y los bombardeos contra Serbia.

Aznar justificó ante el Parlamento tres meses mas tarde la falta de información y la violación de la Constitución y el derecho internacional en nombre del nuevo orden mundial: *“Si la Alianza hubiera fracasado, habría desaparecido, y no se me ocurre un escenario peor para empezar el siglo XXI”*. La operación costó en total 17.377 millones de pesetas. Y aunque España no había estado en el centro de la toma de decisiones –como tampoco en el Grupo de Contacto sobre Bosnia– sí había participado como un socio activo de la OTAN y mantenía sobre el terreno, bajo mando italiano, un batallón de 1.200 hombres en la KFOR.

Voces como las del contra-almirante Tello o el insumiso capitán-piloto Martínez, quedaron ahogadas en la apoteosis de la “normalización” militar lograda por el Gobierno del PP. El lenguaje de la “defensa nacional” franquista había sido sustituido por el de la participación plena en las operaciones de “mantenimiento de la paz” planeadas y ejecutadas por los mandos norteamericanos de la OTAN. Como señaló Javier Conde, entonces embajador español ante la OTAN, con más sobriedad: *“España pesa en la OTAN lo que pone, es decir, el 3,5% de los presupuestos. Si se quiere pesar más habrá que pagar más”*.

Aznar, por su parte, calificaba de “inaceptable” la falta de capacidad militar europea en Kosovo y recordaba que *“cualquier moneda que quiera ser fuerte, y el euro lo pretende, necesita tener un respaldo militar”* (*El País* 28.10.1999). El Consejo Europeo de Colonia, en junio de ese año, nombraba a Solana Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y en

noviembre secretario general de la Unión Europea Occidental (UEO). ¿Quién mejor que el secretario general de la OTAN que había bombardeado Kosovo y Belgrado para poner en pie el “pilar europeo” de la OTAN? Aznar apoyó sin dudas en el Consejo Europeo de Helsinki la creación de una fuerza europea de 60.000 hombres a las órdenes de un Estado Mayor dependiente de la UE.

Las relaciones con los EE UU

Mientras tanto, las relaciones bilaterales con EE UU, a pesar de todos los esfuerzos realizados en la OTAN, no acababan de atraer la atención de Washington. El marco de las relaciones había sido redefinido en 1989 por el PSOE con el Convenio de Cooperación para la Defensa con una reducción de las bases norteamericanas en España, bajo la fórmula de “utilización conjunta”, a Rota, Morón y Zaragoza. Pero la “normalización” de la política exterior exigía también ideológicamente al PP una mejora sustancial de las relaciones con EE UU –el reconocimiento de su papel de “socio importante, como una de las grandes naciones europeas”–, a pesar de las diferencias políticas con la Administración Clinton.

Aznar tardó en ser recibido en Washington. La visita oficial no tuvo lugar hasta abril de 1977. Y ello a pesar de la integración plena en la OTAN, el violento giro pro-norteamericano de la política hacia Cuba y el creciente peso de las inversiones españolas en América Latina. La visita fue un éxito, naturalmente, pero no cambió en absoluto el tratamiento diplomático otorgado a España por EE UU. Ni la amenaza de la aplicación de la Ley Helms-Burton contra las empresas españolas en Cuba, ni las relaciones económicas, culturales o políticas. España seguía sin estar entre las prioridades de Washington, que gozaba por otra parte de una buena voluntad inagotable por parte del Gobierno del PP para la “utilización conjunta” de las bases en sus ataques contra Yugoslavia o Irak, a pesar de las reticencias posteriores de Madrid sobre el efecto de estas operaciones militares contra todo derecho internacional.

Para Aznar, el reconocimiento de Clinton primero, y ahora de Bush, es un elemento esencial en su concepción de la grandeza de España en relación con otros socios comunitarios, prioritarios para Washington, como Alemania, Francia, Gran Bretaña e incluso Italia. Hasta el punto de sacrificar la propia coherencia de la posición española en la UE, como en Niza –donde tras presentar un documento a favor de la cooperación reforzada en materia de seguridad, Aznar finalmente se alineará con la postura pro-norteamericana de Blair–, o en la venta de Santa Bárbara a la General Dynamics –que rompe la opción por una industria de armamentos europea liderada por Alemania y Francia. Pero la élite gobernante del PP parece responder al anti-norteamericanismo primario popular con su propio “síndrome post-98”: en última instancia, EE UU es quien manda, y de paso garantiza las cada vez más importantes inversiones españolas en América Latina.

El último esfuerzo por colocar en primer plano las relaciones bilaterales con EE UU se realizó en enero del 2001. La visita de la Secretaria de Estado en funciones Madeleine Albright sirvió para firmar una declaración conjunta sin gran contenido, pero que fue presentada por el secretario de Estado de Política Exterior, Miquel Nadal como *“el pistoletazo de salida para la revisión del Convenio... que marca un punto de llegada y un punto de partida en las relaciones entre ambos países y supone un salto cualitativo en las mismas”* (Efe, 11-1-2001). Extraña revisión que en su Capítulo II *“subraya su compromiso con el Convenio de 1989”*. Pero simbólicamente el PP recibiría a la Administración Bush con su propia piedra fundacional de las relaciones bilaterales con EE UU.

Inversiones y neoimperialismo

Tras su victoria electoral en 1996, el PP encontró en las relaciones bilaterales con Cuba un terreno en el que desmarcarse ideológicamente de la “política de Estado” heredada del PSOE. En una situación de fuerte tensión en las relaciones Cuba-EE UU por el derribo de varias avionetas anticastristas en aguas cubanas y la aprobación de la Ley Helms-Burton en el Senado americano, Aznar anunció en mayo la suspensión de la cooperación española, con la sola excepción de la ayuda humanitaria, con el objetivo declarado de fomentar la “democratización” de Cuba.

Este giro de 180 grados en la política tradicional de España hacia Cuba se completó con el recibimiento en la Moncloa de Jorge Mas-Canosa, presidente de la Fundación Cubano-Americana, la creación de una Fundación Hispano-Cubana –presidida por un diputado del PP antiguo militante de Bandera Roja– y, sobre todo, el impulso de una “posición común” en el seno de la UE que condicionaba toda su política a los avances de la “democracia y la libertad de mercado” en Cuba y el apoyo a la disidencia.

El fervor ideológico anticastrista del PP, reforzado por el choque personal entre Aznar y Castro en la Cumbre Iberoamericana de Viña del Mar en noviembre, crearon una escalada de tensión en las relaciones bilaterales –rechazo de nombramiento del nuevo embajador español incluido– que chocaba abiertamente con los intereses empresariales españoles en Cuba que el PP decía representar, amenazados al mismo tiempo por la Ley Helms-Burton. España era el tercer inversor en Cuba, el primero en su sector turístico, con más del 50%, tenía una cuota de mercado del 15% y una deuda de más de 100.000 millones de pesetas. La opinión pública en España, e incluso personajes como Fraga Iribarne, se mostró totalmente en contra de la política cubana del Gobierno del PP.

Aunque la situación se apaciguó, el enfrentamiento continuó, generando nuevas contradicciones para Aznar. La celebración de la Cumbre Iberoamericana en La Habana, en noviembre de 1999 fue el escenario de un nuevo pulso. Por un lado EE UU presionó directamente a varios jefes de Estado latinoamericanos para que no asistieran, minando el futuro de las Cumbres, prioridad de la diplomacia española.

El exilio anticastrista y la disidencia interna se lanzaron a una campaña de actividades que fue reprimida a golpe de contra-manifestaciones. Castro utilizó la ocasión para romper su aislamiento diplomático y clamar contra el bloqueo. Y Aznar limitó la visita de los Reyes a la participación en la Cumbre, negándose a que continuara como una visita oficial a la Isla, mientras alentaba la máxima participación de jefes de Estado y apoyaba verbalmente a la disidencia interna. La contradicción entre los intereses económicos españoles en Cuba y el anticastrismo ideológico del PP se sigue manifestando en un zig-zag tras otro.

En el resto de América Latina, la política del PP ha estado marcada por la cada vez más importante inversión española, que en 1999 alcanzó los 4 billones de pesetas. Un 15% del PIB español tiene su origen en estas inversiones, sólo inferiores a las de EE UU en la zona. La retórica "iberoamericanista" parece cada vez más un residuo del pasado, superado por la realidad neo-imperialista del nuevo desembarco del capital español en América Latina. Encabezadas por los grandes bancos y los monopolios estatales privatizados, en una década las inversiones españolas han llegado a su punto de saturación por acumulación de riesgos. Como ha puesto de manifiesto el conflicto de Aerolíneas Argentinas o de varias Telefónicas latinoamericanas, la función "modernizadora" del capital español ha estado ligada a la reestructuración y flexibilización del mercado de trabajo.

Malabarismos

Mientras que la dinámica de las Cumbres Iberoamericanas languidece, a pesar de la creación de una secretaria permanente en Madrid, la negociación de los acuerdos de libre cambio de la UE con México -ya firmado-, Chile y Mercosur ofrecen una cobertura a las inversiones españolas que, sin embargo, tendrán que enfrentarse ahora a una competencia recrudescida por la negociación del ALCA. La celebración de la II Cumbre UE-América Latina bajo la presidencia española de la UE en el primer semestre del 2002 pondrá en primer plano el difícil equilibrio entre una inserción en el esquema hegemónico de EE UU en América Latina y la utilización de la UE como palanca en una política comercial de bloques.

Un ejemplo de los malabarismos necesarios en este cruce de intereses fue la reacción del Gobierno del PP a los procesos abiertos por el juez Garzón contra Pinochet, los miembros de la Junta Militar argentina y otros asesinos y torturadores de menor nivel. Queda constancia de la jerarquía de prioridades que subordinó los procedimientos judiciales, por no hablar del interés de la justicia, a la limitación al máximo de cualquier perjuicio contra las inversiones españolas en Chile. Mucho hay que temer que la mediación en el conflicto colombiano, subordinada después al apoyo al Plan Colombia de EE UU -bilateralmente y en la UE- sea arrastrada por la misma lógica.

En el Mediterráneo, el Proceso de Barcelona -iniciado en la presidencia española de la UE de 1995- no ha despegado, lastrado por la falta de autonomía de la política

comunitaria en Oriente Medio. El Gobierno del PP ha intentado rentabilizar el haber sido sede la Conferencia de Paz de Madrid, el que un español –Miguel Angel Moratinos– sea el Enviado Especial de la UE en la zona y la gira de Aznar en 1998 sin ningún eco por lo que referiere ni a sus ofrecimientos de mediación ni de organización logística de una nueva Conferencia de Paz. Con el argumento de su posible papel de mediación, el Gobierno del PP se ha abstenido de cualquier condena formal del terrorismo de Estado israelí contra la población palestina.

En Argelia, principal suministrador de gas a España, los intereses económicos y comerciales han acabado por subordinar al apoyo al Gobierno de Buteflika cualquier otro aspecto, mirando para otro lado por lo que se refiere a la guerra civil, la represión gubernamental de toda oposición –no solo islamista, sino también bereber– y la falta de legitimidad democrática del régimen. Turquía, también por razones económicas, se ha convertido en un socio privilegiado, más allá de toda consideración sobre las violaciones de los derechos humanos.

Frontera Sur

Marruecos es el principal problema bilateral de la política exterior española, un escenario de inestabilidad permanente que permite hacer balance de la capacidad real de la diplomacia del PP, puesta a prueba con poco éxito en las recientes negociaciones de pesca de la UE con Rabat. Con la mayor diferencia de niveles de vida que existe en ninguna frontera del planeta (88 puestos en la escala de desarrollo humano del PNUD frente a 45 entre EE UU y México), la presión de la emigración ilegal se ha sumado a las incognitas políticas por la tímida apertura democrática tras la llegada al trono de Mohamed VI. La primera visita exterior de Aznar tras su reelección fue a Marruecos.

La reconversión de la deuda exterior marroquí con España (más de 120.000 millones de pesetas), iniciada en 1996 a través de tres tramos de inversión privada de unos 8.000 millones, ha abierto un importante mercado para el capital español tanto en las privatizaciones como en la construcción de infraestructuras, con proyectos como la gasificación del norte de Marruecos. En el terreno político, la estabilidad de la monarquía alauita ha reducido la defensa del plan de NN UU para un referéndum en el Sáhara Occidental a un recuerdo testimonial molesto. Y Ceuta y Melilla –cuya composición demográfica sigue evolucionando a favor los musulmanes de origen marroquí– se han convertido en dos bombas de relojería sin que el Gobierno español se atreva a tomar ninguna iniciativa de negociación a medio plazo sobre su status, ni siquiera en los terminos de la propuesta Matutes para Gibraltar. La organización política electoral de la población musulmana y la aventura del GIL han sido las señales de que el status quo político de ambos enclaves es insostenible.

Mientras Ceuta y Melilla se fortifican, el Estrecho se ha convertido en una fosa común de miles de emigrantes *ilegales* movidos por redes de intereses que enlazan las mafias de la droga con la producción agrícola de invernadero para la

exportación a la UE. La respuesta del Gobierno del PP con la Ley de Extranjería, la introducción de cuotas a través de acuerdos bilaterales y el intento fracasado de negociar acuerdos de reextradición, es simplemente impotente frente a una dinámica que desborda completamente el tratamiento policial del problema.

Y al final, Gibraltar

Por su importancia objetiva, Gibraltar no merecería una mención si no fuera porque se ha convertido en el ejemplo máximo del querer y no poder de la gran potencia neoimperialista del PP. Y no ha podido ser marginado hasta el olvido como Guinea Ecuatorial.

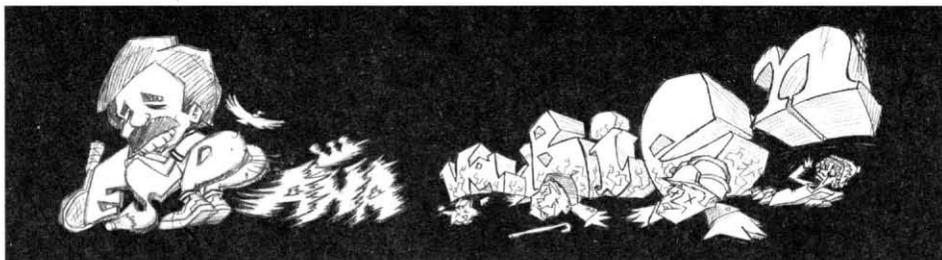
La elección de Peter Caruana al frente del Gobierno de Gibraltar despertó algunas esperanzas en el Gobierno del PP de reabrir las negociaciones sobre la soberanía del Peñón, muertas desde hacía tanto tiempo por la oposición de la población de la colonia. En diciembre de 1977, Matutes anunció una propuesta de co-soberanía de 50 años, que debería desembocar en un régimen de autonomía con sistema judicial y fiscal propios y nacionalidad optativa para la población después de su reintegración a España. El Parlamento aprobó la propuesta en febrero de 1988, y en julio se levantaron las restricciones militares aéreas y navales sobre el Peñón para evitar el bloqueo británico de la nueva estructura de mando de la OTAN.

Pero esta perspectiva negociadora chocó frontalmente con la realidad de Gibraltar, cuya economía depende hoy de ser una plaza financiera y un paraíso fiscal totalmente opaco, a lo que se añade el victimismo de una población sometida a cierres primero y después a controles de la frontera como principal argumentó para doblegarla. Caruana contestó a los intentos de negociación bilateral hispano-británicos reafirmando el veto de hecho de la población del Peñón y exigiendo ser tenido en cuenta como parte negociadora.

En marzo de 1998, empezó un hostigamiento de la policía de Gibraltar contra los pesqueros españoles en la Bahía de Algeciras, cuyas aguas, según el Tratado de Utrecht, son todas de jurisdicción española. El 27 de enero de 1999, el pesquero Piraña y sus 14 tripulantes eran detenidos y remolcados a Gibraltar, a pesar de un acuerdo oral alcanzado por Matutes y Cook. Tras la condena de los pescadores a una fianza de 1 millón de pesetas, la verja fue cerrada por una manifestación de familiares de los pescadores, que se enfrentó a gritos a una contra-manifestación de gibraltareños.

Descartado un pulso de fuerza con patrulleras navales en la Bahía, el Gobierno del PP —que todavía vivía en el idilio Aznar-Blair— se vió obligado a volver a la política de acoso y asedio del Gobierno de Gibraltar, imponiendo controles estrictos en la verja, bloqueando en la UE la directiva sobre seguridad de aviones de terceros países, la adhesión de Gran Bretaña al Convenio de Schengen y lanzando una campaña de criminalización general del Peñón como un centro internacional de lavado de dinero.

Caruana respondió minando la propia legitimidad del Gobierno del PP, llegando a una solución negociada privada con las autoridades de Cádiz, con las que firmó un Acuerdo Marco de Colaboración General, incluida la pesca, el 1 de febrero de 1999, más amplio que el acuerdo verbal Matutes-Cook. Como pondrían de manifiesto las manifestaciones apoyadas por el PSOE, UGT y CCOO en el campo de Gibraltar, el Gobierno del PP había perdido la batalla de la opinión pública española en la propia zona del conflicto. Después llegaría el "Tireless".



4 EsPPaña

La política económica del PP: neoliberalismo a la española

Albert Recio

En el plano económico la ideología del Partido Popular (PP) es manifiestamente neoliberal. Algo que para algunos ha sido visto como una muestra de modernidad de la derecha española, debido a su pasada tradición de intervencionismo económico. Pero esta presunta novedad pierde enseguida su sentido cuando se advierte que la derecha no tiene en el momento presente otra opción ideológica que apuntarse a esta corriente de pensamiento. En parte porque se trata de la ideología defendida desde las principales instituciones económicas mundiales (OCDE, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial), lo que fácilmente genera seguidismo entre muchos líderes políticos. También porque el neoliberalismo es tanto la respuesta al pánico que acabó por causar a la clase dominante el auge del movimiento obrero y el estatismo que generó el largo período de gestión keynesiana ¹ como un manto justificador de

¹/Sigo pensando que una parte del cambio de hegemonía que tuvo lugar en la década de los setenta responde bastante bien con las previsiones realizadas por el economista polaco Michael Kalecki en su clásico ensayo "Límites políticos al pleno empleo" (1943) (V.E. en M. Kalecki, *Sobre el capitalismo contemporáneo*. Crítica, Barcelona 1979)

nuevas vías de acumulación de capital. Se trata además de una propuesta que, al menos en sus presentaciones propagandísticas aparece como una formulación coherente y un cierto aval académico.

En el caso español, el PP forzó su perfil neoliberal para dotarse de unas señas de identidad que le diferenciaron de un Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que en gran medida ya había realizado una gestión de corte neoliberal en campos como la reforma laboral, la política monetaria y el inicio de las privatizaciones. Pero este énfasis en el mercado no puede esconder las contradicciones generales y específicas del modelo y el hecho que su aplicación práctica en un contexto concreto siempre difiere de las recetas simplistas que ofrecen sus principales propagandistas. Contradicciones y diferencias que alguno de los aspectos concretos en los que se ha materializado esta política en los cinco años de gobierno de Aznar.

El Estado mínimo y la reforma fiscal

Uno de las bases ideológicas de la política económica neoliberal es su defensa de la reducción del peso del sector público en beneficio del gasto privado. Una política que tiene su lado populista en la rebaja de impuestos.

Fiel a esta opción, el PP procedió a una reforma del Impuesto de la Renta que empezó a aplicarse para la liquidación de la renta de 1999. La concentración de la rebaja fiscal en el Impuesto de la Renta cubre un doble objetivo. Permite recortar, vía cambios en la estructura del impuesto (amplitud de los tramos, tipo de imposición máximo y presión fiscal en cada tramo, estructura de las deducciones) y rebajar el carácter progresista del impuesto. También porque el impuesto de la renta es percibido más nítidamente por la ciudadanía como un gravamen (mientras que los impuestos indirectos se “camuflan” en los precios de “bienes y servicios”) y un recorte del mismo tiene un impacto visual general.

Esta es la lógica de la reforma implementada en 1999. Como el debate que tuvo lugar puso de manifiesto, el mayor descuento proporcional benefició a las rentas más altas. Aunque quizás este efecto debe matizarse a la luz de la existencia de una enorme bolsa de opacidad fiscal (y de diferentes sistemas de desgravación, particularmente el beneficioso tratamiento concedido a las plusvalías de la inversión financiera): Las rentas salariales representan el 83,5% de la recaudación del IRPF (una proporción que no ha dejado de aumentar), lo que obliga a pensar que las reformas en el IRPF, cuando no se trata del ya comentado cambio en el tratamiento de las rentas del capital financiero, afecta más a la redistribución de la renta entre grupos de asalariados (algo de todas formas no despreciable dadas las enormes diferencias salariales a que están dando lugar las políticas neoliberales en el mercado laboral) que a la distribución del conjunto de la renta entre grupos sociales e individuos.

Quizás más importantes que los meros efectos redistributivos a corto plazo son los efectos futuros de esta reforma sobre el devenir futuro del sector público: en parte por que implica consolidar una base fiscal socialmente aceptada y necesaria

en un país que sigue situándose en el nivel bajo de carga fiscal. En 1999 la presión fiscal se situaba en el 35,1% del PIB, 6,5 puntos menos que la media de la Unión Europea y 15 puntos por debajo de los países socialmente más avanzados. Recortar la base impositiva es la mejor vía para futuros recortes de gasto público cuando la coyuntura de lugar a una caída de los ingresos por otras vías (en los últimos años el crecimiento de la renta y la no indiciación de los tipos fiscales ha generado un aumento moderado —en torno al 1%— de la carga impositiva). Algo que refuerza además la imposición de la “ley de déficit cero” que impide aplicar una política de expansión del gasto vía endeudamiento en épocas de depresión económica.

Aunque en esta política de freno de la imposición y el gasto público hay mucho de retórica (como lo muestran las mil y una formas de esquivar, vía creación de empresas públicas o los trucos contables, los límites presupuestarios) no cabe duda que las propuestas tienen un claro marchamo ideológico y práctico en contra de la expansión del peso del gasto público. Algo que resulta más preocupante cuando se advierte que el gasto social ha reducido tres puntos su peso sobre el PIB, indicando una orientación social regresiva que ha sido poco estudiada,

En definitiva, el PP ha dado algunos pasos en el recorte del peso del sector público y en favor de una financiación más regresiva de la renta, aunque estos han sido menos radicales que lo deseado por sus dirigentes. Posiblemente porque una política más radical, en un país donde las provisiones públicas ya están en muchos campos a nivel de mínimos, les hubiera generado problemas de legitimación sobre parte de sus votantes.

La política de privatizaciones

El segundo pilar de la política liberalizadora ha sido el de la privatización de empresas públicas. No se trata tampoco de un camino nuevo. De hecho, fue el PSOE el que inició la privatización parcial de empresas como Endesa o Telefónica. Pero en los últimos años esta política se ha acentuado de forma creciente y tiende a la liquidación del sector público empresarial, con la excepción de aquellas empresas que por su situación económica son difíciles de colocar al sector público, tales como Hunosa, Izar de Construcción Naval, Enusa, Presur (aunque posiblemente se privaticen las partes rentables de la mismas, como puede ser el caso de Renfe o Correos). En el cuadro 1 incluimos la lista de las principales privatizaciones realizadas en el período Aznar.

Como también puede apreciarse en el cuadro, la mayoría se ha hecho por venta directa, dadas las características y tamaño de las empresas, aunque en bastantes casos ésta ha estado mediada por la existencia de un concurso al que se han presentado varios candidatos (aunque sólo en pocos casos puede hablarse de competencia real).

¿Cuáles han sido los efectos de estas privatizaciones para los intereses públicos?. Como es bien conocido el argumento neoliberal defiende la gestión privada en base a criterios de eficiencia, argumentando que el sector privado es mal gestor y

PRINCIPALES PRIVATIZACIONES DEL PP

| Empresa | Sector | Tipo de venta |
|-------------------|---------------|-------------------|
| Minas Almagrera | minería | Venta directa |
| Repsol | petróleo | Salida a bolsa |
| Endesa | eléctrica | Salida a bolsa |
| Aceralia /CSI | siderurgia | Venta directa |
| Inespal | aluminio | Venta directa |
| Hijos de Barreras | const naval | Venta directa |
| Infoleasing | financiera | Venta directa |
| Redesa | red eléctrica | Venta directa |
| Sodicaman | financiera | Venta directa |
| Astander | const. naval | Venta directa |
| Babcock Wilcox | bienes equipo | Venta directa |
| Telefónica | telecomunic. | Salida a bolsa |
| Aldeasa | comercio | Venta parcial |
| Argentaria | banca | Salida a bolsa |
| Gr. Potasas | minería | Venta directa |
| Inima | medio ambte. | Venta directa |
| Prod. Tubulares | siderurgia | Venta directa |
| ICSA | materiales | Venta directa |
| Indra | electrónica | Salida a bolsa |
| Initec | ingeniería | Venta directa |
| Iberia | aviación | Venta dir y bolsa |
| Enatcar | líneas bus | Venta directa |
| Sta.Barbara | armamento | Venta directa |
| Conv de Aluminio | aluminio | Venta directa |
| Auxini | construcción | Venta directa |
| Enagas | gas natural | Venta directa |
| Tabacalera | tabaco | Salida a bolsa |

que es el conjunto de la población la que acaba pagando en forma de impuestos y mal servicio los costes de esta deficiente gestión burocrática de las empresas. La privatización permitiría por tanto aligerar las cargas públicas (que podrían dirigirse a otros fines) y mejorar la producción de los bienes y servicios privatizados. Estos beneficios aumentarían si junto a la privatización se produjera una liberalización de los mercados que vía competencia ejercieran una fuerte presión sobre la actuación de las antiguas empresas privatizadas. Un argumento adicional insiste además que en una situación de endeudamiento del sector público las privatizaciones permiten eliminar el déficit sin aumentar impuestos.

Los argumentos anteriores pierden de vista cuestiones importantes. Si bien la entrada de fondos por la venta de empresas es evidente (los cálculos presentes consideran que el Estado ha ingresado unos 5 billones de pesetas brutos por las privatizaciones) resulta menos claro que sea un buen negocio. En primer lugar porque una parte no pequeña (un 9,3%) se acaba pagando al sector financiero en forma de comisiones por la salida a bolsa y la negociación de las ventas. En

segundo lugar, porque, y el cuadro es elocuente, las primeras empresas a privatizar son las rentables las que permitirían obtener un flujo continuado de ingresos al estado. En tercer lugar porque los procesos privatizadores muchas veces dan lugar a ventas con rebajas. Ello se debe en parte a la propia voluntad política de fomentar un "capitalismo popular" al que se incentiva con la venta de acciones que experimentarían una rápida subida en bolsa (debido a su bajo precio inicial) o, en el caso de la venta directa, porque hay pocos candidatos a comprar y estos saben de antemano la imperiosa voluntad del gobierno de vender (nunca se compra tan barato como cuando el vendedor tiene urgencia por desprenderse de la mercancía). En cuarto lugar porque en muchos casos la privatización está precedida de una profunda reestructuración financiera que se carga sobre diferentes organismos públicos (Hacienda, la Seguridad Social, la propia Sociedad Española de Participaciones Industriales propietaria formal de la mayoría de empresas privatizadas), como es el caso pendiente de las costosas inversiones que deben hacerse en la Empresa Nacional Santa Bárbara, para adecuar sus condiciones productivas a los requisitos de seguridad y medio ambiente antes de ser cedida al grupo norteamericano General Dynamics o de los costes generados por la fracasada gestión de Aerolíneas Argentinas por parte de Iberia que están siendo costeados por la SEPI. En quinto lugar porque tras la privatización se ponen a menudo en marcha planes de reestructuración cuya financiación acaba cubriendo en parte (por ejemplo a través de las prestaciones de desempleo) el sector público, tal como ha ocurrido en empresas como Endesa, Telefónica o Initec.

Si las ganancias financieras están lejos de ser evidentes, hay otros factores igualmente preocupantes. En unos casos las empresas vendidas han ido a parar directamente a grandes grupos multinacionales con todo lo que significa de pérdida de control local sobre las mismas. Aunque uno no sea nostálgico del capitalismo nacional, no puede perderse de vista que la lógica de este proceso no es otra, en parte, que reforzar el proceso de oligopolización de la economía mundial. Ello es especialmente claro en algunos sectores donde está teniendo lugar un fuerte proceso de centralización del capital, cómo ha ocurrido con la venta de Inespal al grupo estadounidense Alcoa, de la siderurgia Aceralia al luxemburgués Arbed o la ya susodicha de Santa Bárbara. En otros casos el proceso de venta ha favorecido a importantes grupos de poder nacionales. La parte más vistosa es la colocación al frente de estas empresas de amigos del Gobierno, (habitualmente antes de iniciar la venta de las acciones, aunque la enorme dispersión de las mismas hace difícil pensar que hubiera podido haber otro desenlace y se hubiera podido imponer algún tipo de presidente "democrático"), tan aireada por el PSOE y *El País* como una denuncia a la venalidad de Aznar, al amiguismo y a la creación de un nuevo "capitalismo aznarista". Poco se ha hablado de la relación de este proceso con la propia reestructuración del capitalismo español sobre el predominio del tradicional capital financiero. Éste, una vez superada la crisis industrial y financiera de los

ochenta (con la suculenta aportación de la política del Gobierno socialista) se ha lanzado a una nueva fase de acumulación de capital y a la toma de sectores clave, algo que ha estado posibilitado en parte por la política de privatizaciones, como pone de manifiesto el cuadro 2. El BBVA y la Caixa (está última con importante presencia de directivos relacionados con el Opus Dei), parecen ser los principales beneficiarios del proceso de privatizaciones, aunque también destaca la presencia de otros grupos interesados en reforzar su presencia sectorial.

No puede perderse de vista que algunas de las más importantes empresas privatizadas, y ahora bajo control del capital financiero están además protagonizando un proceso de expansión exterior que ha dado lugar a la formación de los primeros grandes grupos multinacionales con centro decisorio en el Estado español (con algún fiasco como es el caso notorio de Iberia) al que sin duda ha contribuido el coste y las formas del proceso de privatización, No sólo por su peso específico, sino también por que también en ultramar la expansión de grupos como Repsol, Endesa, Gas Natural (o Aguas de Barcelona, también participado por la Caixa) se ha basado en parte en la peculiar cooperación con el sector público local que tantos frutos le ha dado al núcleo central del capitalismo español.

El proceso de privatización no puede confundirse sin embargo con la venta de un puñado de empresas públicas. En parte se ha producido también a pequeña escala en muchos Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, donde es habitual la concesión total o parcial de las tradicionales empresas u organismos de gestión de servicios (aguas, basuras, limpieza urbana, etc.) a empresas privadas. Actividad controlada por unos pocos grupos empresariales (Aguas de Barcelona –participada por la Caixa y el grupo francés Suez–, FCC –familia Koplowitz y el grupo francés Vivendi Universal–, Urbaser/Dragados –ligado al BSCH, y el resto de grandes constructoras– Acciona, ACS, Ferrovial y OHL) y en la que se superpone la presencia de los grandes grupos bancarios con personajes que amasaron fortunas o tuvieron protagonismo político en el pasado franquista, o ambas cosas a la vez (las familias Koplowitz, Entrecanales, del Pino, Villar Mir, los “Albertos”, etc.)

Y tampoco puede olvidarse las políticas que están teniendo lugar en campos como la sanidad o la educación, donde bajo la capa de la libertad de elección (y la permisividad y/ o promoción directa) se está orientando a las capas medias hacia el sector de control privado (que no financiación, fundamentalmente pública) y dejando al sector público como un sector marginal para consumo de los estratos inferiores de la clase obrera.

La privatización no ha cumplido tampoco las promesas liberalizadoras. Aunque posiblemente también en este caso cuenta la tradición española de amiguismo y “cooperación” entre sector público y privado. Algo de lo que son buena muestra el “regalo” a las eléctricas de 1 billón de pesetas en forma de “costes de transacción a la competencia”, o las continuas transformaciones de la política de telecomunicaciones en beneficio de Telefónica. Pero que posiblemente no podía ser de otro modo dado el carácter de muchos de los grandes

**Participación de grupos privados españoles
en el núcleo de capital de las empresas privatizadas**

| Empresa | BBVA | BSCH | Caixa | OTROS |
|------------|-----------|-----------|-------|--|
| Endesa | 2,3% | | 4,95% | Caja Madrid (4,9%) |
| Repsol YPF | 9,9% | | 9,9% | Caixa Catalunya (1,6) La Kutxa (1,6) |
| Telefónica | 6,3% | | 3,8% | |
| Ibérica | 7,3% | | | Caja Madrid (10%) Altadis (6,7) Corte Inglés (1) |
| Argentaria | fusión | | | |
| Enatcar | 10% | indirecto | | Alsa (80) |
| Enagas | indirecto | | 49% | |
| Aldeasa | | | | Altadis (33,3%) |
| Auxini | | | | ACS |
| Initec | indirecto | indirecto | | Técnicas Reunidas |
| Indra | | | | Caja Madrid Bco. Zaragozano |
| Inima | | | | OHL |

Altadis. Es la antigua tabacalera, cuenta con gran participación de capitales extranjeros

ACS. Está participada por los grupos March, Mercapital y Florentino Pérez

OHL. Está participada por el ex ministro franquista Villar Mir, los "Albertos" (propietarios del Banco Zaragozano) y la Fiat

ALSA. Es un grupo de transportes de la familia asturiana Cosmen (relacionada con el BSCH)

Técnicas Reunidas. Está participada por BBVA y BSCH

servicios privatizados. Grandes empresas propietarias de enormes redes, tanto de equipamientos como de estructura comercial, con un enorme arraigo público que constituyen de facto "cuasi monopolios naturales", posición que van a tratar de defender con uñas y dientes y que sólo un ingenio podría esperar que dieran lugar a una competencia que sólo beneficiara a la competencia.

En todas partes los beneficiarios en primer lugar de las privatizaciones han sido los grupos financieros (partícipes del enorme pastel de comisiones que genera todo el proceso, integrantes a menudo del "núcleo duro" de las nuevas empresas) y los gestores de las mismas, que gracias a su nuevo poder se han concedido suculentos aumentos de sueldo y opciones sobre acciones. En todas partes el empleo público ha sido uno de los grandes perdedores. Y desde el punto de vista del consumidor los costes o beneficios han sido variables aunque siempre estos últimos han sido inferiores a los propugnados por los apologetas del proceso. En otros casos, la degradación y el caos han sido un resultado claro del proceso, como ilustra claramente el caso de los ferrocarriles británicos. En las privatizaciones españolas, la liberalización ha sido más bien lenta y los antiguos monopolios y oligopolios han conseguido mantener buena parte de sus prerrogativas. Quizás la prueba extrema de la falacia de los procesos privatizadores y liberalizadores lo constituye la política de suelo y vivienda, un campo en continua reforma desde la ley Boyer. La nueva Ley del Suelo que concede enormes poderes al capital privado y reduce la capacidad de control

público sobre el suelo se hizo con la promesa de una reducción del precio de la vivienda. Algo que la realidad (como ya pasara con la ley Boyer) se ocupa de desmentir día a día, entre otras cosas porque al calor de las nuevas posibilidades los grandes grupos inmobiliarios atesoran suelo que después ponen al mercado en las dosis suficientes para no poner en peligro sus suculentos beneficios.

Comentario final: hace falta otro tipo de respuesta

Si bien las líneas pro-capital de la política del Gobierno son claras, ha habido poca y limitada contestación social a las mismas. En parte porque el principal partido de oposición no sólo inició, y defendió ideológicamente, las líneas de fondo de las mismas (control presupuestario, privatización, mercantilización, competitividad) sino que sigue encerrado en una línea de pensamiento que ha hecho un dogma de la prioridad del mercado y el capital privado. Su crítica se hace “desde dentro” del paradigma, limitándose a criticar el amiguismo en el que se ha actuado en algunas privatizaciones o la ausencia de una sólida regularización liberalizadora de los mercados. Sin entrar a cuestionar ni las lógicas perversas del modelo (el culto a la competitividad, el expansionismo neocolonial, la primacía del sector financiero, etc.) ni a proponer salidas más radicales.

La izquierda radical por su parte tampoco tiene un discurso excesivamente lúcido. A veces se limita a una defensa numantina de la propiedad pública sin cuestionar ni su utilidad social (cuestionable en el caso de sectores como el armamento u otros de enorme impacto ambiental) ni la racionalidad de la gestión (que en muchos casos ha sido realmente desastrosa). Se nota la ausencia de una reflexión profunda sobre los mecanismos de gestión económica, sobre el papel a jugar por el mercado, la planificación y las diferentes formas de propiedad y participación en la gestión económica. Enfrentarse a las políticas neoliberales requiere sin duda la denuncia de sus efectos. Pero también requiere alguna idea alternativa sobre las formas de gestión social alternativa. Y en este último terreno es donde los neoliberales encuentran un grado menor de resistencia a sus políticas. De aquí su hegemonía social.



5 EsPPaña

El Acuerdo sobre Seguridad Social del 2001

Mikel de la Fuente

El Acuerdo sobre el sistema de Seguridad Social que Gobierno, CC OO y las patronales CEOE y CEPYME han suscrito el 9 de Abril de este año, es la segunda fase de otro pacto anterior sobre Seguridad Social, realizado en octubre de 1996, en el que entonces sí participó la UGT y no participaron los empresarios. UGT ha explicado su negativa al pacto actual por las excesivas concesiones que CC OO ha realizado, en contra del acuerdo que los dos sindicatos tenían sobre las posiciones a defender en la mesa de negociación.

El acuerdo del 2001 se mueve en las coordenadas del llamado Acuerdo de Toledo, acuerdo político aprobado en el Parlamento español en 1995, que encomendaba a los agentes sociales llegar a acuerdos para la regulación del sistema de Seguridad Social sobre la base de quince recomendaciones. Sobre la base del Acuerdo de Toledo, CC OO y UGT firmaron en 1996 un acuerdo con el gobierno que en 1997 dio lugar a una ley que introdujo novedades tales como el paso de 8 a 15 años para el cómputo de la base reguladora de la pensión de jubilación, elevación de los 18 a los 21, y a veces 23 años, para la pensión de orfandad, revalorización de las pensiones contributivas y no contributivas según el IPC, y alguna otra. La CEOE no suscribió el Acuerdo de 1996 porque no contemplaba la reducción de las cotizaciones sociales.

El aspecto central

La reforma de la jubilación es el aspecto central del Acuerdo del 2001. Mantiene la jubilación anticipada basada en la pertenencia al antiguo Mutualismo Laboral con anterioridad al uno de enero de 1967 e introduce una nueva modalidad que no exige esa afiliación, pero en condiciones muy duras: a partir de los 61 años, con exigencia

de 30 años de cotización, carácter involuntario del cese (es decir, no existe un derecho incondicional a la jubilación anticipada) y permanencia previa de seis meses de inscripción en el INEM. Esta medida sólo se aplica a los regímenes de Seguridad Social que ya contemplen el beneficio de la jubilación anticipada.

Tanto para esta modalidad como para la derivada de la afiliación al mutualismo (que sólo requiere 15 años de cotización y puede ser voluntaria), se diversifican y reducen los coeficientes reductores aplicables en función de la edad, que pasan a ser desde el 6% para más de 40 años de cotización, manteniéndose el 8% para 30 o menos años. Estas penalizaciones siguen siendo excesivas: teniendo en cuenta la esperanza media de vida y el número de años durante los que se va a percibir la pensión, la equiparación entre una pensión que se va a percibir durante más años, en relación con la que se percibiría de jubilarse a la edad ordinaria, exigiría que el coeficiente reductor se fijase alrededor del 4% **1**.

Además, un sistema de Seguridad Social público debería superar este tipo de cálculos: las jubilaciones motivadas por la pérdida involuntaria del empleo, no deberían experimentar ninguna penalización. Más aún, cuando en muchos casos los que sufren la pérdida de empleo pertenecen a colectivos de trabajadores y trabajadoras manuales con esperanza de vida –y por lo tanto de duración de la pensión– inferior a la media. No se resuelve, sino que se deja pendiente de estudio y de las posibilidades financieras, la aplicación de las menores penalizaciones a la gente que ya está jubilada, cuyas pensiones se han visto reducidas en cuantías impresionantes a pesar de que en muchos casos han trabajado durante más de treinta o incluso de cuarenta años, haciendo caso omiso de las persistentes reivindicaciones de las asociaciones de pensionistas (y de las federaciones sindicales).

El Acuerdo no recoge la exigencia de ampliar los colectivos que por sus condiciones de trabajo tóxicas, penosas, peligrosas e insalubres, deben tener asignada una edad inferior de jubilación sin aplicación de coeficientes reductores. En efecto, no disponen de legislación que permita la anticipación “protegida” colectivos de elevada siniestralidad, tales como el transporte por carretera, el trabajo en canteras, en saneamiento público (poceros) y en general las consideradas como de especial riesgo en la normativa de prevención de riesgos laborales **2**.

Aunque no se han concretado aún, el Acuerdo ha legitimado dos medidas regresivas para el futuro: el atraso en la edad de jubilación y el cálculo de las pensiones sobre toda la vida laboral. En la actual situación del mercado de

1/ Como se recoge en un muy interesante análisis de la UGT, “la jubilación anticipada, 2000”. Los efectos de la aplicación de los coeficientes reductores se amplían por las cotizaciones sobre bases mínimas de las personas que provienen del subsidio de desempleo por haber perdido su empleo previamente a la jubilación. El Acuerdo sólo mejora la situación de los que perciben el subsidio de prejubilación, mediante la firma de un “Convenio Especial” abonado por trabajadores y trabajadoras y empresas, para los que sean despedidos colectivamente, pero no para los despidos individuales (el 90% de los casos según cifras de la UGT).

2/ La limitación numérica de los colectivos a los que se aplica esta anticipación se muestra por el hecho de que, en el Régimen General, por cada persona que se jubila anticipadamente sin penalización en la pensión, se jubilan más de diez con aplicación de reducciones.

trabajo, el atraso en la edad de jubilación no creará más actividad sino más precariedad u supondrá un obstáculo añadido para la eliminación del desempleo juvenil. No hay más que constatar que una gran parte de las jubilaciones anticipadas no son voluntarias sino forzosas: miles de empresas “prejubilán” a trabajadores en plena edad productiva a los 50 o 55 años de edad, en un porcentaje elevado en contra de su voluntad **3**, lo origina una reducción de la tasa de actividad de los mayores de 55 años en más de 20 puntos, especialmente entre los hombres, así como un importante desarrollo del desempleo entre los mayores de 45 años (Gete Castrillo, 2000).

El cálculo de las pensiones sobre la totalidad de la vida laboral reduciría de forma importante las pensiones medias. En 1996, CC.OO y UGT defendieron conjuntamente que la ampliación del período de cálculo (la “base reguladora”), desde 8 a 15 años, contribuiría a beneficiar a las personas cuyas condiciones salariales se hubiesen deteriorado en la última fase de su vida laboral a consecuencia de despidos y/o empleos con salario más bajo. Sin embargo, lo que puede tener una (in)cierta justificación para esa ampliación de 8 a 15 años **4**, si el incremento fuera a períodos superiores a 15 años tendría un evidente efecto reductor, que podría alcanzar hasta más de un 25% de las pensiones medias.

Las supuestas mejoras

Junto a la nueva jubilación anticipada, la principal medida presentada como positiva del Acuerdo, es la elevación de las pensiones de viudedad, cuyo porcentaje pasará del 45% al 52% y hasta el 70%, si la pensión es la principal fuente de recursos y la persona viuda tiene cargas familiares. Estas medidas merecen dos críticas de sentido opuesto. Por una parte, mientras subsisten otras pensiones muy reducidas, no parece adecuada la elevación al 52% de todas las pensiones de viudedad, con independencia de si la persona viuda trabaja o tiene otros ingresos. En efecto, estas pensiones son compatibles con cualesquiera otras rentas, tanto del trabajo como del capital, por lo que, no ya el mantenimiento sino incluso la elevación de su cuantía, puede suponer una sobreprotección para la gente que tenga otras rentas. Esta generosidad contrasta con la proclamada exigencia de “contributividad” del sistema de Seguridad Social: estas pensiones sólo exigen 500 días de cotización.

Por otra parte, para las personas cuya principal o única fuente de ingresos esté constituida por la pensión, el incremento puede ser insuficiente, ya que siendo “mínimas” un número importante de las pensiones de viudedad, los nuevos porcentajes supondrán un traslado de los complementos por mínimos a las

3/ Aunque no existen estudios específicos para el Estado Español, la Comisión Europea ha estimado que según el Eurobarómetro, alrededor del 40% de los jubilados anticipadamente consideran involuntaria su salida del mercado de trabajo y hubieran preferido seguir trabajando.

4/ Opinión que se basa en estudios estadísticos según los cuales los salarios mantienen una evolución creciente hasta los 52 años para decrecer posteriormente.

pensiones básicas, pero sin incremento de las cantidades percibidas. Así pues, la subida puede ser más teórica que real, ya que el incremento se va a realizar absorbiendo el complemento de mínimos que vinieran percibiendo. El Acuerdo no ha abordado la flagrante discriminación consistente en la exigencia de vínculo matrimonial y consiguiente exclusión del creciente número de las parejas de hecho, del mismo o de diferente sexo.

El incremento de las pensiones mínimas, que se realizará “de forma gradual” y “conforme a las disponibilidades financieras del sistema”, sólo abarca a una parte reducida de las pensiones, las de jubilación (con cónyuge a cargo) y las de viudedad, correspondientes a las personas menores de 65 años. De esta forma, el 80% de los 2.800.000 perceptores de pensiones mínimas seguirán cobrando las míseras cifras actuales, que en el 70% no sobrepasan el salario mínimo interprofesional. No se mejoran las 450.000 pensiones no contributivas, cuya cuantía es especialmente baja (41.910 Ptas. mensuales).

Reducción de las cotizaciones

Un elemento especialmente criticable del Acuerdo es la ampliación de los supuestos de concesión de reducciones y bonificaciones en las cotizaciones **5**, aunque sea para objetivos socialmente correctos. Así, tanto para asegurar el reingreso de las mujeres después de la licencia de maternidad como para mantener el empleo de las personas mayores de 55 años **6**, se prevé la concesión de importantes reducciones en las cuotas, que suponen una enorme transferencia de rentas a los empresarios. Estas medidas se unen a otras ya adoptadas en el Decreto Ley sobre la reforma laboral, que contemplan la introducción de nuevos colectivos para los que se reducen las cotizaciones sociales. Sólo desde 1997 las empresas se han embolsado más de un billón en menores cotizaciones.

Los objetivos que se pretenden podrían ser obtenidos mediante medidas legales disuasorias (por ejemplo, con mayores indemnizaciones de despido en estos colectivos) sin necesidad de descapitalizar el sistema de Seguridad Social y de forma que los fondos del INEM se destinasen al aumento de la cobertura de los y las desempleados, cuyo nivel de cobertura se ha ido reduciendo como resultado combinado de los cambios legales restrictivos y de una contratación temporal de muy corta duración.

Resulta curioso que mientras se habla continuamente de la necesidad de introducir reglas, tales como la ampliación del período de cálculo, que permitan

5/ El Acuerdo usa indistintamente ambas expresiones, aunque éstos términos tienen distinto significado. La bonificación es una menor cotización que es compensada al sistema de Seguridad Social mediante transferencia de los fondos del INEM. La reducción implica una reducción de los recursos de la Seguridad Social.

6/ Las bonificaciones y reducciones de cuotas son muy importantes: el 50% respecto de los y las trabajadoras de 60 años de edad, aumentando hasta el 100% a los 65 años. Se subraya la importancia numérica de este colectivo. Para los reingresos por maternidad la bonificación es del 100% de la aportación empresarial durante un año.

asegurar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, al mismo tiempo se organice una sistemática reducción de las cotizaciones sociales... de forma que se pueda justificar en el futuro la necesidad de reducir las pensiones.

Medidas financieras

Uno de los principales componentes del acuerdo del 2001 se refiere a la financiación de la Seguridad Social. Finaliza la separación de las fuentes de financiación según el tipo de prestaciones, fijando la financiación mediante impuestos de los complementos de mínimos de las prestaciones contributivas (621 mil millones de Ptas. en el 2001, de los que las aportaciones del Estado sólo han financiado 16 mil millones). Este tema ha sido una de las razones esgrimidas por UGT para no firmar el Acuerdo, ya que éste prevé un plazo de 12 años para su realización, mientras que UGT reclamaba un plazo inferior.

El Acuerdo prevé que las cotizaciones financiarán exclusivamente las prestaciones contributivas, lo que dará lugar a un superávit que será destinado a la dotación de un Fondo de Reserva cuya función es atenuar los efectos en las pensiones de las menores cotizaciones derivadas de las fases bajas de los ciclos económicos. Además de alimentar ese Fondo los eventuales excedentes irán destinados, en proporciones que no concreta, a la reducción de cotizaciones y a la mejora de prestaciones.

Este aspecto plantea dos problemas diferentes. Uno, general, concierne a la necesidad de la separación de la financiación de las prestaciones, en particular de los complementos de mínimos, que en la medida en que lo son de las prestaciones contributivas parece lógico que deberían ser financiados por cotizaciones. En la medida en que aumente el importe de las prestaciones a financiar ello implicaría la necesidad de incrementar las cotizaciones para lo que sería necesario doblegar la resistencia de la CEOE al aumento de las cotizaciones, algo que, al parecer, ni se plantea no sólo por CC OO sino tampoco por UGT.

Esta exigencia patronal responde a la idea de traspasar la mayor parte posible de la financiación de la Seguridad Social a los impuestos generales, lo que en un sistema fiscal tan regresivo como el que tenemos no es nada progresista. Además, habida cuenta del carácter salarial de las cotizaciones (salario indirecto) la reducción de las mismas supone una reducción de los salarios.

El segundo problema se centra en que la fijación de un plazo tan amplio, de doce años, le quita eficacia a la medida. Al parecer, este plazo respondía al temor de CC OO de que un plazo inferior, en la actual correlación de fuerzas, daría alas a la exigencia de la CEOE de reducir las cotizaciones. No parece claro que piensa hacer CC OO para mejorar esa situación y obtener que los actuales superávits se dediquen a mejorar unas prestaciones que siguen siendo muy insuficientes. Las posibilidades que ofrece el Acuerdo de reducción generalizada de las cotizaciones ha sido la razón fundamental de la firma del Acuerdo por la CEOE y de su *“valoración muy positiva”* del mismo.

El Acuerdo prosigue la tarea de impulso de los Planes y Fondos de Pensiones emprendida durante los últimos años mediante la concesión de incentivos fiscales. Así, la Ley de Acompañamiento para el 2001, ha profundizado otra vez más la mejora del tratamiento fiscal de los Planes de Pensiones, incrementado el límite de las aportaciones a planes de pensiones al 25% de los rendimientos netos del trabajo y con un límite global de 1.200.000 Ptas. (frente al 20% y 1.100.000 de Ptas. anteriores). Para mayores de 52 años, el límite porcentual de aportación se eleva al 40% y entre los 52 y los 65 años, el límite global aumenta progresivamente hasta 2.500.000 Ptas.

Esta fiscalidad es abiertamente regresiva por cuanto que son las personas de renta más elevada las que tienen más posibilidades para suscribir Planes de Pensiones y/o realizar aportaciones de cuantía más elevada, obteniendo así un mayor ahorro fiscal en el IRPF mientras que todos los contribuyentes tendrán que soportar la carga de una mayor presión fiscal para compensar la pérdida de recaudación. El nuevo IRPF ha acentuado el ventajoso trato fiscal de las diversas fórmulas de ahorro-previsión. Así, el carácter regresivo de la fiscalidad de los Planes de Pensiones se acentúa por la deducción de lo invertido en la base imponible (y no en la cuota) **17**.

En resumen, el dinero público (los impuestos no percibidos) se utiliza para financiar las pensiones de los que menos necesidad tienen de ser ayudados. Por otro lado, la exención de cotizaciones de las aportaciones empresariales a los Fondos de Pensiones, al reducir las bases de cotización, contribuye a fragilizar la base financiera del régimen público.

El Acuerdo se propone generalizar los Planes de Pensiones, "*facilitando la incorporación de las PYMES y de los empresarios individuales, así como de sus trabajadores, a través de planes de empleo*", preferentemente mediante planes de promoción conjunta.

Otras medidas

En los supuestos de responsabilidad empresarial por incumplimiento de sus deberes de afiliación, alta y cotización, el Acuerdo limita el anticipo por el INSS o las Mutuas hasta 2,5 veces del importe del salario mínimo interprofesional, mientras que hasta la fecha no había límite cuantitativo alguno.

Así mismo prevé la adopción de medidas para evitar la "*concatenación abusiva de la prestación de la IT con la prestación de desempleo*", así como para impedir la "*prolongación indebida de la prestación*", cuando los y las trabajadoras sean

17 Mediante estrategias que utilicen al máximo las posibilidades de la normativa, se ha afirmado que en algunos casos la Hacienda pública puede llegar a financiar los planes de pensiones privados de dos grupos de contribuyentes, es decir, que los impuestos ahorrados superen a los abonados: los que suscriban varios planes y, llegada la jubilación o las otras contingencias protegidas, ordenen abonar sus planes en ejercicios distintos; en el segundo grupo entrarían, los particulares de más de 35 años con rentas altas y tipos marginales elevados (OREGUI).

llamados a reconocimiento médico y no acudan sin causa justificada **8**. Mientras se mantiene un enorme fraude fiscal empresarial, resulta significativa la repetida insistencia en denunciar el supuesto fraude en las bajas médicas de las y los asalariados, que se encuentran confrontados en muchas ocasiones a seguir trabajando en condiciones de enfermedad, presionados por las Mutuas patronales. Resulta indignante que CC OO colabore en denunciar las medidas de supervivencia que trabajadores precarizados se ven obligados a tomar cuando finalizan sus contratos temporales.

Objetivos de la política de pensiones

La mayoría de los sectores económicos, políticos y académicos neoliberales, descartan (al menos por ahora) la sustitución completa del actual sistema público de pensiones mediante un régimen de reparto por uno privado basado en la capitalización y se pronuncian por un “sistema mixto”.

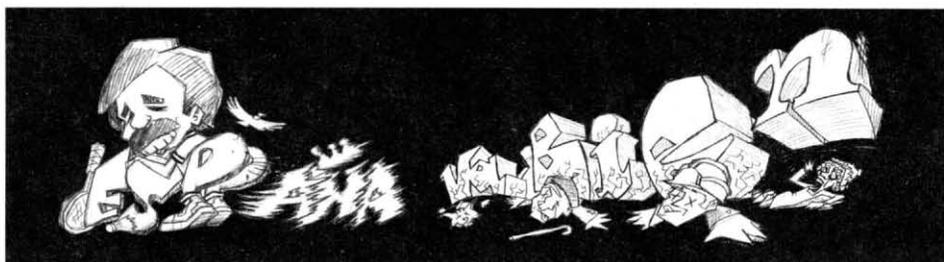
Para alcanzar ese objetivo se plantean tres variantes posibles (De la Villa Gil). La primera consistiría en una modificación sustancial de las prestaciones del sistema público desde el punto de vista cuantitativo, sin alterar sus principios configuradores; la iniciativa privada sería estimulada legalmente. La segunda variante configura el sistema público como un sistema de pensiones mínimas, desvinculadas de las retribuciones reales; al sistema privado le correspondería alcanzar, mediante la adición a la pensión pública, el salario de actividad o al menos aproximarse al mismo.

La tercera de las variantes consiste en el fraccionamiento en dos bloques obligatorios, público y privado y es la que parece preferida por el Gobierno. Aunque el panorama no está claramente despejado, parece que la orientación que quiere impulsar el Gobierno del PP no va por la compatibilización voluntaria, sino por la reducción de las pensiones públicas y la asignación de un carácter obligatorio a la previsión privada, mediante pactos colectivos que asignen una parte de las subidas salariales a Planes de Pensiones, con gran beneficio para la banca **9**.

Hay que reconocer, no obstante, que el Acuerdo no aborda las cuestiones decisivas que permitan ir por esa línea. Se puede pensar que el PP ha optado por tomar las medidas más duras en materia laboral para después impulsar de forma drástica la privatización de un sector de las pensiones. Quizá razones electorales están demorando esas medidas. Sin embargo, el Acuerdo es un punto de partida para los recortes de las pensiones públicas que permitan extender el espacio de las pensiones privadas de base financiera.

8/ Para alargar el cobro de una u otra prestación, las personas con contrato temporal están interesadas en obtener la baja médica en el período inmediatamente anterior a la finalización de su contrato, de forma que se demore el inicio de la prestación de desempleo, así como de obtener una nueva baja cuando vaya a finalizar el cobro de la misma.

9/ Esa propuesta ha sido defendida por J.L. MALO DE MOLINA, director del Servicio de Estudios del Banco de España, en una comparecencia ante la Comisión parlamentaria de seguimiento del Acuerdo de Toledo y apoyada por el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (declaraciones recogidas en *El País*, 14 y 20 de diciembre de 2000, respectivamente).



6 **EsPPaña**

Otra vuelta de tuerca de la flexibilidad y la precarización

Iñaki Uribarri

El pasado 3 de marzo era publicado en el BOE nº 54 el Real Decreto-Ley 5/2001, de 2 de marzo "De Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad". Con este Decreto el Gobierno del PP ponía punto final a la negociación que venían manteniendo CC OO y UGT, por un lado y la CEOE, por otro, desde hacía 8 meses, con el objetivo de llegar a un acuerdo para retocar la anterior Reforma Laboral de 1997.

La nueva reforma ha incorporado las siguientes modificaciones legislativas:

- Ha flexibilizado el contrato a tiempo parcial: suprimiendo el tope del 77% de la jornada a tiempo completo y aumentando el poder empresarial en la distribución horaria.
- Ha ampliado los colectivos a los que se puede aplicar el contrato de fomento de la contratación indefinida.
- Ha establecido una indemnización de 8 días por año de servicio a la finalización de los contratos eventuales (acumulación de tareas) y por obra o servicio.
- Ha reducido la duración máxima del contrato eventual de 13,5 meses a 12.
- Ha establecido una nueva modalidad de contrato temporal en la Administración: el contrato de inserción.
- Ha ampliado la responsabilidad de la empresa principal en los casos de subcontratación en cadena y ha mejorado los derechos de información de la empresa principal y de la contratista y subcontratista.
- Ha introducido una nueva causa objetiva de despido: contratos por tiempo indefinido concertados para la ejecución de planes y programas públicos sin dotación económica estable y financiados mediante consignaciones presupuestarias anuales.

- Ha derogado la disposición sobre límite máximo de edad de trabajar que permitía incluir en la negociación colectiva una edad de jubilación forzosa como instrumento de política de empleo.
- Ha aumentado las bonificaciones a las empresas a través de rebajar porcentajes de sus cuotas a la Seguridad Social.

Los antecedentes

Antes de entrar en el análisis más pormenorizado de los distintos aspectos que comporta esta nueva reforma, es conveniente echar la vista atrás para observar el camino recorrido por las anteriores reformas que han afectado a la contratación y las condiciones laborales (se dejan de lado las que ha habido en el terreno de las pensiones y del desempleo). El Estatuto de los Trabajadores de 1980, piedra angular de toda la legislación laboral del Estado español, ya abrió la puerta a formas especiales de empleo asalariado (contrato no fijos), lo que se justificó por la necesidad de combatir el desempleo.

En 1984 se produce la primera gran reforma del Estatuto de los Trabajadores, con la introducción de nuevos contratos temporales. De entre ellos sobresale, el nuevo contrato de fomento del empleo, que supuso una ruptura de la causalidad en que hasta entonces se basaba la contratación temporal. Es decir, el nuevo contrato, cuya duración máxima era de 3 años, permitía a las empresas contratar sin justificar las razones de la temporalidad, como se exigía para el resto de contratos.

Cuatro años después, en 1988, el PSOE vuela a intentar una nueva reforma. Se trataba, a través del llamado Plan de Empleo Juvenil, de legalizar un mecanismo enormemente precario y de bajo coste empresarial para integrar a la gente joven al mercado de trabajo. La HG del 14 de diciembre de 1988 frena este intento. Sin embargo unos años después el Gobierno socialista vuelve a la carga, con una reforma de mucho más calado, a la que la HG del 27 de enero de 1994 no es capaz de detener.

La reforma laboral de 1994 es la más amplia y agresiva de las que hasta ahora hemos conocido. Por un lado, modifica los mecanismos de entrada en el mercado de trabajo: desarrollando nuevos contratos (en prácticas y de aprendizaje), dando una regulación mucho más flexible y barata al contrato a tiempo parcial y modificando el periodo de prueba. Por otro, cambia a peor para la gente trabajadora las condiciones que regulan la movilidad interna: se establece la movilidad funcional dentro de categorías equivalentes, se modifica el cómputo de las horas extras, se incluyen los motivos económicos como causa de la movilidad geográfica y se simplifica el procedimiento para alterar las condiciones de trabajo. En tercer lugar, se le facilitan a los empresarios los despidos al añadir a las causas objetivas de despido existentes (económicas y tecnológicas) otras dos, las organizativas y productivas, lo que permite reducir plantilla por cualquier motivo. Por último, se introducen cambios en la estructura de la negociación colectiva y se autorizan las empresas privadas de colocación.

Para terminar con el listado de reformas laborales predecesoras de la actual, hay que referirse a la de 1997. Esta reforma, que fue pactada por CC OO y UGT con la CEOE-CEPYME y el Gobierno del PP a través del Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad y el Empleo, introdujo algunas mejoras en los contratos de formación, prácticas, por obra o servicio, eventual por circunstancias de la producción y a tiempo parcial y suprimió el contrato de lanzamiento de nueva actividad. Sin embargo, será recordada, sobre todo, por dos cosas. La primera, porque creó un nuevo contrato de empleo indefinido, llamado para la contratación estable, que admitía una indemnización inferior a la tradicional de los contratos fijos (45 días por año de servicios con un máximo de 42 mensualidades), al señalar para los despidos por causas objetivas declarados improcedentes, 33 días por año de servicios con un máximo de 24 mensualidades. Y la segunda, porque le dió una redacción a la extinción del contrato por causas objetivas que hizo época entonces como expresión de la disposición de CC OO y UGT a tragar lo que le echasen el Gobierno y la patronal (Art. 52.c. del ET: ... *“el empresario acreditará la decisión extintiva (...) en causas técnicas, organizativas o de producción, para superar las dificultades que impiden el buen funcionamiento de la empresa, ya sea por su posición competitiva en el mercado o por exigencias de la demanda a través de una mejor organización de los recursos”*).

Una evaluación negativa

Antes de adentrarme en la crítica de los aspectos lesivos para los trabajadores que implica la reforma de marzo y que constituyen con mucho la mayoría de su contenido, me voy a referir a cinco elementos que pueden considerarse favorables, aunque su entidad sea escasa:

- Reducción de 13,5 a 12 meses en la duración máxima del contrato eventual por circunstancias de la producción.
- Posibilidad de establecer en la negociación colectiva sectorial requisitos para prevenir el abuso de la contratación temporal (encadenamiento de contratos).
- Información a los trabajadores temporales sobre los puestos vacantes en la empresa (que sin embargo no le otorga derecho de preferencia).
- Mejora de la regulación de la responsabilidad del empresario principal en la subcontratación y ampliación de los derechos de información de los representantes de los trabajadores hacia arriba y hacia abajo para la principal, la contrata y la subcontrata.
- Establecimiento de una indemnización de 8 días de salario por año de servicio a la finalización de los contratos por obra y eventual por circunstancias de la producción.

Los puntos negativos de esta reforma son los siguientes:

1. Desnaturaliza y amplía objetivamente el alcance del fraude en el contrato de formación, al ensanchar el conjunto de colectivos que se pueden acoger al mismo. Hasta ahora estaba reservado a jóvenes entre 16 y 21 años y minusválidos sin

límite de edad. Desde ahora, puede hacerse contratos formativos también a: los inmigrantes durante los dos primeros años de su permiso de trabajo, quienes lleven más de 3 años en paro, personas desempleadas en situación de exclusión social y parados y paradas que se incorporen a los programas de escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo.

2. Desregula y precariza el contrato a tiempo parcial a través de los 3 cambios siguientes: en primer lugar, se suprime el tope del 77% de la jornada a tiempo completo existente hasta ahora, de modo que en adelante pueden celebrarse contratos a tiempo parcial mientras no se llegue al 100% de la jornada de un “trabajador a tiempo completo comparable”.

En segundo lugar, se flexibiliza la distribución horaria. Ya no tiene que figurar en el contrato, como hasta ahora, la concreción mensual, semanal y diaria, incluida la determinación de los días en que se deberá prestar servicios, sino que, a partir de ahora, se suprime el requisito de concreción horaria de la jornada pactada. Esto someterá al trabajador y a la trabajadora con contrato a tiempo parcial a la incertidumbre más absoluta, dejando en manos del empresario que disponga del horario de trabajo como quiera.

En tercer lugar, se flexibiliza el régimen de las horas complementarias de los contratos a tiempo parcial indefinidos mediante: la eliminación de la posibilidad de la denuncia, por parte del trabajador o trabajadora, del pacto para la realización de las horas complementarias (antes tenía una duración expresa anual), lo que les quita el carácter de voluntarias; el paso del anterior límite de horas complementarias, que estaba situado en el 15% de las horas contratadas extensible hasta el 30% por negociación colectiva, al 60%, sin derecho a consolidación como jornada normal (cosa que sí existía antes, en parte); y la elevación del límite de la suma de horas ordinarias y complementarias del anterior 77% hasta el nuevo límite legal (prácticamente el 100% de una jornada comparable).

Las personas con contrato a tiempo parcial retroceden hasta la reforma del 94 y se convierten en las más precarias del mercado laboral.

3. Crea un nuevo contrato de inserción para las Administraciones Públicas. Teniendo en cuenta que es un contrato temporal muy mal regulado, porque de su causa sólo se conoce la generalidad de que es para obra o servicio de interés general o social, porque no se sabe su duración, jornada y resto de condiciones de trabajo, así como a quién va dirigido, tranquilamente puede ocurrir que en lugar de una aportación para reducir la temporalidad en las Administraciones Públicas sirva para lo contrario.

4. Establece un nuevo supuesto de despido por causas objetivas (letra e del art. 52 del ET) destinado a rescindir los contratos indefinidos concertados para la ejecución de planes y programas públicos financiados con consignaciones presupuestarias anuales, ante situaciones de insuficiencia de dichas consignaciones.

En su actual redacción, aparte de aplicarse a contratos ya celebrados antes de entrar en vigor la reforma, se extenderá no sólo a contratos de las Administraciones, sino a los de cualquier empresa privada que contrate con las Administraciones para realizar una obra o servicio que dependa de esa consignación presupuestaria. De este modo, se empeoran las garantías hoy existentes en los despidos objetivos.

5. Se amplían los colectivos del contrato de fomento de la contratación indefinida. Este, que fue el contrato estrella pactado en 1997 por CC OO y UGT con el Gobierno del PP en el Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad en el Empleo, que sirvió de base a la reforma de aquel año, y cuyo resultado para doblar la temporalidad que sigue afectando al 32% de la población asalariada española, fue tan magro, amplía su campo de acción a más colectivos (personas en paro que sean: jóvenes de 16 a 30 años –antes de 18 a 29–, mujeres desempleadas en profesiones subrepresentadas, mayores de 45 años, quienes lleven mas de 6 meses como demandantes de empleo –antes 1 año–, minusválidas y quienes estuvieran trabajando en la empresa con un contrato de duración determinada hasta el 31 de diciembre de 2003. Además el requisito que se exigía a las empresas de que no hubieran realizado despidos colectivos en los 12 meses anteriores, ahora se deja en 6.

6. Se deroga la disposición sobre el límite máximo de edad de trabajar (disposición adicional 10ª del ET). Mediante esta disposición se podía pactar en la negociación colectiva la jubilación antes de los 65 años como medida para fomentar el empleo y renovar y rejuvenecer las plantillas.

7. Aumentan las bonificaciones a las empresas, estableciendo un amplio abanico de posibilidades para que las empresas puedan pagar menos cotizaciones a la Seguridad Social.

Reflexiones finales

Existe en el Estado español una larga experiencia de reformas laborales como para que sea posible apuntar algunas reflexiones:

Las reformas desarrolladas han sido eficaces para flexibilizar el mercado laboral. Lo han flexibilizado a tope en la entrada (amplitud de la contratación temporal y a tiempo parcial), en la gestión de la mano de obra (movilidades funcionales, geográficas y de jornada) y menos, en la salida (todavía sigue resistiendo la indemnización de 45 días del despido fijo tradicional, aunque la alternativa de los despidos objetivos está regulada a la plena satisfacción de los intereses empresariales y el contrato estable de 33 días de indemnización es un puente para seguir atacando al contrato fijo tradicional) y en la negociación colectiva.

La negociación colectiva es una asignatura pendiente de la reforma laboral. Siempre ha estado sobre la mesa, pero nadie se ha atrevido a ponerle el cascabel al gato. Es porque tiene mucho de simbólico, en parte, pero también porque tras ella resisten los colectivos más sindicalizados del movimiento obrero y la propia burocracia sindical.

La flexibilización ha tenido unos resultados bastante incontestables y otros abiertos a la polémica. Es incontestable que la flexibilización ha mejorado la relación de fuerzas del capital frente al trabajo. En todos los sentidos en los que esto se quiera medir. El progreso de los beneficios del capital ha ido muy por delante del de los salarios. En términos de reparto del PIB, y a pesar del crecimiento del empleo en estos años de bonanza económica, ha pasado lo mismo.

Otro tanto ocurre si las cosas se miden en términos más cualitativos. La autoridad y el poder patronal en las empresas, que conoció una grave crisis desde finales de los 70 y durante buena parte de los 80, se ha recuperado y es inmenso.

También es incontestable el daño que la flexibilización ha traído al movimiento obrero. Al crear tantas divisiones en su seno, con carácter estructural, ha debilitado su capacidad de expresión unitaria. La vieja división entre trabajadores y trabajadoras en paro y con empleo, hoy es menos relevante que la división que se manifiesta entre la gente con empleo. Incluso la frontera empleo-paro es mucho más difusa que en el pasado, excepto para colectivos de mujeres y de parados mayores poco cualificados.

La precariedad laboral, fruto de la flexibilización del mercado de trabajo, instala una filosofía perversa que termina siendo compartida por toda la sociedad y cuya idea central es la siguiente: para hacer posible que colectivos de gente trabajadora cuyos límites cada vez abarcan mas personas (parados y paradas de larga duración, personas del mundo de la exclusión social, jóvenes y mujeres, etc.) puedan encontrar empleo, hay que admitir la rebaja de sus condiciones de contratación y subvencionar a los empresarios que les contraten.

De este modo, la desigual inserción en el mercado de trabajo, se prolonga y refuerza con medidas estructurales que, a la postre, generan mas desigualdades, perjudicando permanentemente a los grupos humanos más frágiles.

Está abierto a la polémica el tema de la efectividad de las reformas laborales flexibilizadoras en términos de creación de empleo. De entrada no admite comparación con otras alternativas reformadoras que no se han llevado a cabo. En segundo lugar es imposible medir, por separado, el impacto que ha podido tener en el crecimiento del empleo de la fase alcista que hemos atravesado desde 1995 a 2000, la reforma de 1994 (y a otro nivel la de 1997) y el que haya tenido el crecimiento económico como tal. ¿Con otro mercado laboral menos flexible los empresarios no hubieran contratado empleo desaprovechando estos buenos años para los negocios? ¿O quizás el empleo hubiera crecido parecido pero los beneficios del capital no tanto?

En tercer lugar, la comparación histórica obliga a ser un poco más rigurosos y analizar un ciclo completo, con su fase alcista y su fase declinante. Tras la reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1984 también se echaron las campanas al vuelo de los efectos beneficiosos que estaba teniendo sobre el empleo en los años buenos 1986-1991. Sin embargo llegó la recesión de 1992-93 y se llevó, no sólo todo el empleo superprecario creado gracias a los contratos temporales, sino más que él, llegando en 1994 a un techo histórico de desempleo. E instalando, según parece de forma definitiva, una temporalidad que afecta a la tercera parte de la mano de obra ocupada, la mas alta, con diferencia de toda la Unión Europea. En estos momentos ya estamos en la cuesta abajo del ciclo y vamos a poder comprobar como funciona la reforma en esta coyuntura. Lo normal es que lo haga tan bien, para los empresarios, como a principios de los 90 y conozcamos un ajuste muy rápido a través del crecimiento en flecha del paro, sin que los beneficios sufran demasiado.

Una última reflexión dedicada a CCOO y UGT. La forma en que han negociado esta reforma con la CEOE y el Gobierno del PP debiera suponer, para ellos, un absoluto fracaso. Tantos meses mareando la perdiz para que las cosas acaben así. Parece increíble que no hayan sabido sacudirse la pinza Gobierno-CEOE. Era evidente que ambos tenían los mismos intereses en esta parodia, en la que ni siquiera se han molestado en repartirse los papeles del "bueno" y el "malo". Al repetir el modelo negociador de 1997 (confianza en la otra parte, ausencia de presión, opacidad, falta de compromiso con unas propuestas reivindicativas bien explicitadas y publicitadas ante el conjunto de la gente trabajadora), sin valorar suficientemente el reforzamiento político que había supuesto para el PP su mayoría absoluta de las últimas elecciones generales, han cometido un error garrafal.

Sin embargo, el problema es de más entidad que un error de análisis o de previsión a la hora de trazar una estrategia de negociación. Se trata de cambiar el carril en el que hoy han metido al mundo del trabajo, más de década y media de reformas laborales flexibilizadoras. Eso no se consigue frenando, mediante acuerdos, los elementos perversos de la temporalidad, como por ejemplo se intentó con el AIEE de 1997. Por desgracia para CCOO y UGT, al punto que se ha llegado, deben pensar muy en serio que el ciclo pactista abierto tras el agotamiento del periodo del Huelgas Generales 1988-1994, está bastante periclitado.



7 EsPPaña

Entre la crisis de la derecha españolista y la lenta reconstrucción de una "izquierda de izquierdas"

Jaime Pastor

Los resultados de las elecciones del 13 de Mayo en la Comunidad Autónoma Vasca han significado un revés político para el proyecto de "contrarreforma" que del Estado de las autonomías quería llevar a cabo el gobierno del PP. La lectura hecha de su triunfo por mayoría absoluta en marzo de 2000 había permitido generar la ilusión entre sus dirigentes de que había calado en todas partes, incluida Euskadi, su discurso "antinacionalista" y, con él, su idea de España... nacionalista; a su vez, la tendencia al refuerzo del protagonismo de los Estados y sus ejecutivos dentro de la Unión Europea parecía favorecer también ese proyecto de autoafirmación del Estado nacional español.

Ahora, sin embargo, vemos que tanto la "desaceleración" económica como la apertura de un nuevo ciclo, todavía muy desigual, de movilizaciones sociales (desde las de los inmigrantes hasta las, muy masivas en Aragón, contra el Plan Hidrológico, pasando por la de los trabajadores y trabajadoras de Sintel y el "nuevo" movimiento "antiglobalización"), coinciden con el desenlace de las elecciones vascas en anunciar el comienzo del declive de la derecha españolista. Pero la distancia entre los síntomas de un mayor potencial para la resistencia y la removilización social, por un lado, y la capacidad de la izquierda política y los sindicatos para canalizarla, por otro, sigue siendo grande. Respecto de lo primero, habría que tener en cuenta, además, las notables diferencias entre unos y otros movimientos: así, si los procesos de autoorganización de los inmigrantes han sido un fenómeno positivo, constituyendo un verdadero desafío a la democracia parlamentaria, su capacidad para consolidarse al margen de un apoyo sindical significativo es todavía limitada, con mayor razón cuando persisten divisiones en su seno; en cambio, la lucha contra el Plan Hidrológico ha tenido como protagonista

social principal al pueblo de Aragón, junto con un movimiento ecologista que sigue ganando audiencia pero continúa teniendo muchas limitaciones para transformarla en simpatía organizada; la lucha de Sintel es toda una demostración de la supervivencia de una cultura obrera solidaria (en la que el papel de las mujeres es también ejemplar) y constituye una esperanza de que marque el camino para nuevas luchas contra los despidos masivos provocados por la reestructuración neoliberal transnacional, pero esto va a depender de su desenlace final; en cuanto a los movimientos “antiglobalización”, el retroceso del Banco Mundial en Barcelona supone una victoria simbólica que sin duda ayudará a extender la simpatía potencial de que goza ya la denuncia de las instituciones financieras internacionales, pero hay que reconocer que todavía necesitan un mayor arraigo social y local.

Varios frentes de conflicto

Si a todo esto le añadimos el nuevo aliento dado el 13 de mayo a los movimientos, partidos y corrientes político-culturales defensoras de sus identidades nacionales respectivas y de la plurinacionalidad en el Estado español, nos encontramos con la perspectiva de consolidación de varios frentes de conflicto y confrontación con el gobierno del PP, que esperemos se amplíen con movilizaciones sociales en defensa de servicios públicos esenciales, como sanidad y educación —especialmente, contra la nueva Ley de Universidades—, así como alrededor de la negociación colectiva sindicatos-patronal y contra la última reforma laboral.

No obstante, es en el ámbito sindical donde la división entre las dos grandes centrales y su tendencia a ignorar a las demás constituyen un obstáculo a la necesidad de ofrecer un impulso común a la convergencia de las luchas contra la política neoliberal del gobierno. Porque la crisis del modelo de concertación social parece haber sido seguida por una desorientación y un desconcierto del que sólo han salido hasta ahora mediante la búsqueda de diferencias entre sus direcciones, más por razones de competencia interburocrática que por su mayor o menor sensibilidad ante el malestar social creciente. Desgraciadamente, lo que se mueve a su izquierda, salvo en ámbitos como el vasco y el gallego, es todavía débil y con escaso arraigo en las empresas e incluso entre el creciente sector sometido al empleo precario y al paro de larga duración. Aquí también, luchas como la de Sintel o las que se inician a escala europea contra empresas transnacionales con fuertes beneficios deberían servir para generar dinámicas transversales de solidaridad.

En cuanto a la izquierda política, el camino por el que intenta marchar la dirección del PSOE no puede ser más tortuoso, tanto en lo social —el último ejemplo de ello es su propuesta neoliberal de reforma del IRPF— como en lo político —tratando de hacer ahora equilibrios entre el “pacto antiterrorista” con el PP y la apertura al diálogo con Ibarretxe—, lo cual no ayuda al refuerzo de la autoridad de la nueva dirección frente a los “barones” y “notables” —con Felipe González a la cabeza— del partido. Su incertidumbre estratégica y táctica única-

mente parece atenuada por la búsqueda de una nueva “retórica” o mediante la confusa asunción de demandas como la Renta Básica de Ciudadanía, cuyo modo de financiación sigue siendo una incógnita a la vista de sus promesas fiscales.

Izquierda Unida se ha visto favorecida por la relativa recuperación de espacio político por parte de Esker Batua, pudiéndose abrir una nueva etapa en la que el sector representado por la dirección del PCE verá sus posiciones debilitadas frente a un discurso más respetuoso de la plurinacionalidad y la federalidad interna, dispuesto a dialogar con otras izquierdas a la izquierda del PSOE. No obstante, la escasa vida militante en la mayoría de las Federaciones, junto con la prolongación de algunas “guerras internas” en lugares como Andalucía, País Valenciá y Catalunya, no permiten ser optimistas respecto al efecto que puede tener el “éxito” vasco en otras partes. En cualquier caso, el Congreso del PCE de diciembre no parece anunciarse ya como el de la confrontación interna sino, más bien, como el del reconocimiento formal de la existencia de, al menos, tres bloques relativamente consolidados dentro de IU sin que la dirección del PCE tenga la autoridad suficiente para exigir “cohesión interna”.

Una reorientación

Nos hallamos, por tanto, ante la necesidad de redefinir la orientación táctica de la izquierda anticapitalista y alternativa cuando aparecen ya en el horizonte nuevas citas electorales. El comienzo del declive del PP va a tener su primer “test” en octubre, en Galicia. Allí veremos si, por fin, una derrota de Fraga confirma esa tendencia o, por el contrario, su liderazgo caudillista consigue frenar la ofensiva de un BNG moderado que, previsiblemente, contará con el apoyo de un PSOE “galleguizado”. Luego, la preparación de las elecciones catalanas dará un nuevo impulso al “Olivo” de Maragall, que intentará arrastrar a lo que hay a su izquierda. La presión por echar a Fraga, Pujol y, después, a Aznar puede permitir a la dirección del PSOE recuperar cierta credibilidad como alternativa de gobierno, aunque en las cuestiones de fondo parece que va a ser, de nuevo, mera “alternancia”, con la excepción de la “música” federalizante que pueda ensayar frente al españolismo rancio del PP.

Las izquierdas nacionales y/o nacionalistas reflejan un abanico de orientaciones muy amplio que aquí sólo me atrevo a describir de manera superficial. Mientras que el ascenso de la Chunta Aragonesista tiene que ver más con un movimiento social y cultural que con un partido de viejo tipo, el BNG parece haber llegado a su “madurez” tratando de ocupar un espacio intermedio entre lo que pueden representar CiU y PNV. Esquerra Republicana de Catalunya se asemejaría a Eusko Alkartasuna en su evolución hacia un nacionalismo socialdemócrata, en tanto que Iniciativa per Catalunya pretende erigirse en polo aglutinador de un “ecosocialismo” subalterno del PSOE. Queda la duda sobre el futuro de una EH incapaz de autonomizarse frente a una ETA militarista y

sectarizada y de la que se irán desgajando sectores que parecen priorizar su identidad nacionalista frente a la de izquierdas.

Pero, más allá de las fuerzas mencionadas y de sus diversas siglas, no hay que olvidar que sobreviven y resurgen colectivos socio-políticos de carácter local o "regional" que desarrollan un trabajo muy respetable y, en algunos casos, innovador en diferentes movimientos sociales. Al mismo tiempo, algunos de estos movimientos han conocido cierta renovación generacional, todavía limitada pero esperanzadora, ligada a un nuevo internacionalismo y a una voluntad de asumir la necesidad de hacer política desde fuera de las instituciones. Se mantienen en ellos los reparos frente a las tendencias al protagonismo de fuerzas de izquierda institucional, pero la superación de los mismos dependerá mucho de la pedagogía que ésta pueda practicar, especialmente en el caso de Izquierda Unida.

Puentes alternativos

Este panorama, mucho más complejo en la realidad de lo que aparece aquí, obliga a la izquierda alternativa a buscar vías de reconstrucción de una "izquierda de izquierdas" que, aún siendo paralelas, no sean divergentes o contradictorias. Una es la del diálogo y la unidad de acción contra la derecha española neocentralista: debería ser suficientemente abierta para incluir un amplio espectro de fuerzas políticas, sociales y culturales en torno a iniciativas, campañas y conflictos que surjan. La defensa de derechos políticos y sociales fundamentales y de libertades básicas, la apuesta por el reconocimiento del derecho a decidir de los vascos —apoyando la iniciativa social por una Conferencia de Paz promovida por Elkarri—, de la plurinacionalidad y la pluriculturalidad, la solidaridad con los trabajadores inmigrantes y contra la Ley de Extranjería, son ya razones suficientes para justificar la necesidad de impulsar ese bloque.

Otra vía es la de la búsqueda de nuevos marcos de alianza y/o colaboración estrecha con determinadas fuerzas políticas de izquierda: en este caso no puede incluirse al PSOE dada la deriva socioliberal que predomina en ese partido. En cuanto a formaciones de ámbito no estatal, sería labor de la izquierda alternativa analizar las distintas situaciones para valorar, en función de las diferencias y de la relación de fuerzas, con cuáles habría que empezar a trabajar en ese camino y con cuáles no. Para ello conviene tener en cuenta que, hoy por hoy, IU-Federal no goza de la posición de fuerza que pudo tener en el período que transcurrió de 1989 a 1996, por lo que sería muy arriesgado apostar ya por acuerdos preelectorales con fuerzas que han demostrado su seguidismo del PSOE y sus vacilaciones ante conflictos de alcance internacional en los que hay que mantener posiciones firmemente antiimperialistas. En estos casos lo que se podría ganar "por la derecha" se perdería muy probablemente "por la izquierda". Obviamente, la firmeza en unos puntos programáticos básicos no tiene por qué

estar reñida con la flexibilidad táctica en función también del tipo de elecciones que haya que afrontar y, sobre todo, de la experiencia desarrollada previamente en torno a campañas conjuntas.

Otra sería la de promover formas de diálogo y colaboración regular con distintos colectivos sociales y culturales que tienen un peso real en los movimientos sociales que se están reconstruyendo. Constituyen una realidad plural y polimorfa difícilmente clasificable pero en auge y deberían ser la prioridad en el esfuerzo de recuperación de credibilidad política por parte de IU como formación política anticapitalista. No es fácil trabajar con algunos de estos sectores —lo hemos visto en experiencias como la solidaridad con las luchas de los inmigrantes—, pero es con ellos con los que hay que tender puentes para ir construyendo una izquierda antagonista. No olvidemos que la lucha contra el abstencionismo electoral de un sector de la izquierda social y juvenil pasa por relacionarnos con este tipo de grupos, ya que en cierto modo tienen que ver con la reticencia hacia los partidos dominante en esos ámbitos. Quizás, junto al trabajo en común en los movimientos, la preparación de las elecciones municipales a partir de plataformas unitarias con algunos de estos colectivos y con gente representativa del activismo social y cultural en ciudades y pueblos podría ser, en muchos casos, un primer “laboratorio” de debate y encuentro para la propuesta de programas y formas de acción alternativas y “locales” que eviten repetir tantas experiencias frustradas de gobiernos de izquierda en los ayuntamientos.

Pero la combinación de estas distintas vías tiene que apoyarse en la redefinición de qué izquierda queremos. Bien es cierto que siempre ha sido más fácil contestar en negativo a esa pregunta, limitándonos a desmarcarnos de otras izquierdas, ya sea la social-liberal, la socialdemócrata, la “comunista” o la de mera resistencia al “sistema”. Pero en este nuevo siglo, precisamente porque se abre camino la idea-fuerza de que “otro mundo es posible”, será más necesario hacerlo en positivo, esforzándonos por dar un nuevo contenido a un proyecto de socialismo autogestionario, internacionalista, ecologista y feminista radical. Es en el espacio de una izquierda que afirma su perfil político propio y diferenciado de las antes mencionadas en donde debería reconocerse la mayoría actual de IU-Federal, apostando por volcarse en los movimientos sociales y en la propuesta de objetivos de lucha que permitan frenar la ofensiva neoliberal y conquistar un nuevo protagonismo en el proceso de reconstrucción de la izquierda. La opción de Espacio Alternativo debería ser, en todo caso, la de seguir dando nuevos pasos hacia la construcción del polo organizado de la izquierda anticapitalista y alternativa junto con otros colectivos o corrientes presentes en IU y/o en los movimientos sociales más activos.

Estas reflexiones y sugerencias quedarían finalmente cojas si, en vísperas de la entrada en el euro y de la presidencia española de la UE, no las extendiéramos a escala europea, tanto en lo que afecta a las luchas sociales como a los avances que se están dando en la coordinación de la izquierda radical. Insertarnos en ese terreno de juego, cuestionando a su vez las reglas en él dominante, deberá ser nuestro objetivo común.



RICKY MARTIN 2001

De la «gobernanza» o la constitución política de neoliberalismo

J. D. Moreno

«Señora Sociedad Civil»
(Subcomandante Marcos)

¿Quién no ha oído mencionar el término gobernanza? Hoy día es difícil encontrar un texto de los principales organismos gestores de la economía mundial en que esa palabra no haga reiteradamente aparición: bajo el manto de la “buena gobernanza”, cuando de ella habla el FMI en el marco de las críticas a los países del Sur que mantienen un mínimo de servicios públicos y algo de soberanía económica, otras con tintes locales cuando se refiere a la implicación de empresas, asociaciones, grupos, etc. en la gestión de comunidades urbanas substituyendo servicios públicos que han desaparecido tras la ofensiva neoliberal, otras aún como técnica del gobierno (independientemente de qué se gobierne y de quién gobierne) llamándose entonces en el español pujolista “governabilidad”. A lo más que ha llegado es a “gobernanza mundial” o “global” cuando las Naciones Unidas proponen constituir un gobierno mundial que no se atreve a llamarse así.

En general este neologismo se refiere a aquellas formas de gobierno que no se atreven a llamarse “gobierno”. Y no se atreven a ello, porque, de hacerlo, delatarían su carácter dictatorial. El término de moda es un eufemismo, pues. Como todo eufemismo, algo oculta en nombre de un orden que se vería en aprietos si se mostrara. Vamos a ver de qué se trata.

I. Brevísimas historia del término y de sus significados

A. El «imperialismo» económico de la escuela de Chicago. La cosa empieza hace ya bastantes años en los Estados Unidos cuando Ronald Coase descubre que las relaciones de cooperación internas a la empresa permiten eliminar los costes de transacción que supondría la adquisición de bienes y servicios a otras empresas^{1/} y concluye que la razón de ser de la empresa es precisamente esa eliminación de los costes de transacción. Coase descubre así que existe una división del trabajo en el interior de la empresa que no se reduce a intercambio mercantil aunque es perfectamente analizable en términos de rentabilidad. La empresa, que había sido hasta entonces un objeto relativamente opaco para la economía neoclásica ingresa gracias al cálculo de costes de transacción en la lógica general de la ventaja comparativa y la rentabilidad.

En su artículo “The nature of the Firm” donde expone los fundamentos de esta nueva perspectiva, Coase sienta ya en 1937 las bases del neoinstitucionalismo americano: una escuela de pensamiento social que interpreta en términos estrictamente económicos (de rentabilidad y de eficacia, conforme al método general de la economía neoclásica) las relaciones sociales y políticas, la historia (North, Williamson) y, por supuesto, las relaciones sociales internas a la empresa. Este nuevo planteamiento recibe el nombre de “imperialismo económico”, pues extiende al conjunto de las ciencias sociales el método de la economía neoclásica.

^{1/} “Outside the firm, price movements direct production, which is co-ordinated through a series of exchange transactions on the market. Within a firm, these market transactions are eliminated and in place of the complicated market structure with exchange transactions is substituted the entrepreneur-co-ordinator, who directs production... We may sum up this section of the argument by saying that the operation of a market costs something and by forming an organization and allowing some authority (an ‘entrepreneur’) to direct the resources, certain marketing costs are saved” [Coase 1937].

En el marco de esta escuela es donde empieza a hablarse de gobernanza de empresa y de estructuras de gobernanza (*corporate governance, governance structures*) desde los años 70, en particular en la obra de Oliver Williamson, para designar la política interna de la empresa, esto es el conjunto de dispositivos que ésta aplica para efectuar coordinaciones eficaces en dos planos: los protocolos internos cuando la empresa está integrada (jerarquía: “amos y siervos” en terminología de Coase) o bien los contratos, asociaciones temporales, uso de normas, cuando el producto o servicio se subcontrata. Es una metáfora, reinterpretada en términos de imperialismo económico, de la política. Y es que a los economistas institucionalistas les interesan los diferenciales de rentabilidad de las relaciones de poder hacia dentro y hacia fuera de la empresa: aspecto que luego resultaría central en el paso del fordismo al toyotismo y a la modernísima “economía en red”. La gobernanza es, en esta primera fase de su andadura, metáfora de la política: la política en la economía concebida como gestión de las personas con vistas al beneficio.

B. Las ambigüedades de la gobernanza municipal. El segundo gran momento de la gobernanza marca su transición hacia el ámbito público: la gobernanza se hace urbana (*urban governance*). La gobernanza urbana es inicialmente el resultado de los intentos contradictorios de los ayuntamientos británicos de la era Thatcher de gestionar la ciudad con recursos financieros fuertemente recortados. Hablamos de contradicción porque nos hallamos en una trama en la cual las reducciones y privatizaciones de los servicios públicos se combinan con prácticas de resistencia y solidaridad de las clases populares que luchan por no ser excluidas. Contradicción también, porque ayuntamientos neoliberales y ayuntamientos de izquierda apelan a la “sociedad civil” de manera opuesta, si bien coinciden en presentar las privatizaciones o la participación ciudadana como formas de gestión “próximas al ciudadano”. En cualquier caso, la crisis molecular del Estado del bienestar que se produce a nivel municipal conduce a un abandono de responsabilidades por parte de los poderes locales en favor de todo lo que no es poder público y se denomina con un término magmático sobre el que tendremos que volver: “sociedad civil”.

La metáfora de la gobernanza da así un paso más: si de lo que se trata es de disponer en tiempos de escasez de un instrumento político eficaz para responder de manera económicamente sensata (*cost-effective*) a las necesidades sociales, se impone por definición, ahora a nivel municipal, la perspectiva económica de la gobernanza de empresa. Y ¿qué se infiere de esta moderna perspectiva? Que dado que los costes internos de la gestión pública de los servicios sociales son excesivos, estos deben externalizarse y confiarse al sector privado y a la sociedad civil. Se matan así al menos tres pájaros de un tiro: se reduce el gasto público, se aumenta el beneficio privado y se suprime en gran medida el margen de intervención de las clases populares en la gestión de los asuntos públicos. La política de empresa tras ser política municipal pasa, así, a invadir o incluso a sustituir el ámbito político en su totalidad.

C. La gobernanza mundializante y mundializada. Si a nivel subestatal la crisis del Estado del Bienestar y de la legitimidad fordista se traduce en intervención directa de la “sociedad civil”, lo mismo ocurrirá al nivel supraestatal donde la enorme autonomización del poder financiero respecto de leyes y normas nacionales, la implantación transnacional de las grandes empresas y el desarrollo de los intercambios y comunicaciones a escala planetaria se convierten en señas de la “mundialización” (o “globalización”). La economía y las finanzas mundializadas son el resultado de toda una serie continuada y aún no acabada de medidas políticas que la mayoría de los gobiernos del planeta han adoptado para liberalizar los movimientos de todos los factores de producción, con la salvedad de la fuerza de trabajo, entre los años 70 (Pinochet fue un precursor) y el día de hoy. Estas medidas se combinan en el Tercer y el Primer Mundo con programas monetaristas de lucha contra la inflación y de “saneamiento” del gasto público, en particular en el sector social, educativo, sanitario, etc. destinados a mantener la confianza de los inversores, esto es a

mantener un alto y seguro rendimiento de las inversiones y de los títulos de deuda... El término que emplean el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para designar este conjunto de medidas es el de "buena gobernanza".

La "buena gobernanza" es en este contexto la disciplinada aplicación de los planes de ajuste estructural ahora radicalizados y orwellianamente denominados "estrategias de reducción de la pobreza". Naturalmente, las sociedades también tienen un importante papel que desempeñar cuando el Estado ha abandonado sus políticas sociales y sus planes de desarrollo autocentrado: y los actores de la "sociedad civil" a los que constantemente se apela son Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que, intentando paliar los efectos más destructivos del sistema, se convierten en pilares del mismo, cuando no son directamente empresas privadas interesadas en el negocio humanitario.

A esta gobernanza que a escala nacional palia o más bien gestiona los efectos de las políticas neoliberales hay que añadir la gobernanza económica mundial flexiblemente articulada que coordina a nivel planetario estas políticas: entre sus principales agencias figuran el FMI, el Banco Mundial, la OMC, el Foro Económico Mundial y las instituciones de la Unión Europea. Junto a estas instituciones, hay que contar entre los nuevos gobernantes fácticos del planeta a las grandes empresas transnacionales, convertidas en poderosos actores políticos capaces de imponer su voluntad a los Estados colectivamente, a través de los organismos económico-financieros mundiales, o incluso de forma estrictamente individual: como Monsanto, que fue capaz de imponer la introducción masiva de cultivos transgénicos al gobierno federal brasileño (pero no al del Estado de Rio Grande do Sul) y al de los Estados Unidos. También a nivel mundial, las ONG que sustituyen a las agencias estatales de desarrollo de los países del Norte, sin gestionar ya ningún desarrollo, ejercen un papel fundamental de representación/sustitución de la sociedad civil en el marco de la nueva gobernanza mundial, nacional y local. Su papel es ambiguo: por un lado forman inequívocamente parte del dispositivo neoliberal de sustitución de las funciones sociales que fueran competencia de los poderes públicos —ya previsto por Friedman y los clásicos del neoliberalismo—, pero por otro, han podido a veces servir para canalizar formas de resistencia política de las clases populares o de los pueblos del Sur.

D. La gobernanza armada. Un último aspecto importante de esta gobernanza mundializante es el militar. Aquí también la desaparición de las lindes entre lo público y lo privado y la intervención de la "sociedad civil" y de las empresas se hace evidente. En primer lugar, los sujetos de la guerra no son los Estados, sino coaliciones de Estados, organismos internacionales, ONGs, grupos políticos civiles o armados, empresas que prestan servicios, etc. La guerra, además, no se declara: no sólo las constituciones de los distintos países se violan alegremente (intervenciones de Occidente en Iraq, Yugoslavia, etc.) sino que ni las cartas de las organizaciones internacionales (ONU, OTAN) se respetan. El ámbito de actuación de la mayor alianza militar existente, la OTAN, es desde hace más de un año planetario y los motivos de su intervención son fundamentalmente "humanitarios". La confusión entre lo político y lo militar, la paz y la guerra, la economía y la acción humanitaria son señas de una gobernanza flexible orientada a la máxima eficacia y rentabilidad, sin que nadie se tenga que preguntar desde una instancia política cuáles son los fines perseguidos. Lo fundamental en la lógica de la gobernanza, como en la del capital, es que la pregunta por los fines no se plantea: sólo los medios cuentan.

II. La unificación de los significados

A. De la economía a la política pensada como criada de la economía. Recapitulando : si aplicamos a la política la teoría de los costes de transacción y la racionalidad económica del modelo "imperialista", un número cada vez más importante de funciones asumidas por entes públicos debe pasar a la sociedad civil o al mercado, porque la competencia y el

voluntariado suponen unos costes de transacción inferiores al coste de la gestión pública de esas funciones. Tal es la lógica que domina las privatizaciones y la externalización de funciones por parte de empresas y de administraciones públicas. Si esas funciones se abandonan al mercado o a las acciones voluntarias de la sociedad civil, su realización será muy aleatoria y el acceso de la ciudadanía a determinados servicios antes garantizados por entidades públicas pasará a depender de la existencia de una demanda solvente. La sociedad y los individuos, como afirman los teóricos de la Tercera Vía tienen que asumir sus responsabilidades y no confiar permanentemente en el Estado: vivimos en una "sociedad de riesgo": "vivimos –nos dice Anthony Giddens– en una sociedad mucho más activa en la que existe un nuevo contrato social que implica derechos y responsabilidades de los individuos en el conjunto de la sociedad y en la política. En unas instituciones de bienestar social más activamente estructuradas, queremos a menudo animar a la gente a arriesgarse en vez de impedir que asuman riesgos. El riesgo es la base de la innovación y la innovación es la base del espíritu de empresa" ²

La gobernanza se refiere en todos los casos a formas de gestión de los asuntos públicos en las que se apela a la intervención de la "sociedad civil" reduciéndose paralelamente el papel de las instancias políticas. Ello puede ocurrir a todos los niveles: local, regional, nacional, mundial, militar... Se trata de que un gobierno reducido a su mínima expresión coordine u oriente a una "sociedad civil" que adquiere un papel preponderante en la elaboración, la aplicación y la fiscalización de las distintas políticas. Idealmente, a lo que la gobernanza debería conducir es a una desaparición del Estado como instancia de determinación del interés público y a la sustitución de las normas legales por formas flexibles de regulación. Utilizando el título de una obra ya clásica en la defensa e ilustración de la gobernanza, esta consiste a nivel político en "governing without government" ³. Sólo la paradoja, como en la mística o en la teología negativa puede expresar la verdadera esencia de la gobernanza. Como afirma el inefable comisario Lamy: "El concepto de 'gobernanza' es afortunadamente a mi juicio lo bastante sólido como para cristalizar la reflexión y lo bastante flexible para facilitar la convergencia de los puntos de vista. Es un poco como el embrague de un coche: es indispensable pero tiene varias versiones" ⁴

Todo esto tiene un aire fresco y libertario, pues se quiere dar la impresión de que la sustitución del Estado democrático por una serie de transacciones contractuales supone mayor libertad y mayor capacidad de iniciativa para todos. El problema es que esta concepción de la libertad que el liberalismo quiere inculcarnos es tremendamente ingenua: la libertad se presenta como un dato inicial propio de un idílico estado de naturaleza y el Estado se ve como una traba para su pleno despliegue. Lo que no tienen en cuenta los nuevos "libertarios" de la gobernanza es que el Estado democrático, al derivar su legitimidad de la existencia de un espacio público donde los ciudadanos son iguales en derecho, es la única garantía de la igualdad de los ciudadanos por hoy existente. Cualquier otro plano y, en concreto, el de la sociedad civil, por no hablar del del mercado o el de la empresa, es un lugar de desigualdad o de dominación de unos individuos por otros.

B. La constitución política del neoliberalismo. Es frecuente, al considerar la gobernanza, ver en ella un mero cambio de estilo en el modo de gobernar sin que ello suponga ningún cambio político fundamental. La gobernanza mejoraría la eficacia del Estado agilizando la vida social y económica: incluso, en términos de Giddens –el teórico de la Tercera Vía–

² Arnold Goodman Charity Lecture: Professor Anthony Giddens, Director of the London School of Economics & Political Science, Tuesday 15th June 1999.

³ Wolfgang H. Reinicke, *Global Public Policy, Governing without government ?*, Brookings Institution Press, Washington D.C., 1998.

⁴ Intervención de Pascal Lamy, Comisario europeo responsable de comercio, en el seminario *Good governance in the public and private sectors against the background of globalisation*, OSCE, Bruselas, 30 de enero de 2001.

serviría para “democratizar la democracia” liberándola de la carga del Estado social y acercándola a la “sociedad civil”. Sin embargo, un simple repaso de sus objetivos explícitamente declarados permite ver su absoluta incompatibilidad con los conceptos e instituciones básicos de la democracia. La soberanía popular, el principio de legalidad, la separación de poderes, la idea misma de ley, la distinción entre lo público y lo privado son abandonados como antiguallas. El cambio de modelo político que de manera más o menos explícita supone la gobernanza es un auténtico proceso constituyente encaminado a que las realidades económicas y sociales de 30 años de neoliberalismo queden legal y políticamente sancionadas. Expondremos a continuación algunas de las características de la nueva constitución que se propugna.

Dado que la actual Comisión Europea se ha convertido en un líder indiscutido de la gobernanza a nivel mundial, para exponer este proyecto constitucional nos basaremos en gran medida en intervenciones públicas del comisario Lamy (ideólogo mayor de la gobernanza europea y mundial) y del presidente Romano Prodi así como en otros varios estudios encaminados a la elaboración por parte de la Comisión de un Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea. Nos centraremos en aquellos aspectos no específicamente europeos que son directamente aplicables a la dimensión planetaria.

1. La distinción público/privado. La distinción entre lo público y lo privado es un aspecto determinante del orden político: existen así asuntos que interesan a la comunidad en su conjunto (públicos) y otros que sólo afectan a individuos o grupos particulares (privados). El ámbito de la decisión política es un ámbito público, pues afecta a toda la comunidad; en una democracia todos los ciudadanos tienen acceso a la toma de decisiones en ese espacio público de manera más o menos directa. Los ciudadanos son, sin embargo, siempre individuos que la ley considera iguales. Estos ciudadanos congregados real y directamente o indirecta y virtualmente en un espacio público constituyen en una democracia el único sujeto colectivo cuya voluntad tiene fuerza de ley: ello permite que nadie esté sometido a otro hombre y que todos lo estén a las leyes. La gobernanza viene a trastocar este orden: “*Creo –dice Romano Prodi– que tenemos que dejar de pensar en términos de poderes jerarquizados, separados por el principio de subsidiariedad y empezar a imaginar más bien la constitución de una red en que los distintos niveles de gobernanza actúen conjuntamente en la elaboración, la proposición, la aplicación y el seguimiento de las políticas*”, afirmando en otro lugar el mismo autor: “*Es tiempo ya de darse cuenta de que Europa no está tan sólo administrada por las instituciones europeas, sino también por las instituciones nacionales, regionales y locales y por la sociedad civil*” **15**.

Nos encontramos así ante una poderosa horizontalidad que abarca los distintos niveles e implica, de manera no declarada, el abandono de las prerrogativas del soberano, no a poderes públicos de rango inferior en aplicación de una forma perfectamente democrática del principio de subsidiariedad, sino a la “sociedad civil”, esto es a los intereses privados y particulares. Como afirma explícitamente el programa de trabajo de la Comisión sobre el Libro Blanco de la gobernanza europea: “*El término gobernanza designa las normas, procesos y comportamientos que condicionan la calidad del ejercicio de los poderes europeos: responsabilidad, visibilidad y eficacia. Este enfoque es particularmente apropiado para la profundización en el modelo democrático europeo en general y en el papel desempeñado por la Comisión en particular, ya que da cuenta de situaciones caracterizadas por la multiplicidad de los centros de decisión a varios niveles geográficos, públicos y privados en la Unión.*” **16**

15/ Romano Prodi, Presidente de la Comisión Europea (2000-2005), “Dar forma a la Nueva Europa”, discurso ante el Parlamento Europeo, Estrasburgo, 15 de febrero de 2000.

16/ Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea. “Profundizar en la democracia de la Unión Europea”, Programa de trabajo, Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, SEC(2000) 1547/7 final.

Puesto que se trata de dar cuenta de esa multiplicidad emergente de centros de decisión dentro de la cual los centros de decisión privados se sitúan en el mismo plano que los públicos, los teóricos y profetas de la gobernanza no hacen ascos a un regreso de la religión a la vida pública abandonando así la tradición laica de las democracias europeas:

“En la época moderna, la separación de la religión y el Estado ha sido una doctrina tan reiterada como a menudo ignorada, eludida, incumplida a pesar de las buenas palabras. Esta separación era a su vez un apartado de la distinción entre lo «privado» y lo ‘público’, línea divisoria ésta que se ha ido desvaneciendo a medida que los Estados han ido subcontratando crecientes proporciones de los asuntos públicos y las organizaciones privadas desempeñan un papel más robusto en la elaboración de las medidas políticas (...). En este contexto parece muy probable que la religión, definida como ‘espiritualidad organizada’ desempeñe un liderazgo cada vez más importante en todos los ámbitos” 17.

No estamos ni en Teherán ni en Kabul, sino, aunque cueste creerlo en Bruselas. Y esto no es ninguna fábula sino una tendencia política actual del neoliberalismo: el gobierno de Bush acaba de financiar a toda una serie de asociaciones religiosas para que se hagan cargo de servicios sociales básicos.

2. La sociedad civil. La palabra mágica que, desdibujando las lindes de lo público y de lo privado, permite dar una impresión de profundización de la democracia y al mismo tiempo abandonar el principio de soberanía popular es “sociedad civil”. La sociedad civil es un término “culto” de origen filosófico: designa en Hegel la esfera donde se expresan los intereses particulares **18** contrapuesta a la del Estado que representa lo universal: “en la sociedad civil cada uno es para sí un fin, todo lo demás no es nada. Sin embargo, sin relación con otro no puede alcanzar su fin, por lo cual el otro es un medio para el fin del particular”. En el uso que se hace de ella en la neolengua de la gobernanza, es un concepto intermedio entre las asociaciones privadas con funciones de interés público (ONGs, asociaciones caritativas religiosas o laicas, etc.) y el mercado. El idealismo del voluntariado y el acicate de la ganancia se conjugan para sustituir “eficazmente” las funciones relacionadas con la ciudadanía social de las que el Estado neoliberal hace dejación.

La sociedad civil debe compartir las tareas de gobierno con los poderes públicos y la tarea legislativa con el Parlamento. En algunas versiones “de izquierda” de la gobernanza que, por parecer más presentables, se están generalizando, la sociedad civil se distingue del mercado dando paso a un sistema de poder tripartito: Estado-mercado-sociedad civil. Sin embargo, es fundamental que el término “sociedad civil” mantenga su provechosa ambigüedad, incluyendo unas veces el mercado (la sociedad civil se confunde con el conjunto de los actores socioeconómicos) y excluyéndolo otras **19**.

17/ Harlan Cleveland and Marc Luyckx, “Civilizations and Governance”, *Working paper for the seminar Governance and Civilisations*, Brussels, 14-16 may 1998.

18/ «In der bürgerlichen Gesellschaft ist jeder sich Zweck, alles andere ist ihm nichts. Aber ohne Beziehung auf andere kann er den Umfang seiner Zwecke nicht erreichen; diese anderen sind daher Mittel zum Zweck des Besonderen». G.W.F.Hegel, *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, § 182.

19/ «What is this civil society. It is the web of countless groups, organizations, and movements. These networks are not controlled by the state, although they may be influenced or regulated to a greater or lesser extent by the state and, therefore, interface with state agencies. Obviously, civil society is not reducible to market or capitalist relationships. It also concerns family, religious communities, professional groups, and academies, among others. Civil society is complex, dynamic, organic - not simply an unequivocal source of good (or evil)».

Tom Burns, “The evolution of parliaments and societies in Europe: challenges and prospects”, *European Journal of Social Theory* 2(2), pp. 167-194, Sage publications, London, 1999.

Naturalmente, para Burns como para Hegel, la sociedad civil incluye las relaciones de mercado capitalistas, aunque no sólo.

Cuando se plantean los responsables de la gobernanza dialogar con la sociedad civil reducida a los representantes de ONG o de sindicatos y movimientos sociales, el mercado como tal desaparece: ello se debe a que los intereses que en él se expresan son subsumidos por los "poderes públicos", que representan como interés general el interés privado de los mercados o del capital. De ahí que sean ejes fundamentales de las políticas neoliberales el aumento de la competitividad, la seguridad de la inversión, la reducción de los costes laborales, etc. Por su parte la sociedad civil queda a menudo reducida a su expresión más visible: las ONG cuyo papel es fundamental en el nuevo orden. Para Pascal Lamy, que desde Seattle —donde representaba a la UE— no para de insistir sobre la implicación de las ONG en el proceso de toma de decisiones: "*Las ONGs y la sociedad civil pueden contribuir a la legitimación proporcionando distintos canales de actividad (por ejemplo, la movilización, la representación o simplemente un apoyo jurídico-técnico) respondiendo así a una demanda de nuevos intermediarios sociales que no encuentra respuesta en ningún otro lugar*" /10. Las ONG tienen una «función de legitimación» de una situación que no es democrática en las instituciones financieras y comerciales internacionales, pero también en la Unión Europea. ¿Basta acaso implicar a las ONG en el proceso de toma de decisiones y de aplicación de las normas para que tengamos "más" democracia o "más" legitimidad?

En todo este proceso el pueblo, entendido como conjunto de los ciudadanos es el gran ausente y hay quien define ya el Orden Nuevo como "gobierno de las organizaciones, por las organizaciones y para las organizaciones" /11. La gran paradoja de la gobernanza es que se nos propone ampliar la democracia hacia la sociedad civil que es precisamente aquel conjunto de relaciones en que no soy ciudadano, sino mero agente de un interés particular. Sólo soy ciudadano como integrante del pueblo soberano. Las prerrogativas que colocan la ley, expresión de la voluntad del soberano, por encima del interés privado son la única garantía de los ciudadanos que integran la persona colectiva del soberano contra la desigualdad y contra la dominación de los más débiles por los más fuertes. Así, la aparente "devolución" de poderes que realiza la gobernanza neoliberal en favor de la sociedad civil equivale a expropiar al pueblo de su soberanía. Se trata, sencillamente de un golpe de Estado, de momento incruento...

3. Lo excesivamente grande y lo sumamente complejo. Todo poder presume ante sus súbditos de saber y poder más que ellos a fin de justificar su existencia. Las distintas religiones lo hicieron durante siglos al presentarse como depositarias de una revelación divina cuya interpretación complejísima era competencia de quien tuviera sutilísimos conocimientos o una gracia especial de su Creador. Esta idea según la cual el "simple ciudadano" es incapaz de comprender la gran complejidad de la realidad social y económica y ha de contentarse con delegar su poder de decisión en una casta de profesionales de la toma de decisiones, es un elemento esencial del dispositivo gobernancista.

La revelación fundacional de la gobernanza que el súbdito de la gobernanza europea y mundial debe repetirse varias veces al día como una plegaria es que se encuentra ante una realidad que lo supera en todos los aspectos y a la que tienen que amoldarse él y las instituciones democráticas. Según Tom Burns, autor de un informe sobre el futuro de la democracia parlamentaria en Europa: "*Una de las razones principales de que los sistemas parlamentarios estén cada vez más marginados en la política y gobernanza modernas es que las sociedades occidentales se han hecho altamente diferenciadas y demasiado complicadas para que un parlamento o una administración las controle, adquiera suficientes conocimientos y competencia y delibere sobre ellas. En la actualidad numerosos*

10/ P. Lamy, Ibid.

11/ Svein Andersen and Tom Burns, "The European Union and the Erosion of Parliamentary Democracy. A Study of Post-Parliamentary Governance in The European Union", *How democratic is it?*, edited by Svein S. Andersen and Kjell A. Eliasse, SAGE, London, 1996, p. 229.

discursos, negociaciones, diseños y aplicaciones de políticas acontecen en miles de agencias definidoras de políticas o sub-gobiernos" /12. Así, el efecto de 20 años de neoliberalismo se quiere presentar como un fenómeno natural, haciendo de la privatización de numerosas decisiones y políticas de interés público la justificación principal de una nueva oleada –tal vez definitiva– de privatizaciones. Pues qué otra cosa es esa famosa "complejidad" sino el efecto de esa privatización y desregulación generalizadas? En este mismo sentido abunda el Seminario de Genval organizado en 1999 por la Comisión Europea: "Las reformas que han de producirse sólo podrán tener éxito si responden a las expectativas de la sociedad civil en relación con el proceso político europeo. La complejidad de los problemas y la diversidad de la sociedad civil son hoy tales que el modelo de la democracia representativa no constituye ya una fuente de inspiración suficiente. El proceso de reforma deberá por necesidad abrirse a opciones más innovadoras" /13.

A lo complejo viene a añadirse lo desmesurado: cuyo nombre es "globalización". La globalización, como el Dios judeocristiano existe por sí misma y carece de causas: a la criatura sólo le cabe inclinarse ante la fuerza imparable de esta nueva "realidad", que no es sino el resultado de la desregulación sistemática de la actividad económica y financiera producto de tres décadas de neoliberalismo. Todo vale para hacernos creer que nuestras democracias son incapaces por invencibles razones de hacerse cargo de la cosa pública. Así, puede el comisario Lamy afirmar que la mundialización "ha producido una fuerza auténticamente radical, en el verdadero sentido de la palabra. Ha tenido un efecto de enorme envergadura sobre la soberanía, tanto dentro como fuera de Europa; sobre cuestiones de legitimidad y responsabilidad democráticas; y sobre todo sobre la economía real y las personas reales" /14.

La ciudadanía, perdida entre lo sumamente grande y lo excesivamente complejo, tiene que aceptar así verse privada de su soberanía dentro de un nuevo orden que recibe varios calificativos: gobernancia post-parlamentaria, democracia participativa (las carcajadas se oyen desde Porto Alegre) o, con pleno sentido histórico, "democracia orgánica" /15. En cualquier caso, el poder que en la gobernanza se abre paso toma sus decisiones más allá del ámbito político.

4. Más allá de la democracia parlamentaria ¿o de la democracia sin más? Desde un planteamiento de soberanía popular, estas soberanías difusas no tienen sentido: la legitimidad política emana del pueblo: una decisión o una norma de carácter público es legítima cuando la adoptan órganos que expresan la soberanía popular (los famosos tres poderes, pero los de Montesquieu) y no lo es cuando un interés privado la dicta. Que las ONG, que son organizaciones privadas, intervengan en un proceso "legislativo" cuyo contenido fundamental será determinado por intereses económicos privados bajo la mirada de un Estado post-parlamentario no modifica en nada la radical ilegitimidad del procedimiento. Tampoco cambia nada que intervengan las ONG para ocuparse en nombre de la "sociedad civil" de los aspectos "humanitarios" en una vana pretensión de "moderar" la ilegitimidad democrática de la OMC, la OCDE, el FMI o la OTAN, órganos en los que unos ejecutivos autonomizados deciden en nombre de sus países sin

12/ Andersen and Burns, Ibid.

13/ Notis LEBESSIS et John PATERSON, *Accroître l'efficacité et la légitimité de la gouvernance de l'Union européenne*, Commission européenne, Cellule de prospective, CdP 99-750, Bruxelles, 1999.

14/ Pascal Lamy, *Harnessing Globalisation: do we need Cosmopolitics?* Speech by Commissioner Pascal Lamy, London School of Economics, 1 February 2001.

15/ Tom Burns, *The future of parliamentary democracy: transition and challenge in European Governance*, Green Paper prepared for the Conference of the Speakers of EU Parliaments (Rome - September 22-24, 2000) September 2000 Rome, Italy/Uppsala, Sweden.

El capítulo 4 de la sección III de este informe se titula: «Contemporary Forms of Modern Democracy: Demos and Organic Democracy».

el más mínimo mandato popular y a menudo violando preceptos constitucionales como en las negociaciones sobre el Acuerdo Multilateral de Inversiones en la OCDE o en la “guerra» contra Yugoslavia.

Conscientes de esta ilegitimidad, los partidarios europeos de la gobernanza –que ya han dejado de hablar del déficit democrático europeo– pretenden justificarla en nombre del sacrosanto principio de la eficacia desarrollando una teoría de la doble legitimidad por «input» (origen de la legitimidad como en el caso de la legitimidad democrática) o «output» (por los resultados) /16. Naturalmente, se considera que la legitimidad del output, la de los resultados o los efectos es preponderante. Para Romano Prodi, actual presidente de la Comisión, “*La eficacia de la acción de las instituciones europeas es su fuente principal de legitimidad.*” /17 No habría dicho otra cosa Franco respecto de su propia función de Caudillo cuya legitimidad era “de ejercicio” según una fórmula heredada de Weber y de Carl Schmitt. De hecho, nadie pondrá en duda según esta teoría la *output legitimacy* que supone el formidable desarrollo que conoció España bajo el franquismo ni la eficacia que mostró Hitler haciendo autopistas... y eliminando a millones de personas.

Pero no sólo la *output legitimacy* recuerda estos tiempos de ingrata memoria, también la *input legitimacy* bebe en fuentes semejantes. El antiparlamentarismo justificado por motivos de eficacia desemboca en una propuesta original de democracia: la “gobernanza orgánica” también denominada “democracia orgánica”. Este término, que ya fuera abundantemente utilizado en el franquismo resurge ahora para designar el tipo de participación indirecta propia de la gobernanza /18. Para Tom Burns: “*Frente a la creciente complejidad y dinamismo –y a las limitaciones o deficiencias de las formas parlamentarias– están emergiendo nuevas formas de regulación y gobernanza. A nivel sectorial nos encontramos con diversas redes o comunidades estables que intervienen en políticas, subgobiernos y gobiernos de intereses privados e incluyen grupos de interés implicados en cuestiones o problemas relacionados con aspectos de políticas particulares o sectoriales. He denominado ‘gobernanza orgánica’ a un conjunto de estas formas*” /19. Los gobiernos de intereses privados así como otras comunidades o redes también privadas son gestores más eficaces del beneficio empresarial que los poderes públicos y aparecen así como la más acabada expresión del neoliberalismo constituyente. Hemos pasado así a una universalización de la “*corporate governance*”, a una general transmutación de lo privado en público bajo la hegemonía indiscutible de unos poderes económicos que aspiran a arrebatar al pueblo su soberanía. Lo que queda es dar a estos poderes un lugar en el nuevo entramado constitucional haciendo que unos parlamentos escualidos les reconozcan un poder normativo: “*tenemos que explicar el concepto de ciudadanía de las organizaciones, una constitución de las organizaciones en que se defina el papel de éstas en la gobernanza y se establezcan normas explícitas o públicas para regularlas*” /20. ¿Estamos ante una nueva democracia censitaria donde sólo la “parte activa” de la sociedad tiene derecho a decidir sobre la cosa pública? ¿O quizá ante formas aun más brutales de dictadura de clase? ¿Volvemos al Siglo XIX o a los años 30? Malos tiempos para la democracia.

Conclusión

La gobernanza se presenta como el proyecto de constitución política más adaptado al neoliberalismo, para el cual ha llegado la hora de eliminar todo riesgo de que las mayorías sociales hagan oír su voz. No basta para ello reunirse en Qatar. Hay que liquidar los fundamentos básicos de la democracia y ello con un aire juvenil y libertario.

16/ P. Lamy, The European Union: Between Globalisation and Enlargement, Speech, Freie Universität Berlin, Dialogue on Europe, 8 february 2001.

17/ Romano Prodi, Ibid.

18/ Tom Burns, art.cit.

19/ Tom Burns, art.cit.

20/ Andersen and Burns, Ibid, p.248.

Su proyecto de devolución del poder a la sociedad civil significa la desaparición misma del espacio público de la participación política ciudadana que queda sustituido por el espacio privado del mercado y de la "sociedad civil". Los arreglos privados en el seno de la sociedad civil pasan a sustituir el principio de legalidad.

La tradicional separación de poderes de Montesquieu queda sustituida por una triada en la que el Estado se opone a dos expresiones del interés particular (nadie negará que una ONG o un sindicato representan un interés particular, por legítimamente que lo hagan). De hecho, en este particular esquema, el Estado no expresa ningún interés general debiéndose arbitrar entre los intereses particulares, con lo cual sólo representa el interés particularísimo de sus burocracias. Pero ni siquiera es el Nuevo Orden de la gobernanza nada particularmente nuevo. Años atrás su doctrina fundamental ya triunfó en Europa :

"Deberán fomentarse, desarrollarse y defenderse los valores autónomos del individuo y los comunes de varios individuos expresados mediante personas colectivas organizadas (familias, municipios, corporaciones, etc [...]).

El Estado debe reducirse a sus funciones esenciales de orden político y jurídico.

El Estado debe investir de capacidad y responsabilidad a las Asociaciones dando asimismo a las corporaciones profesionales y económicas derecho electoral en los Consejos Técnicos Nacionales.

Por consiguiente deberán limitarse los poderes y funciones que actualmente se asignan al Parlamento. Serán competencia del Parlamento los problemas relacionados con el individuo como ciudadano del Estado y el Estado como órgano de realización y protección de los supremos intereses nacionales ; competencia de los Consejos Técnicos Nacionales serán los problemas relativos a las distintas formas de actividad de los individuos en su calidad de productores" /21.

Menos Estado, menos parlamento, defensa de las personas colectivas organizadas y participación de éstas en el proceso de elaboración de las normas: pura gobernanza neoliberal. La gran diferencia es que en los años 20 decían las mismas cosas cuidando más el lenguaje y sin anglicismos. Algo hemos avanzado.

21/ *"I valori autonomi dell'individuo e quelli comuni a più individui espressi in persone collettive organizzate (famiglie, comuni, corporazioni, ecc.), vanno promossi, sviluppati e difesi, sempre nell'ambito della Nazione a cui sono subordinati. [...]*

Lo Stato va ridotto alle sue funzioni essenziali di ordine politico e giuridico.

Lo Stato deve investire di capacità e di responsabilità le Associazioni conferendo anche alle corporazioni professionali ed economiche diritto di elettorato al corpo dei Consigli Tecnici Nazionali.

Per conseguenza debbono essere limitati i poteri e le funzioni attualmente attribuiti al Parlamento. Di competenza del Parlamento i problemi che riguardano l'individuo come cittadino dello Stato e lo Stato come organo di realizzazione e di tutela dei supremi interessi nazionali; di competenza dei Consigli Tecnici Nazionali i problemi che si riferiscono alle varie forme di attività degli individui nella loro qualità di produttori." Benito Mussolini, Punti programmatici del Partito Nazionale Fascista, 1921.

El bebedor de los arroyos

María Ángeles Maeso (Valdanzo, Soria, 1955)

Licenciada en Filología Hispánica, ha sido profesora de Lengua y Literatura en centros de Enseñanza Media y Universitaria y coordinadora de programas socioculturales en áreas de marginación social. En la actualidad es colaboradora del Instituto Cervantes y de los programas culturales de Radio Círculo de Bellas Artes.

Su obra poética incluye, hasta el momento, tres libros: *Sin regreso* (Premio Jorge Manrique, Obra Cultural de Caja España, Palencia, 1991), *Trazado de la periferia* (Editorial Vitruvio, Madrid, 1996) y *El bebedor de los arroyos* (Huerga y Fierro, Madrid, 2000). Ha publicado en revistas literarias y ha sido incluida en diversas antologías.

La poesía como viaje, un viaje sin regreso, trazado de la periferia y desde la periferia, en los márgenes, en las afueras, extramuros del poder y de la palabra institucionalizada, en ese espacio de dolor y “ese tiempo de los orfanatos” que es necesario nombrar y rescatar así, con la palabra exacta, del espanto.

Viaje sin regreso es también *El bebedor de los arroyos* y un doble viaje: el del viejo Edipo en búsqueda de la verdad, esa verdad que durante tanto tiempo olvidó (y fue el tiempo sordo del tirano que reinaba en Tebas) y otra voz que le acompaña en el destierro. Pero el viaje de Edipo es sólo de ida, hacia la verdad desnuda, hacia el horror de unas cuencas vacías. Y el de ella, esa voz, esa mujer que le acompaña, es viaje en busca de la verdad pero quiere ser también un regreso a los orígenes, a rescatar la inocencia y beber en los arroyos, y salvar así una esperanza que nos permita mirar el mundo sin cegarnos. Y de este modo, además de mirar la verdad, se nos pide algo más: “conquistar la inocencia” pues, como ha dicho Belén Gopegui, “la inocencia puede ser una tarea”. A esta tarea nos convoca *El bebedor de los arroyos* del que ofrecemos una pequeña muestra.

Antonio Crespo Massieu

ADVERTENCIA

PARA UN TURISTA SOLITARIO DISPUESTO A SENTARSE
DEMASIADO TIEMPO EN LAS GRADAS DE EPIDAURO

He ahí la piedra y sobre ella marionetistas de hierro sofocleo
obligando a sus muñecos a andar a hachazos por horas extras.

He ahí los podridos padres, la monja Yocasta, el cura Layo,
el tramposo Edipo, tiranos jugando como átilas de Noveccento a
tirar al niño dios por las cunetas.

Y ahora tú, amigo solitario, busca que te busca un dulce entre la
hierba.

Nada te distingue del demócrata capitalista de la primera fila, nada
de quien se agita sobeteando en sus bolsillos el meloso fatum
por si salen en el cuento semiahogados nietecitos.

En ascuas como ellos, también tú, rebuscando niños por los huecos
de las piedras.

Mi advertencia consiste en que, al salir, no se te ocurra cederles paso.

Desconfía de sus propios hijitos cirujanos que a ratos se hurgan
dianas tumorales en sus propias células.

Deja que caiga fuego contra todos ellos. No permitas que fallen
los oráculos.

Ni que avance hasta tu ahora ningún hombre sin recuerdos.

-V-

Se oía.

Los inciensos y los humos de los muertos tendrían que colarse por los ojos del palacio.

Al atardecer, dentro y fuera apestarían las semillas, los ropajes y las piedras.

Se oía.

Yo sé que en el pecho real habría alguna arritmia, algún dolor político e intermitente.

El que iba a quedarse ciego arquearía su espalda como un gato detenido por un perro.

El que iba a quedarse ciego, viendo avanzar la comisión de suplicantes, oyó un silencio.

Y yo sé que todo silencio que así se hace es atravesado por un arpa que se oye, por un gato que se oye, por un perro que se oye.

Se oía.

Y entonces, el que iba a quedarse ciego, encarado al más anciano, ¿de verdad se preguntó: *y éstos, con qué asuntos comparecen?*

-XIII-

Irse despidiendo en vivo de nosotros mismos, zanjando la cuestión de
un pálpito con kilómetros de por medio y no hacia abajo.
Así unas diez o doce veces y al grito de *circulen circulen, no
quiero corros y mucho menos con los niños.*
Hacia la mitad, si es noviembre y llueve, si muy mansamente y
para ti sola llueve,
pones un disco de jazz, pones un gato en el sofá, pones en agua la
Santa Cena y Las Completas de Lenin,
te asomas a la válvula mitral y te pones a mirar en el haber
del a-ver-a-ver averqué queda.
Y eso es todo.

Más de uno se sacó los ojos.

-XXIII-

Como esos lugares de encuentro que ves en los aeropuertos, ¿ya eres
sin palomas, sólo-cuerpo-suelo para que puedan celebrar su
cita la flor y las agujas?

¿Y el resto? ¿Y todo lo que dejabas para después de la muerte?

Todo lo que daba vueltas, como ese millón de refugiados alrededor
del lago Tanganika, ¿ya fue tocado, hundido, quemado,
descuartizado?

Pregúntale a la nieve, viejo, qué cosas eran esas que siempre dejé
a la espera.

-XXVI-

De haber sido esclavo no habrías llegado a viejo.

¿No recuerdas cómo eran contestados cada vez que preguntaban por
sus padres entre el humus de tus establos?

De haber sido mujer estarías colgado,

penduleando como tu vieja bailarina umbrátil, la que supo
al fin cuánto le debía a un tacto de niños malametralados.

Como eres tirano y ya sin otros a ti te tiranizas.

Sin otros campos que abrasar de ti haces el fuego.

Tú frente a ti mismo para tus golpes de ciego.

Triste hombre frasco opaco, nadie querrá beber de esa ponzoña

malcasada de causas y de efectos.

Nadie, ninguna mujer, ningún asalariado, al menos.

-XXXVII-

Eres, viejo, el bebedor de los arroyos, el infante entablillado que con teas incendiarias se desbocó una noche hasta unos ojos.

Eres quien comía escupida miel de las tormentas y un hierro venoso de onfálico candado que no cadaveriza.

Y tendrás que ordenar las estaciones y este tic-tac del dolor que es siempre el mismo y no cabe en ningún pozo.

Eres quien dormía al abrigo de un estiércol de corderos, en un lecho de hojarasca de encinas y de olivos.

Y tendrás que darle al porvenir de la ceniza vísperas de esa yesca, híbrida y recalentada en tus cartílagos.

Eres el bebedor de los arroyos, recuérdalo. No vuelvas a temblar en julio por la gota fría de unos vientos propios del invierno, ni vuelva la memoria a ser consecutiva de los días venideros.

En cuanto a mí, soy quien está pidiendo que todo recomience, cuelgo ramos de olivo por ti ante mi puerta, déjalo que tus ciegas manos de recién nacido caigan sobre mí y, como pide el mensajero, no llores por ti.

Elecciones Vascas del 2001. El derecho vasco y la democracia en España.

José Ramón Castaños

1.- Las elecciones vascas han sido una disputa entre dos nacionalismos opuestos: el nacionalismo de reconquista del Estado español y el nacionalismo vasco de resistencia. Esta disputa viene de muy lejos en la historia, pero los antecedentes más inmediatos de la batalla presente se remontan al Pacto abertzale de Lizarra en 1998. En ese pacto se planteaban fórmulas abiertas para la paz, la autodeterminación nacional, la unidad territorial de Euskadi y la soberanía política de sus instituciones de autogobierno, y por eso mismo produjo miedo en los estamentos políticos que sostienen el complejo andamiaje del Estado español.

El Gobierno español planteó las elecciones vascas como un plebiscito entre España (presentada a sí misma como el paradigma de la democracia), y el nacionalismo vasco (presentado como el paradigma de la violencia). Un plebiscito que ha perdido, abriendo a partir de ese hecho una situación política enteramente nueva.

2.- El miedo a perder una parte del territorio del Estado produjo una involución conservadora en todas las estructuras de poder. Esa alarma fue activada como siempre por los poderosos "lobbies" neofranquistas reinstalados en el poder de la mano de Aznar. Ellos ejercen una influencia decisiva sobre el PP y sobre el Gobierno; sobre el poder judicial, los cuerpos policiales y la cadena de mandos del Ejército; sobre los círculos empresariales (CEOE), sobre los medios de comunicación y sobre la Conferencia Episcopal Española. Todos ellos piden lo mismo: reforzar la autoridad del Estado y recuperar la identidad española en las nacionalidades de la periferia.

La ocasión para iniciar ese ensayo general en Euskadi se la ofreció en bandeja la propia ETA con la ruptura de la tregua y de las alianzas políticas de Lizarra asociadas a ella. Para la derecha española resultaba fácil conducir el rechazo moral que los asesinatos de ETA provocan en la sociedad hacia una identificación entre nacionalismo y violencia, de tal modo que quedaran deslegitimadas las iniciativas de paz promovidas desde el PNV como si se tratara de "un intento inhumano por obtener de ellas ventajas políticas asociadas al final de la violencia". Así, con el pretexto de "poner fin a la convivencia del nacionalismo democrático con el terrorismo", se lanzaron a la "reconquista española de Euskadi".

Dicho sea de paso, los objetivos de esta nueva afirmación de la identidad española contra el enemigo interior eran ampliamente compartidos por la opinión pública

española. Se trataba de congelar la autonomía vasca hasta convertir sus instituciones en un apéndice del Estado central; de invertir las políticas de normalización lingüística del euskera a favor del castellano; de frenar la expansión de la identidad nacional vasca, y de reducir el Concierto Económico (la soberanía fiscal), a la nada.

El medio para hacerlo era desalojar al PNV del Gobierno Vasco, y esa posibilidad se la ofreció la izquierda abertzale con la ruptura de Lizarra y el abandono de las instituciones parlamentarias. El nacionalismo democrático quedaba así a merced de una hipotética alianza españolista entre el Partido Popular y el Partido Socialista, y esa posibilidad se la ofreció también ETA, porque su campaña de asesinatos contra dirigentes y concejales socialistas empujó a este partido en brazos de una derecha centralista que le ofrecía desde el Estado mano dura contra la violencia abertzale. El “pacto antiterrorista” suscrito así entre el PP y el PSOE era en realidad un auténtico compromiso de Estado contra el nacionalismo vasco, pues se inicia a partir de él una intensa campaña de bloqueo parlamentario, de hostigamiento desde el Madrid a las instituciones vascas, y de criminalización del nacionalismo democrático al que se identifica groseramente con la violencia, el fascismo, el “gulag”, el holocausto y la xenofobia.

3.- La izquierda española no ha estado a la altura de las circunstancias. La hora de Lizarra era también la hora de la izquierda y de los demócratas españoles, porque desde ella se planteaba la posibilidad de resolver el problema nacional y democratizar el Estado, pero en ese momento de la verdad apreciamos con amargura que esa especie de ciudadanos (los demócratas respetuosos del derecho ajeno), son en España una minoría acorralada por la marea desbordante del nacionalismo de Estado. Quizá por ello resultan ser tanto más valiosos. Ahí están para certificarlo Izquierda Unida, el Foro por el diálogo de Madrid, los movimientos nacionalistas de Catalunya y Galicia, el Partido Socialista de Maragall, o personalidades independientes como Herrero de Miñón. Pero, ¿dónde estuvieron y dónde están todos los demás?. Hasta el momento han estado voluntariamente sometidos a la disciplina que ejerce el Partido Popular desde las instancias del Estado.

Malamente se puede entender que los poderes fácticos (la corona, los cuerpos policiales y las asociaciones de empresarios) se acomoden al Gobierno. Decimos malamente porque no resulta inteligente colocarse de espaldas a la normalización de la convivencia entre las nacionalidades, pero al fin y al cabo se entiende esa “unidad de acción” o “comunidad de intereses”. Se entiende también que el Gobierno haya intentado disciplinar, sin conseguirlo, a la Conferencia Episcopal española para obtener de ella un plus de legitimación moral añadida, o que haya buscado por medio del dinero y las prebendas la estimable colaboración de todos los medios de comunicación, pero resulta difícil entender y sobre todo digerir, la infamia de unos profesionales de la información convertidos en difamadores, el oprobio de unos intelectuales transformados en apologetas sumisos al poder (sólo se salvan Saramago, Vázquez Montalbán y unos pocos más), o la vergüenza de ver a un Partido Socialista convertido en monaguillo de la derecha, y a unos Sindicatos (CCOO y UGT), transformados en adalides del Estado contra el derecho de las nacionalidades. El celo que han mostrado en buscar la colaboración de los sindicatos europeos contra el nacionalismo vasco es la expresión más dolorosa de unos dirigentes sindicales demasiado corruptos como para hacer frente a la sumisión demandada por el Estado, y al parecer debida por aquello de que “nadie muerde la mano de quien le da de comer”.

4.- Los resultados electorales expresan sin embargo una derrota del Estado y una victoria imponderable del nacionalismo vasco. El cuadro comparativo que ofrecemos a continuación no ofrece lugar a dudas.

La participación electoral ha sido una de las más altas que se recuerda en las democracias occidentales (el 80% del censo), lo que da una idea de la enorme movilización ciudadana que se ha producido en defensa de la autonomía vasca.

Las modificaciones respecto a 1998 han sido muy pocas si comparamos la relación entre el “bloque autodeterminista” (conjunto de partidos que suscribieron la declaración de Lizarra), y el “bloque españolista” (PP-PSOE), pero ese hecho es muy significativo si consideramos las duras circunstancias que han rodeado al victoria del nacionalismo democrático: la durísima intervención del Estado de un lado, y la no menos dura campaña de asesinatos políticos de ETA, de otro.

Hay que considerar así mismo las modificaciones que se han producido en el interior de cada uno de esos bloques. A saber, el fracaso de la derecha españolista en su intento de minorizar al Partido Socialista (la relación entre ellos queda igual a como estaba), y el espectacular desplazamiento de votos de la izquierda abertzale (EH), hacia el nacionalismo democrático (PNV).

La interpretación política de estos resultados ofrece sin embargo un enorme interés para sondear las perspectivas de la política vasca. Esta es nuestra opinión al respecto.

| CUADRO COMPARATIVO | | | | | | |
|---|----------------|--------------|-----------|----------------|--------------|-----------|
| PARTIDO | VOTOS 2001 | % | ESCAÑOS | VOTOS 1998 | % | ESCAÑOS |
| PNV-EA | 604.444 | 42,72 | 33 | 458.967 | 36,96 | 27 |
| HB-EH | 143.139 | 10,12 | 7 | 224.001 | 17,91 | 14 |
| IU | 78.862 | 5,58 | 3 | 71.064 | 5,68 | 2 |
| Total Partidos autodeterministas | 826.445 | 58,42 | 43 | 754.032 | 60,55 | 43 |
| PP-UA | 326.933 | 23,12 | 19 | 276.481 | 21,65 | 18 |
| PSE-EE | 253.195 | 17,90 | 13 | 220.052 | 17,60 | 14 |
| Total Partidos españolistas | 580.128 | 41,02 | 32 | 496.533 | 39,25 | 32 |

5.- La alternancia españolista en las instituciones vascas parece ser un imposible metafísico. La explicación que ha dado el Gobierno español a su fracaso es decir que la sociedad vasca no está madura para el cambio que proponen. De esta lectura política hay que deducir que el Estado continuará su presión centralista contra Euskadi bajo otras formas más sutiles y menos agresivas. De eso nadie duda. Pero si nos detenemos un instante a observar las tendencias electorales de los últimos 25 años, observaremos que la mayoría nacionalista ha sido una constante que oscila entre el 58 y el 60% del electorado, y que este hecho nos autoriza a suponer que la conciencia nacional vasca se ha instalado en la sociedad hasta el punto de no retorno, y que por ello mismo resulta impensable la posibilidad de desalojarlo de las instituciones con discursos y proyectos de uniformización nacional española. Esa pretensión es, sencillamente, una quimera.

6.- El nacionalismo democrático ha consolidado su hegemonía política. El PNV ha ganado en el 96% de los Municipios, incluidas las grandes ciudades y los núcleos urbanos de población obrera y emigrante, donde el socialismo estaba fuertemente arraigado desde principios del siglo XIX.

Esta concentración del voto en el PNV es una reacción de orgullo y dignidad nacional contra la agresión exterior del Estado. Es algo así como decirles a los partidos españoles: "no vengais de fuera a decirnos qué es lo que debemos ser, porque sabemos que somos una nación diferenciada que quiere gobernarse así misma por su propia gente". La agresión a ese sentimiento ha producido una reacción de autodefensa que está en la base de la hegemonía nacionalista, pero no explica sin embargo porqué se ha concentrado con tanta fuerza en el nacionalismo democrático. Para buscar una explicación hay que referirse al rotundo rechazo de la sociedad vasca a los asesinatos de ETA y a la complicidad de la izquierda abertzale con ella.

7.- El retroceso de la izquierda abertzale es un voto de castigo de su propia gente contra ETA. Euskal Herritarrok ha perdido el 36% de sus votos y el 50% de sus escaños. Estos datos confirman que teníamos razón todos cuantos dijimos al final de la tregua que los asesinatos de ETA eran el suicidio de la izquierda vasca. Los 80.000 votos perdidos por la izquierda abertzale han ido a parar casi íntegramente a la coalición PNV-EA. No son votos perdidos sino votos prestados, y pueden volver a recuperarse si la izquierda abertzale decide emprender un movimiento de regeneración política, imponiendo a ETA una tregua definitiva o rompiendo políticamente con ella.

El traspaso de la hegemonía política del movimiento abertzale al nacionalismo burgués es la consecuencia inevitable de la ruptura de la tregua. El despropósito estratégico de romper los pactos de Lizarra ha invertido el curso de la iniciativa política en el interior del movimiento abertzale. Hasta ese momento la iniciativa correspondía a la izquierda. La batalla interior entre los partidarios de dejar las cosas como están (autonomía tutelada desde el Estado), y los partidarios de reivindicar la soberanía política, estaba decantándose a favor de los segundos, y el peso de la izquierda social sobre el contenido que debiera tomar la construcción nacional, empezaba a ser decisivo gracias a la poderosa influencia del sindicalismo abertzale. Se estaban ganando aliados nuevos dentro y fuera del país, y era cuestión de tiempo que consiguiéramos consolidar una opinión pública ampliamente mayoritaria alrededor de las ideas autodeterministas. Con ella en la mano, y apoyándonos en una buena política de alianzas hacia las nacionalidades históricas (Declaración de Barcelona entre nacionalistas catalanes, vascos y gallegos), y hacia la izquierda española (PSE-IU-Sindicatos) se podía abrir la puerta a una reforma democrática del Estado (segunda transición).

Todo esto era posible hacerlo con las armas silenciadas y con una propuesta de articulación política de Euskadi que tuviera en cuenta la opinión de cada uno de sus territorios, así como la desigualdad de la conciencia entre ellos, pero los planteamientos finalistas de ETA y el posterior regreso a las armas dilapidó esa posibilidad, de tal modo que el nuevo curso político deberá emprenderse bajo la hegemonía política del nacionalismo moderado.

8.- Las explicaciones del fracaso electoral que han dado los dirigentes de la izquierda abertzale no son convincentes. Todo lo que se les ha ocurrido decir es que la Mesa Nacional no ha sabido explicar su alternativa política, y que el miedo a la derecha españolista ha concentrado el voto en el PNV. No se quiere entrar en la crítica de la

estrategia política, y se culpa de paso a los críticos de la corriente Aralar de haber contribuido a la dispersión del voto abertzale con sus críticas a la acción de ETA. Culpar al otro de los errores propios es una grosería que se puede perdonar de no ser porque lleva implícita la renuncia al análisis crítico de las causas de la derrota, y porque ese ejercicio de autocomplacencia entrapa a la izquierda abertzale en el lugar del autismo político. Esto es algo que nos preocupa sobremanera porque obstruye la posibilidad de sacar a la izquierda abertzale y a la política vasca del atolladero en que se encuentra.

Preocupa sobremanera que se oculte el nefasto papel que ha tenido y tiene la acción de ETA; como si ella fuese un tabú del que no se puede hablar. Preocupa que no se valore (o se desprecie) la importancia que ha tenido el profundo rechazo de la sociedad y del electorado de EH a la ruptura injustificada de la tregua. Preocupa que en lugar de valorar este hecho como expresión de la madurez política de un pueblo, se desprecie como si fuera la claudicación política de los débiles y pusilánimes. Preocupa que no se quiera reconocer que la aceptación sumisa del liderazgo político de ETA sobre la izquierda abertzale está en la base de su enorme crisis de credibilidad. Preocupa que no se reconozca el hecho de que ha sido la ruptura de los compromisos políticos adquiridos en Lizarra y el abandono del Parlamento Vasco lo que permitió al PP y al PSOE hacer su labor de obstrucción institucional y de cerco político a la autonomía. Preocupa que no se quiera reconocer que la campaña electoral de EH ha estado centrada exclusivamente en la crítica del PNV (utilización abusiva e insultante del adjetivo "unionista" para acusarle injustificadamente de claudicación al Estado), hasta el punto que se terminó formado una pinza contra él, entre el "hostigamiento por la izquierda" realizado desde ETA y EH, y el "hostigamiento por la derecha" realizado desde el pacto PP-PSOE. Los votos perdidos por EH son así la consecuencia de un doble rechazo: del rechazo a la acción de ETA, y de rechazo a la política de acoso contra el PNV.

La izquierda abertzale puede y debe abrir una profunda reflexión sobre estas y otras cuestiones similares, pues le va en ello la posibilidad de recuperar la credibilidad perdida y los votos prestados al nacionalismo democrático. En esto tiene razón Otegui cuando afirma que los 80.000 votos perdidos pueden ser recuperados, aunque le haya faltado decir que la condición para ello es su propio desmarque crítico de la acción de ETA, pues el corte que se ha producido entre ella y esa masa social crítica del abertzalismo parece ser un corte irreversible.

9.- Izquierda Unida tiene dificultades objetivas, (de identidad y de naturaleza), para ser alternativa de recambio a la izquierda abertzale.

Cuando hablemos de IU-EB hay que empezar diciendo que su mensaje político ha sido en estas elecciones el más radical contra el Estado y el más comprometido de su historia en la defensa de los derechos nacionales. Ese compromiso le ha supuesto el insulto y la calumnia de los medios de comunicación afines al Estado, pero le ha permitido también ganar el respeto de la izquierda y del nacionalismo democrático. IU-EB ha sido en estas elecciones un voto útil porque sumaba a su condición de izquierda su compromiso de apoyo al presidente del Gobierno Vasco contra los ataques del centralismo.

Aún así, no ha podido recoger al sector crítico de la izquierda abertzale, y ese hecho constituye o debe constituir un importante factor de análisis, porque nos ofrece algunas pistas de sumo interés para pensar en iniciativas de recomposición o regeneración de la izquierda vasca.

El hecho de que haya sido tan fuerte la pérdida de votos de la izquierda abertzale (80.000), y tan pequeña la recuperación que de ellos ha hecho IU (un poco más de 7.000 votos), tendrá causas múltiples pero es elocuente de lo que decimos.

Entre esa multiplicidad de causas cabe señalar estas: (a), la identificación ideológica (nacionalismo) entre los críticos de ETA y el PNV; (b), la fuerte presión al voto útil hacia el nacionalismo democrático para cerrar el paso a la derecha españolista; (c), la ausencia de raíces nacionales vascas; o lo que es lo mismo, la percepción de que IU-EB es un partido de fidelidad española que ofrece dudas sobre la incondicionalidad de su identidad vasca; (d), la desconfianza histórica (justificada), que el abertzalismo ha tenido en el Partido Comunista y en sus sucesores de Izquierda Unida. Puede haber otras, pero estas me parecen razones suficientes.

El hecho es en sí mismo relevante puesto que evidencia algo que hemos venido diciendo de un tiempo a esta parte: que a pesar de su positiva evolución política, IU no puede ser el polo de referencia alternativo a la crisis de ETA; que ese polo hay que construirlo en colaboración desde dentro de la izquierda abertzale y desde fuera de ella, junto a las otras izquierdas que hay a su lado, y que el reagrupamiento necesario de las izquierdas vascas hoy dispersas requiere marcos nacionales de organización y perfiles identitarios claramente identificados con la construcción nacional vasca. No decimos esto como observación crítica hacia nadie, sino como observación de un hecho que debiera ser punto de partida de las reflexiones políticas en Izquierda Unida.

10.- El triunfo del nacionalismo democrático legitima las ofertas hechas desde la declaración de Lizarra, y esta circunstancia vuelve a poner en el centro de la actualidad política el problema de la autodeterminación nacional. Estas cuestiones son inevitables si nos atenemos a la naturaleza del problema vasco, a la intensidad de esas demandas en la sociedad, a las promesas hechas por el nacionalismo democrático (exigencia de soberanía compartida de las nacionalidades en Europa), y a la expansión de esa misma idea en Cataluña y Galicia. Algo de eso mismo se puede apreciar también en las recomendaciones que el empresariado vasco acaba de realizar al Gobierno de Aznar: “comprender a los vascos para flexibilizar la política autonómica y el modelo de Estado”, pero aún así, las resistencias del Estado español a su reforma democrática serán demasiado fuertes como para suponer que la victoria del nacionalismo en las urnas abrirá un camino recto hacia la autodeterminación. Nada de eso. El derecho de los vascos a decidir libremente su futuro nacional está planteado como un problema de actualidad política inaplazable, pero esto no quiere decir que resulte fácil conseguirlo.

11.- Las ambivalencias del PNV son una consecuencia de esa dificultad. Su victoria electoral le otorga un margen de maniobra tanto más amplio a como intensa ha sido la campaña de agresión nacional que ha tenido que soportar, pero si este es un dato a favor del “ala soberanista del partido”, no lo es menos el dato en contra que suponen las enormes presiones políticas que recibirá por los dos extremos de la situación (PP y ETA respectivamente), lo que contribuirá a su vez a estrechar su margen de maniobra y a moderar su discurso.

Hay que suponer un cierto desarme verbal y una reducción de las tensiones entre los partidos políticos, pero de ese hecho no hay que deducir que desaparezcan las presiones centralistas del Estado sobre la autonomía vasca. Hay que recordar que esas presiones son la consecuencia inevitable del cambio político que se ha producido en la estructura

de poder del Estado (reacción conservadora de corte neofranquista), y que ese poder seguirá actuando con tanta más fuerza a como débiles sean las alianzas políticas entre las nacionalidades de la periferia. El polo opuesto a ese, ETA, actuará por el otro extremo con toda la fuerza de que es capaz. Sus objetivos parecen ser los mismos de siempre: "no habrá normalización democrática a menos que se dialogue con nosotros"; y el diálogo sólo es aceptable a su vez si se reconoce la unidad territorial de Euskadi y la soberanía de sus instituciones políticas". Como quiera que para hacer eso se necesita la colaboración del PNV y del sindicalismo abertzale, es de suponer que la acción de ETA vaya dirigida a impedir por todos los medios la reedición de las viejas alianzas políticas entre el PNV y el PSOE, y que, en consecuencia, actúe contra este último. Sea como fuere, hay que suponer una escalada de atentados que empujará el PNV hacia la moderación, y que las alianzas antiterroristas ocupen el lugar preferente que debieran ocupar las alianzas políticas para la construcción nacional.

Este juego de presiones múltiples provocará un movimiento pendular entre el radicalismo político del partido (Arzallus-Egibar), y el pragmatismo del Gobierno (el lehendakari Ibarretxe); entre la audacia política a la búsqueda de salidas al problema de la paz, y el conservadurismo de la gestión pública. La diferencia con el período precedente es que no pueden reeditarse ninguno de los ensayos anteriores porque todos ellos han fracasado. No es posible ni la vuelta al Pacto de Lizarra, ni la solución policial a un problema que es de naturaleza política, ni la reedición del pacto antiterrorista de Ajuria-Enea (reconocimiento del carácter político del problema pero aplazamiento de soluciones al abandono previo de la violencia). Hace falta ensayar otras fórmulas de salida política a partir de los nuevos ingredientes que ofrece la situación, pero el tiempo político necesario para corregir las fuertes inercias de la disputa precedente será más largo de lo que a primera vista parece.

12.- Hace falta reconstruir una nueva mayoría social sobre la base de la declaración institucional del Parlamento Vasco a favor de la autodeterminación nacional. Esto es posible si tenemos en cuenta que los tres pilares del programa de Gobierno del PNV tienen una legitimación social más amplia de la que ofrecen sus propios votos en sentido estricto. La paz (exigencia a ETA de tregua definitiva), el diálogo (emplazamiento a los extremos para buscar fórmulas de consenso democrático), y el respeto a la libre decisión de los vascos en todo lo concerniente al autogobierno y a la unidad territorial, forman parte de un sentimiento colectivo que traspasa las fronteras del nacionalismo democrático.

Con esa legitimidad en la mano, y, dicho sea de paso, con el apoyo de Eusko Alkartasuna, de Izquierda Unida y de la mayoría sindical vasca, el PNV puede empezar a resolver el problema de la división interior de la sociedad vasca. No estamos pensando en un consenso general que agrupe a todos los partidos (eso es imposible), sino en un consenso mayoritario que pueda ejercer su hegemonía política sin demasiados sobresaltos ni convulsiones. No es descabellado pensar que la base política en la que pudiera descansar esa idea de construcción nacional y de integración ciudadana fuese la declaración sobre el derecho de autodeterminación nacional del Parlamento Vasco, elaborada y suscrita conjuntamente por el PNV y el PSOE a mediados de los años 90. Ese precedente indica que ello es posible.

13.- El segundo paso sería someter a referéndum popular la propuesta política previamente pactada. El método plebiscitario resulta imprescindible para que no ocurra lo que tantas veces ha ocurrido con las solemnes declaraciones autodeterministas de las instituciones públicas.

Esas declaraciones son papel mojado si no vienen acompañadas de la voluntad de convertirlas en hechos operativos, y el problema ha sido hasta el presente que nadie en Euskadi ha sabido cómo hacer eso. En la izquierda siempre hemos tenido la perspectiva de la declaración unilateral de soberanía política al estilo de la proclamación de la República Catalana en los años 30, pero todos sabemos que las condiciones de hoy no son las de entonces, y que la desobediencia civil así aplicada es un acto de rebeldía política de tipo revolucionario que nadie está dispuesto a hacer hoy, de tal modo que entre ese "lamento por lo imposible" y las declaraciones literarias hechas tan sólo para la galería, hay un terreno intermedio en el que reside la posibilidad de encontrar una vía de salida al problema que nos ocupa. Ese intermedio es el plebiscito ciudadano; el referéndum popular porque permite pasar de la declaración de intenciones a la acción, sin que esa acción sea un llamamiento extemporáneo a la rebelión nacional. Por ese método se puede conseguir la unidad política y la movilización ciudadana necesarias para abrir el melón de la reforma democrática del Estado.

14.- Hace falta un nuevo liderazgo en el Partido Socialista para hacerle regresar al pacto con el nacionalismo democrático. No creemos que el medio para hacerlo sea ofrecerles la entrada en el Gobierno como se ha sugerido desde Izquierda Unida, porque eso equivale a hacer un cambio superficial de imagen sin llegar al fondo de los problemas de identidad que tiene. Ese partido necesita hacer una modificación radical de su discurso nacional y de sus alianzas políticas, y para eso vienen bien las catarsis colectivas y el recambio de dirigentes. Tiene razón Arzallus cuando en los debates para la formación del nuevo gobierno recuerda aquello de "los conversos a la cola", porque ilustra muy bien la crítica del oportunismo y la banalidad de los acuerdos que no tengan la solidez de la convicción.

El problema del socialismo vasco es que no se comportan ni como socialistas ni como vascos. Ese partido tiene que renunciar de una vez por todas a su antidemocrática idea de que sólo los gobiernos de coalición entre el PNV como representante del nacionalismo, y ellos mismos como representantes del españolismo, es el único gobierno que puede garantizar el pluralismo y la convivencia en la sociedad. Esa teoría divide al pueblo vasco en comunidades opuestas, y empuja a los socialistas a tomar el discurso del españolismo para asentar sus nichos de poder. El Partido Socialista necesita dirigentes más sensibles al problema nacional y al derecho de los pueblos. Dirigentes que no tenga complejos nacionales ni miedos a la integración ciudadana en una comunidad política diferenciada de la española.

La movilización ciudadana en apoyo de las iniciativas de diálogo como las que promueven colectivos pacifistas como Elkarri, puede ser decisiva a su vez para remover los obstáculos que frenan el necesario giro político que los socialistas tienen que dar a su política.

15.- Euskadi es una oportunidad de democracia para todas las nacionalidades y para la izquierda española; a las que de otra parte, también necesitamos. Sobre la primera de estas dos cuestiones poco más queda por decir que no haya sido dicho. Quizás recordar que esas sentidas palabras del consejero delegado del diario El País, José Luis Cebrían, que dijo "sentirse aliviado" por el triunfo del nacionalismo democrático en las elecciones vascas, reflejan bien lo que hay de fondo en el conflicto vasco: la posibilidad de una reforma democrática del Estado, en la que se supone que debiera estar interesada la izquierda española, o su contraria, la contrarreforma conservadora. Nos gustaría que su "alivio" fuera también un llamamiento al compromiso de esa izquierda con el derecho vasco.

Si tomamos el problema desde nuestro lado; desde el lado vasco, apreciaremos también que Euskadi sola no puede, y que en el hipotético caso de que obtuviésemos una mayoría de 3/4 y una movilización ciudadana alrededor de ella, tampoco tendríamos correlación de fuerzas para democratizar el Estado español por nosotros mismos. Se necesita construir una comunidad de intereses compartidos entre las nacionalidades y la izquierda española para poner cerco al Estado centralista. Esa alianza pasa hoy por la solidaridad con Euskadi porque es el nacionalismo vasco quien ha puesto rumbo a la democracia española. El baño de democracia que necesita la sociedad española pasa por el respeto a la diferencia de las nacionalidades y a su derecho de autodeterminación. Esa sociedad necesita dejar de pensar en la idea imperial de una España uniforme, porque esa altanería trasnochada está hecha de sumisión al poder del Estado centralista y de despotismo contra sus iguales a los que no reconoce el derecho a la diferencia.

Es la hora de los demócratas españoles. Todos aquellos que han sentido alivio por la derrota del Estado en Euskadi tienen ahora una buena oportunidad de retomar la estela abierta por el Foro para el diálogo de Madrid; la estela de los socialistas catalanes (Maragall); la estela de Izquierda Unida y de Herrero de Miñón; la estela de la declaración de Barcelona entre los nacionalistas gallegos, catalanes y vascos, o la estela de la Conferencia de paz promovida desde Elkarri para construir lugares de encuentro desde la movilización ciudadana y la solidaridad de los demócratas. Además es posible.

ANDRA

El periódico Independiente de la mujer
Nacido en enero en Euskal Herria

Somos un grupo de periodistas, defensoras de los derechos de las mujeres e independientes de cualquier organización. Nuestro propósito es cubrir un hueco existente en el mercado editorial vasco y del resto del estado español.

Además de ser un vehículo de difusión de las actividades de todos los grupos que trabajan en favor de las mujeres, nos gustaría servir de marco de debate y análisis de todo tipo de cuestiones que nos atañen, por lo que esperamos que nos inundéis de cartas y colaboraciones.

Andra desea, por último, ser soporte de las inquietudes y necesidades de otros grupos sociales marginados por los medios de comunicación por su talante crítico o porque sus actividades no son consideradas "de interés".

Esta iniciativa nace del esfuerzo personal y económico de un reducido grupo de mujeres y tiene vocación de continuidad.

Esperamos vuestro apoyo, comprando el periódico suscribiéndoos y ayudando a hacerlo mejor con vuestras sugerencias; vuestra colaboración...

Un abrazo feminista

Comité de Redacción de *Andra*

andraegunkaria@wanadoo.es • Andra-periodico.com • Teléfono: 94-621.84.07



RICKY MARTIN 2001

6 nuestra gente

Recordando a Pau Pons

Martí Caussa

Hay personas cuya vida parece marcada por un acontecimiento. Pau Pons fue una de ellas y Mayo de 1968 el hecho que le marcó: aquel viento impetuoso de revuelta que llegó de París, Praga y Vietnam, que se fue extendiendo por Roma, Donosti, Madrid, Barcelona y tantas otras ciudades, que nos hizo creer que cambiar el mundo era, por fin, posible.

Uno de los frutos de ese viento de revuelta fue la LCR, de la cual Pau Pons fue fundador y la persona públicamente más conocida. La muerte de Franco y el ejemplo portugués nos llevó a creer que nosotros tendríamos también nuestra "revolución de los claveles". Pau, y muchos otros y otras, dedicaron lo mejor de su juventud a trabajar por esta esperanza.

Pero no fue posible. Fuimos derrotados. No de un solo golpe, pero sí poco a poco. Los vientos de la revuelta fueron apagándose y con la calma recuperada, los gobiernos se dedicaron a continuar buscando el bienestar de los de siempre.

La calma también fue separando a los antiguos compañeros de manifestación y barricada. Incluso algunos se pasaron hábilmente de bando y hoy se cuentan entre los triunfadores: ministros, subsecretarios, consejeros, eminentes periodistas, escritores... Muchos otros no. Entre ellos, Pau. Éstos son los perdedores: algunos muy activos y organizados, otro menos o nada, pero conservando todos y todas la dignidad de los combatientes y los valores de la revuelta.

Tiempo atrás, Pau me había dicho: "*No es que no me haya gustado triunfar, es que no he tenido el cuajo necesario para hacerlo*". En el mundo que ha surgido de la calma, los valores y la dignidad están reñidas, muchas veces, con el éxito y, a veces, hacen compañía a la marginación, la soledad y la tristeza.

En definitiva, diría el Pau, nadie llorará por nosotros cuando hayamos muerto. Y tendría razón. Una parte de la razón. Sólo una parte de la razón.

Porque llegará el día en el que nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos, volverán a sentir aquel viento impetuoso de revuelta que marcó para siempre la vida de Pau. Y cuando llegue ese día, ellos y ellas no volverán la mirada hacia los engreídos triunfadores de hoy, sino hacia los hechos, las palabras y las imágenes de una multitud de personas anónimas que después de la derrota, durante el tiempo de la calma podrida, conservaron los valores y la dignidad de los viejos combatientes y mantuvieron la esperanza en la revuelta.

Y se preguntarán: ¿cómo serían aquellos locos que pretendieron cambiar el mundo? Entonces Pau, amigo, aunque no lo sepan, estarán preguntando por ti.

(Traducción: M. Romero)



BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN **VIENTO SUR**
POR UNA IZQUIERDA ALTERNATIVA

c/ Limón, 20 - bajo ext. dcha. • 28015 - Madrid • Tel.: 91 429 77 37 / Fax: 91 559 94 65
 Correo electrónico: vientosur@nodo50.org

Apellidos Nombre

Calle Nº Escalera Piso Puerta

Localidad Provincia C.P.

Correo electrónico

SUSCRIPCIÓN NUEVA SUSCRIPCIÓN RENOVADA CÓDIGO AÑO ANTERIOR

MODALIDAD DE SUSCRIPCIÓN ANUAL

ESTADO ENVÍO COMO IMPRESO 5.400 pta * EXTRANJERO ENVÍO COMO IMPRESO 8.000 pta (45 \$)
ESPAÑOL ENVÍO COMO CARTA 6.500 pta ENVÍO COMO CARTA 11.000 pta (60 \$)

SUSCRIPCIÓN DE APOYO

11.000 pta

MODALIDAD DE ENVÍO

ENTREGA EN MANO
 ENVÍO POR CORREO

MODALIDAD DE PAGO

EFFECTIVO
 DOMICILIACIÓN BANCARIA

DATOS BANCARIOS

BANCAJA. Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante. c/ Caballero de Gracia, 28 - 28013 Madrid
 Número de cuenta:
2077 // 0320 // 33 // 3100822631

DOMICILIACIÓN BANCARIA - AUTORIZACIÓN DE PAGO

Apellidos Nombre

Calle Nº Escalera Piso Puerta

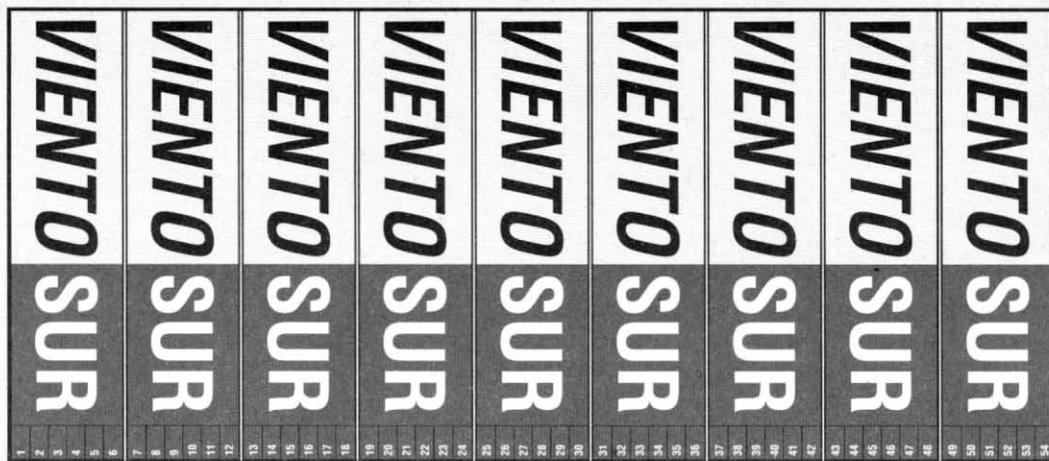
Localidad Provincia C.P.

| ENTIDAD | OFICINA | CONTROL | NÚM. CUENTA |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

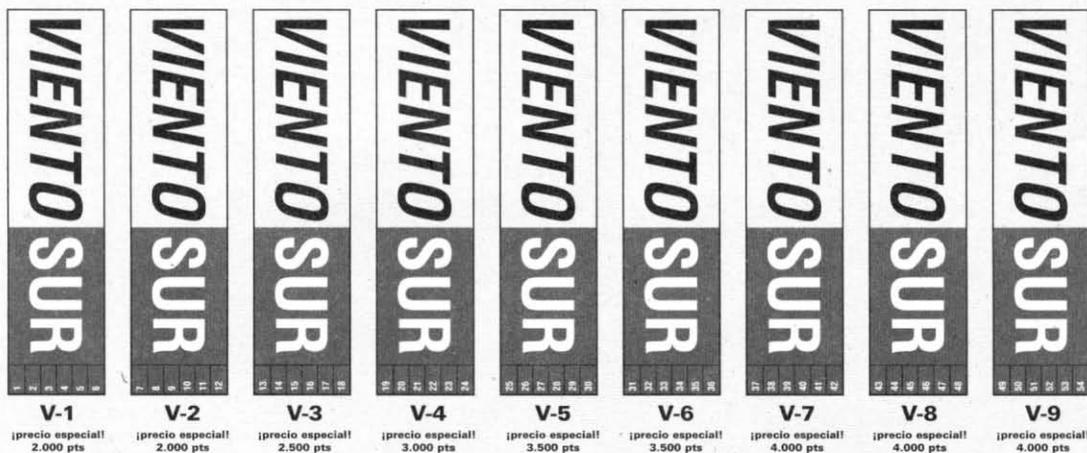
Fecha:

Firma:

¡Completa tu colección!



Colección completa 54 números ¡precio especial 18.300 pts! (más gastos de envío)



V-1
¡precio especial!
2.000 pts

V-2
¡precio especial!
2.000 pts

V-3
¡precio especial!
2.500 pts

V-4
¡precio especial!
3.000 pts

V-5
¡precio especial!
3.500 pts

V-6
¡precio especial!
3.500 pts

V-7
¡precio especial!
4.000 pts

V-8
¡precio especial!
4.000 pts

V-9
¡precio especial!
4.000 pts

VIENTO SUR
 ● La izquierda, después de la caída **Alain Bihl, Toni Domènech, Josesxo Fagoaga, Eugenio del Río, Miguel Romero**
 ● Europa Oriental. *Del plan al clan.* **Catherine Verla** ● Argelia. *Cuarteres contra mezzitas.* **Chawki Salhi, Samira Fellah** ● Europa Occidental. *Antes y después de Maastricht.* **Claude Gabriel** ● El Salvador. *Entrevista al comandante Mario López (FMLN).* **Eric Toussaint** ● Brasil. *Voces del PT.* **José María Galante**

EJEMPLARES SUELTOS SEGÚN PRECIO DE PORTADA

- Números del
- V-1: 350 pts/ud**
 - V-2: 350 pts/ud**
 - V-3: 400 pts/ud**
 - V-4: 700 pts/ud**
 - V-5: 800 pts/ud**
 - V-6: 800 pts/ud**
 - V-7: 900 pts/ud**
 - V-8: 900 pts/ud**
 - V-9: 900 pts/ud**

VIENTO SUR

- 20-N 1975. *El día de la Bestia.* **Josep Borjús, José Bahar, Julio Sotelo, Miguel Romero, Aitana Gari, Oskar Manes**
- Para construir el internacionalismo del siglo XXI. *Daniel Brevint*
- Debates feministas en Córdoba. **Jaiza Montero, Begoña Zubala**
- Niza. *Nueva etapa en la lucha contra la globalización.* **Josep Eguren, Eusebio Duran**
- Palestina. *La Intifada de Al-Aqsa.* **Miguel Manes, Nasser Ibrahim, Tzveti Haskel**
- Israel. *Crítica del "campo de la paz".* **Michel Wardanski**
- México. *Los tiempos y los espacios del zapatismo.* **Sergio Rodríguez**
- Argentina. *El desafío de la Huelga General.* **Daniel Perera**
- La lucha de Via Campesina. **En memoria de Lucía González.**



*“... un viento sur que lleva
colmillos, girasoles, alfabetos
y una pila de Volta con avispas ahogadas”.*

Federico García Lorca Poeta en Nueva York